

PARTIDO UNIFICADO MARIATEGUISTA

-

PUM



**Denuncias
2001
Parte 7**

05 OCT. 2001
2093 - dos mil noventa y tres

00001

28-09-01

Interponemos denuncia por la comisión de diversos delitos mediante el uso de dispositivos secretos, ~~9:88~~ contra quienes resulten responsables.

SEÑORA FISCAL PENAL ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CONEXOS

Los Congresistas de la República que suscriben, Sr. JAVIER DIEZ CANSECO CISNEROS, Sr. WALTER ALEJOS CALDERÓN, Sr. MÁXIMO MENA MELGAREJO, Sr. KUENNEN FRANCEZA MARABOTTO, Sr. JUAN VALDIVIA ROMERO, integrantes de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001; Sr. PEDRO MORALES MANSILLA y Sr. MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO, Ex Presidente y Ex Miembro, respectivamente, de la Comisión Investigadora del Uso de los Recursos de la Privatización y otros de la Caja Fiscal a través de dispositivos secretos; todos señalando domicilio procesal en el Palacio Legislativo de Plaza Bolívar s/n. Lima 01, a Ud. atentamente decimos:

I. PETITORIO

Al amparo del Art. 97º de la Constitución y del Art. 2º del Código de Procedimientos Penales, interponemos **DENUNCIA PENAL** contra las siguientes personas (incluyendo ex Ministros que ya no gozan del privilegio de la acusación constitucional):

1. Contra el ex Primer Ministro Dante Córdova Blanco (quien refrendó los DU 046-95, 01-96 y 02-96), por la comisión del delito omisión de denuncia tipificado por el artículo 407º del Código Penal. Asimismo, pedimos que el Ministerio Público evalúe la posible participación del Sr. Córdova Blanco en los delitos de asociación ilícita para delinquir, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles, tipificados por los Arts. 317º, 389º y 397º del Código Penal.
2. Contra el ex Ministro de Defensa Víctor Malca Villanueva (quien refrendó los DU 009-95, 020-95, 023-95, 028-95, 039-95 y 046-95), por la comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir, malversación de fondos públicos, colusión ilegal, peculado, negociaciones incompatibles, falsificación de documentos públicos, ocultamiento y destrucción de documentos y omisión de denuncia, tipificados por los Arts. 317º, 389º, 384º, 387º, 397º, 427º, 430º y 407º del Código Penal.
3. Contra el ex Ministro de Agricultura Absalón Vásquez Villanueva (quien participó en la sesiones de aprobación de los DU 009-95, 020-95, 023-95, 046-95,01-96 y 020-96), contra el ex Ministro de Educación Pedro Villena Hidalgo (quien participó en la sesiones de aprobación de los DU 009-95, 020-95 y 023-95), contra el ex Ministro de Salud Eduardo Yong Motta (quien participó en las sesiones de aprobación de los DU 009-95, 020-95, 023-95, 046-95,01-96 y 020-96), contra el ex Ministro de Trabajo Augusto Antonioli Vásquez (quien participó en la sesiones de aprobación de los DU 009-95, 020-95 y 023-95), contra el ex Ministro de Transportes Juan Castilla Meza, (quien participó en las sesiones de aprobación de los DU 009-95, 020-95, 023-95 y 046-95), contra el ex Ministro de Pesquería Jaime Sobero Taira (quien participó en las sesiones de aprobación de los DU 009-95, 020-95, 023-95, 046-95,01-96 y 020-96), contra la ex Ministra de la Presidencia María Luisa Federici (quien participó en la

sesiones de aprobación de los DU 009-95, 020-95 y 023-95), contra el ex Ministro de Justicia Fernando Vega Santa Gadea (quien participó en las sesiones de aprobación de los DU 020-95, 023-95 y 046-95), contra el ex Ministro de Energía y Minas Amado Yataco Medina (quien participó en la sesiones de aprobación de los D046-95,01-96 y 020-96), contra el ex Ministro de Transportes Manuel Vara Ochoa (quien participó en la sesiones de aprobación de los DU 046-95,01-96 y 020-96), contra el ex Ministro de la Presidencia Jaime Yoshiyama Tanaka (quien participó en las sesiones de aprobación de los DU 01-96 y 020-96), y contra el ex Ministro de Trabajo Sandro Fuentes Acurio (quien participó en las sesiones de aprobación de los DU 046-95,01-96 y 020-96); a todos por la comisión del delito de omisión de denuncia tipificado por el Art. 407º del Código Penal. Debe investigarse la participación de los denunciados en la comisión de complicidad primaria en los delitos de malversación de fondos, peculado, colusión ilegal y negociaciones incompatibles, tipificados en los Arts. 25 pf. 1 y 389, 387, 384 y 397 del Código Penal.

4. Contra los oficiales que se nombran a continuación, por la comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir, malversación de fondos públicos, colusión ilegal, peculado, negociaciones incompatibles, falsificación de documentos públicos, ocultamiento y destrucción de documentos y omisión de denuncia, tipificados por los Arts. 317º, 389º, 384º, 387º, 397º, 427º, 430º y 407º del Código Penal.

- o General E.P. Nicolás de Bari Hermoza Ríos
- o General FAP Enrique Astete Baca
- o General FAP Waldo Richter Cruz
- o General FAP Elesván Bello Vásquez
- o General FAP Danfer Suárez Carranza
- o General E.P. José Villanueva Ruesta
- o Almirante A.P. Antonio Américo Ibárcena Amico
- o Mayor General FAP Rolando Magni Flores
- o Coronel FAP Rubén Mimbela Velarde
- o Mayor General FAP Claudio Martínez Gandolfo
- o Coronel FAP Felipe Reyes Morales
- o Coronel FAP Víctor Perea Zegarra
- o Coronel FAP Fernando Velarde Ramírez
- o Coronel FAP Francisco Doberttin Culqui;
- o Mayor General FAP Carlos Modenesi Cobian,
- o Coronel FAP Carlos Palacios Rossi,
- o Coronel FAP Néstor Rodríguez Vargas
- o Coronel FAP Carlos de la Rosa Cabrera
- o Comandante Ricardo Vilchez Raa
- o Coronel FAP Oscar Zegarra Chávez
- o Coronel FAP Jorge López Ponce
- o Comandante FAP René Alfaro Castellanos
- o Comandante FAP Jorge Custodio León,
- o Mayor FAP Jesús Carrasco Becerra
- o Teniente General FAP Luis Bouroncle Loayza
- o Teniente General FAP Orlando Butron Horna
- o Mayor General FAP Pablo Carbone Merino
- o Mayor General FAP Enrique González Vásquez.
- o Mayor General FAP Javier Pasco Valladares
- o Comandante FAP Alfredo Landeo Lema

- o General E.P. Jaime Zegarra Guillén,
 - o General E.P. Américo Fernández Cáceres
 - o Coronel Jaime Calderón Chávez,
 - o Coronel Winston Alfaro Vargas
 - o Mayor Gral. FAP Rodolfo del Portal Saco Vértiz
 - o Mayor Gral. FAP. Francisco Lizarzaburu Rechkmmmer.
 - o Gral. Div. E.P. Manuel Pancorbo Rivera
 - o Gral. Div. Luís Delgado de la Paz
 - o Gral. Div. Luís Mayaute Ghezzi
 - o Gral. Div. Luís Muenta Schuartz
 - o Coronel E.P. Renzo Rejas Olivares
 - o Vice Almirante A.P. Víctor Ramos Ormeño
 - o Vice Almirante A.P. Gonzalo Rodríguez Maisterrena
 - o Vice Almirante A.P. Rafael Francia Gonzaga
5. El Ministerio Público deberá a su vez evaluar la intervención, como autor, cómplice o instigador, del ex Asesor del Servicio de Inteligencia Nacional **Vladimiro Montesinos Torres**, en los delitos de asociación ilícita para delinquir, malversación de fondos públicos, colusión ilegal, peculado, negociaciones incompatibles, falsificación de documentos públicos, ocultamiento y destrucción de documentos, omisión de denuncia y traición a la patria, tipificados por los Arts. 317º, 389º, 384º, 387º, 397º, 427º, 430º, 407º y 332º del Código Penal. Para ello, deberá tenerse en cuenta las múltiples denuncias formuladas contra el Sr. Montesinos ante el Poder Judicial por hechos similares o conexos.
6. También deberá analizar el Ministerio Público el grado de responsabilidad penal de los diferentes empresarios y particulares que intermediaron o vendieron ilegalmente los armamentos materia de la presente denuncia. En ese sentido, cabe resaltar que las empresas vinculadas a los socios de W21 Intertechnique (Oscar Benavides Morales, Enrique Benavides Morales, Moshe Rothschild Chassin, Klaus Corpancho Kleinecke, Oscar Muelle Flores, Víctor Alberto Venero Garrido, Luis Duthurburu Cubas y Gerard Krueger Dizzilo), son: ATLAS TRADE S.A, SUTEX S.A., TRADING CO. S.A., AMERICAN SECURITY, GHISS IBÉRICA , AUTOMOTIVE INDUSTRIES LTD., HIGHTECH TECHNOLOGY LTD., CROUSILLAT BROTHERS INC., C W-1 INVERSIONES CORP., DEBRET ENTERPRISES LIMITED, PROSALES INTERNACIONAL INC., B&F. COMERCIALIZACIÓN Y REPRESENTACIONES, DRAKO REPRESENTACIONES, COMPAÑIA IMPORTADORA FERRETERA , INTERNATIONAL DEALERS S.A., CORPORACIÓN DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL S.A., JRB REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES, MUVARCH INTERNATIONAL TRADING S.A., DELF INSTRUMENTS ELECTRO-OPTICS, ELISRA ELECTRONIC SISTEM LTD., VASOV ENGINEERING PLANTS LTD., FABRIQUE NATIONALE NOUVELLE, HERSTALD S.A., MOBETEK REPRESENT. S.A., SHEMESH REPRESENTACIONES SRL., SOIDE REPRESENTACIONES SRL., BESPRIMERNY PRIVATE AVIATION, ACHIDATEX NAZARETH ELITE, RADOM AVIATION TECHNOLOGY LTD., G-92 COMMERCE, NOGA LITE LTD., WOTAN INTERNATIONAL S.A., ORMUZD S.A., GOTAMA S.A., ALENIA DIFESA, MUVARCH REPRESENTACIONES y VIFEBRISA. Finalmente, las empresas vinculadas a Consorcios de la República Popular China, son CATIC, Norinco y Huang SRL.

7. La investigación en este ámbito deberá realizarse por los delitos de colusión ilegal y negociaciones incompatibles, tipificados por los Arts. 384º y 397º del Código Penal.
8. Contra todas las demás personas que resulten responsables conforme a la investigación a iniciarse en atención a las irregularidades cometidas tras la aprobación y utilización de Decretos Leyes Secretos, Decretos de Urgencia Secretos, Decretos Supremos Secretos y Resoluciones Ministeriales Secretas, todas expedidas principalmente en el ámbito militar.

En consecuencia, solicitamos se sirva realizar la investigación preliminar pertinente y formalizar a la brevedad posible la correspondiente denuncia ante el Poder Judicial.

II. DE LA IRREGULAR EXPEDICIÓN DE DECRETOS DE URGENCIA SECRETOS

1. Durante el Gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, entre julio de 1990 y el año 2000, se produjo la sucesión de Primeros Ministros y Ministros de las carteras de Defensa, Economía y Justicia, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

Presidentes de Consejo de Ministros			
Juan Carlos Hurtado Miller	(R.S. 196-90-PCM)	DEL 29-07-1990	AL 15-02-1991
Carlos Torres y Torres Lara	(R.S. 064-91-PCM)	DEL 16-02-1991	AL 05-11-1991
Alfonso de los Heros Pérez A.	(R.S. 452-91-PCM)	DEL 06-11-1991	AL 05-04-1992
Oscar de la Puente Raygada	(R.S. 198-92-PCM)	DEL 05-04-1992	AL 28-08-1993
Alfonso Bustamante Bustamante	(R.S. 368-93-PCM)	DEL 29-08-1993	AL 17-02-1994
Efraín Goldenberg Schreiber	(R.S. 087-94-PCM)	DEL 18-02-1994	AL 28-07-1995
Dante Córdova	(R.S. 239-95-PCM)	DEL 28-07-1995	AL 03-04-1996
Alberto Pandolfi Arbulú	(R.S. 109-96-PCM)	DEL 03-04-1996	AL 04-06-1998
Javier Valle Riestra	(R.S. 308-98-PCM)	DEL 04-06-1998	AL 21-08-1998
Alberto Pandolfi Arbulú	(R.S. 464-98-PCM)	DEL 21-08-1998	AL 05-01-1999
Víctor Joy Way Rojas	(R.S. 017-99-PCM)	DEL 05-01-1999	AL 08-10-1999
Alberto Bustamante Belaúnde	(R.S. 515-99-PCM)	DEL 13-10-1999	AL 29-07-2000
Federico Salas Guevara	(R.S. 313-2000-PCM)	DEL 29-07-2000	AL 25-11-2000
Ministros de Defensa			
Jorge Torres Aciego	(R.S. 198-90-PCM)	DEL 29-07-1990	AL 06-11-1991
Víctor Malca Villanueva	(R.S. 454-91-PCM)	DEL 07-11-1991	AL 09-01-1996
Tomás Castillo Meza	(R.S. 003-96-PCM)	DEL 10-01-1996	AL 17-07-1997
César Saucedo Sánchez	(R.S. 355-97-PCM)	DEL 18-07-1997	AL 21-08-1998
Julio Salazar Monroe	(R.S. 466-98-PCM)	DEL 21-08-1998	AL 15-04-1999
Carlos Bergamino Cruz	(R.S. 180-99-PCM)	DEL 15-04-1999	AL 25-11-2000
Ministros de Economía			
Juan Carlos Hurtado Miller	(R.S. 196-90-PCM)	DEL 28-07-1990	AL 15-02-1991
Carlos Boloña Behr	(R.S. 065-91-PCM)	DEL 16-02-1991	AL 08-01-1993
Jorge Camet Dickman	(R.S. 004-93-PCM)	DEL 09-01-1993	AL 05-06-1998
Jorge Baca Campodónico	(R.S. 317-98-PCM)	DEL 05-06-1998	AL 05-01-1999
Víctor Joy Way	(R.S. 017-99-PCM)	DEL 05-01-1999	AL 08-10-1999
Efraín Goldemberg	(R.S. 529-99-PCM)	DEL 15-10-1999	AL 29-07-2000
Carlos Boloña Behr	(R.S. 316-2000-PCM)	DEL 29-07-2000	AL 25-11-2000

Ministros de Justicia

Augusto Antonioli Vásquez	(R.S. 200-90-PCM)	DEL 29-07-1990	AL 06-11-1991
Fernando Vega Santa Gadea	(R.S. 457-91-PCM)	DEL 07-11-1991	AL 09-01-1996
Carlos Hermoza Moya	(R.S. 004-96-PCM)	DEL 10-01-1996	AL 17-07-1997
Alfredo Quispe Correa	(R.S. 357-97-PCM)	DEL 18-07-1997	AL 05-01-1999
Carlota Valenzuela de Puelles	(R.S. 021-99-PCM)	DEL 05-01-1999	AL 15-04-1999
Jorge Bustamante Romero	(R.S. 182-99-PCM)	DEL 15-04-1999	AL 08-10-1999
Alberto Bustamante Belaúnde	(R.S. 519-99-PCM)	DEL 13-10-1999	AL 25-11-2000

Varios de estos ex Ministros han sido denunciados ante el Congreso de la República el pasado 26 de septiembre de 2001 por gozar del privilegio de la acusación constitucional¹.

2. Durante el periodo en referencia se expidieron múltiples **DECRETOS DE URGENCIA SECRETOS, NO PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO**, que sirvieron como vehículo de comisión o encubrimiento de graves actos de corrupción y diversos delitos contra el Estado peruano, perpetrados principalmente a través del sector Defensa al que, en virtud de tales Decretos y múltiples normas secretas de desarrollo con rango de Decreto Supremo y Resolución Ministerial, se transfirieron cuantiosas sumas de dinero bajo falsas motivaciones en la seguridad nacional o la defensa exterior. **Los Decretos de Urgencia secretos expedidos entre marzo de 1995 y noviembre del 2000, por los que se deriva los fondos de la privatización y otros de la caja fiscal al sector Defensa, principalmente, son los siguientes:**

¹ Además del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori, se ha denunciado constitucionalmente a los ex Ministros Alberto Pandolfi Arbulú, Víctor Joy Way, Alberto Bustamante Belaunde, Federico Salas Guevara, Tomás Castillo Meza, César Saucedo Sánchez, Julio Salazar Monroe, Carlos Bergamino Cruz, Jorge Camet Dickman, Jorge Baca Campodónico, Efraín Goldenberg Schreiber, Carlos Boloña Behr y Carlos Hermoza Moya. Asimismo, se ha denunciado al mismo nivel al ex Contralor de la República Víctor Caso Lay.

Decretos de Urgencia secretos emitidos entre 1995 – 2000

Nº	Fecha	Funcionarios que refrendan	Monto	Instituto	Operación	Fuente de Financiamiento
009-95	8/03/95	Alberto Fujimori – Jorge Camet Dickman – Efraín Goldemberg Schreiber – Víctor Malca Villanueva	US\$ 25'000,000	FF.AA. – Ejército, Marina y Fuerza Aérea	Compensación de Deuda de Petroperú con AIG, vía la provisión de combustibles	Transferencias del Tesoro Público
020-95	20/04/95	Alberto Fujimori – Jorge Camet Dickman – Efraín Goldemberg Schreiber – Víctor Malca Villanueva	US\$ 222'000,000	Minist. Defensa Ejército, Marina y FAP	Para gastos genéricos de seguridad nacional.	Recursos de Privatización
023-95	20/04/95	Alberto Fujimori – Jorge Camet Dickman – Víctor Malca Villanueva – Efraín Goldemberg Schreiber	S/. 13'545,890	Minist. Defensa	Regulariza incorporación presupuestal de fondos propios obtenidos por el MINDEF a través del FODENA en el Ejercicio Presupuestal de 1991.	Presupuesto Público (Ingresos propios)
028-95	09/05/95	Alberto Fujimori, Jorge Camet Dickman, Víctor Malca Villanueva, Efraín Goldemberg	(Sin monto específico por el objetivo del D.U.)	FF.AA. Ejército Marina Fuerza Aérea	Autoriza adquisición de bienes, servicios y contratación de obras por ADJUDICACIÓN DIRECTA exonerada de licitación, concurso de méritos, concurso de precios públicos y privados Faculta contratación de personal para transporte y desplazamiento de material y equipo.	-----
039-95	10/07/95	Alberto Fujimori – Jorge Camet – Víctor Malca – Efraín Goldemberg	S/. 21'792,500	Ejército	Autorización para ampliación presupuestal para actividades de pacificación nacional.	Transferencias del Tesoro Público
046-95	08/08/95	Alberto Fujimori – Jorge Camet Dickman – Dante Córdova Blanco – Víctor Malca Villanueva	S/. 67'800,000	FAP	Compra del avión presidencial BOEING 737	Recursos de la Privatización
001-96	17/01/96	Alberto Fujimori – Jorge Camet Dickman – Dante Córdova Blanco – Tomás Castillo Meza	US\$ 40'842,122	Minist. Defensa	Para gastos referidos a seguridad nacional.	Recursos de la Privatización

00000

Decretos de Urgencia secretos emitidos entre 1995 – 2000

Nº	Fecha	Funcionarios firmantes	Monto	Instituto	Operación	Fuente de Financiamiento
002-96	17/01/96	Alberto Fujimori – Jorge Camet Dickman – Dante Córdova Blanco – Tomás Castillo Meza.	Por la naturaleza del D.U. no señala monto	Sector Defensa Marina de Guerra, Ejército y Fuerza Aérea.	Prorroga durante el Ejercicio Presupuestal 1996, la autorización concedida por el D.U. 028-95 para adquisición y contratación por Adjudicación Directa de bienes y servicios.	-----
020-96	10/04/96	Alberto Fujimori – Jorge Camet Dickman – Tomás Castillo Meza – Alberto Pandolfi Arbulú	US\$ 146'732,401	Minist. Defensa Fuerza Aérea, Ejército y Marina.	Concluir la ejecución de compromisos contraídos mediante los DU 020 y 039-95, así como los D.S. 04-15-16 y 17-95-EF.	Recursos de la Privatización
028-96	06/05/96	Alberto Fujimori – Jorge Camet – Tomás Castillo Meza – Alberto Pandolfi A.	US\$ 252'052,420	Minist. Defensa (FAP)	Compra de los 18 MIG-29 de segundo uso a Bielorrusia.	Recursos de la Privatización
035-96	29/05/96	Alberto Fujimori – Jorge Camet Dickman – Tomás Castillo Meza – Alberto Pandolfi.	US\$ 100'000,000 (con cargo a los fondos aprobados en el DU 028 –96)	Banco de la Nación	Constitución de Stand By Letter of Credit en el Banco Exterior de Panamá.	Recursos de la Privatización
075-96	16/10/96	Alberto Fujimori – Jorge Camet Dickman – Tomás Castillo Meza – Alberto Pandolfi Arbulú	US\$ 150'000,000	Banco de la Nación	Constitución de Stand By Letter of Credit en el BEX de Panamá. Para la compra de los 18 SU 25 a Bielorrusia	Recursos de la privatización
091-96	No existe copia del Decreto de Urgencia	US \$ 2'455,300,27 Según informe remitido por el MEF (refiere a los intereses del D.U. 075-96)	Defensa Fuerza Aérea del Perú	El Viceministerio de Hacienda afirmó la atención de los fondos al sector Defensa, operación vinculada a la Ejecución del D.U. 075-96	Recursos de la privatización
05-97	20/01/97	No fue posible obtener copia del decreto de urgencia	US\$ 4'136,622,41 Según informe del MEF debe referirse a los intereses de la compra MIG 29	Minist. Defensa - Fuerza Aérea del Perú	No hay copia en el MEF. Vinculada a la ejecución de los D.U. 028 y 035-96 referidos a la compra de los 18 MIG 29 Bielorrusos	Recursos de la Privatización

00007

Decretos de Urgencia secretos emitidos entre 1995 – 2000

Nº	Fecha	Funcionarios firmantes	Monto	Instituto	Operación	Fuente de Financiamiento
021-97	11/03/97	Alberto Fujimori – Jorge Camet Dickman – Tomás Castillo Meza – Alberto Pandolfi Arbulú	Monto por determinar	Minist. Economía	Asunción y subrogación de la deuda tributaria de Indumil por parte del Ministerio de Economía. Transfiere a propiedad del Ejército los activos de INDUMIL referidos al uso militar.	Recursos del Tesoro Público.
060-97	25/05/97	No existe copia del decreto de urgencia	Monto asignado US\$150'000,000, ejecutado US\$ 99'525,101.53 (reconstruido a partir de informe del MEF)	Minist. Defensa FAP Ejército Marina	Adquisición de material y equipo para las FFAA. El Vice Ministro de Hacienda da cuenta de disposición de fondos.	Recursos de la Privatización
032-98	14/07/98	Alberto Fujimori. – César Saucedo Sánchez – Jorge Baca Campodónico	US\$ 126'293,000	Minist. Defensa	Seguridad nacional Mig-29 SE a Rusia.	Recursos de la Privatización
038-98	21/07/98	No existe copia del decreto de urgencia	US\$ 30'000,000	Minist. Defensa Fuerza Aérea	Contratación de Servicios de Mantenimiento y Repuestos para los MIG 29 y SU 25 Bielorrusos	Recursos de la Privatización
044-98	25/08/98	Alberto Fujimori, Salazar Monroe, Villanueva Ruesta y Baca Campodónico.	Por la naturaleza del D.U. no señala monto específico	Ministerio de Defensa Ejército, Marina FAP	Autorización para contratar Seguros para el Sector Defensa e Interior directa y exclusivamente con la Empresa Popular y Porvenir.	-----
052-99	17/08/99	Alberto Fujimori – Carlos Bergamino Cruz – Víctor Joy Way Rojas	US\$ 8'500,000	Ejército	Compra de Helicópteros MI-17.	Recursos de la privatización
060-99	25/09/99	Alberto Fujimori – Víctor Joy Way – Carlos Bergamino Cruz	US\$15'602,259.92	Ejército	Overhaul para maquinarias chinas adquiridas mediante DU 065-94.	Endeudamiento Externo con el Bank of China
081-00	19/09/00	Alberto Fujimori – Carlos Boloña Berh- Federico Salas Guevara Schultz – Carlos Bergamino Cruz	S/. 69'597,810	Minist. Defensa	Ejecución de acciones en la frontera con Colombia. (Posteriormente se ha determinado el uso en el pago de una ilegal "indemnización" a Vladimiro Montesinos Torres	Recursos del Tesoro Público

Fuentes: Ministerio de Economía, Secretaría de la Presidencia de la República, informe de la Dra. Beatriz Mejía. Elaboración: Comisión sobre Delitos Económicos y Financieros, 1990-2001

00000

Conforme puede apreciarse a través del cuadro anterior, de los 22 Decretos de Urgencia secretos, sólo tras la aprobación de ocho de ellos (los Decretos de Urgencia N° 009-95, 020-95, 023-95, 028-95, 039-95, 046-95, 001-96 y 002-96), sus autores cumplieron con la expresa obligación prevista en el Art. 118° núm. 19 de la Constitución de dar cuenta al Congreso de la República para su revisión y fiscalización, órgano que puede, conforme a la propia Constitución «modificar o derogar los referidos Decretos de Urgencia».

3. Un importante indicio que corrobora la responsabilidad penal de los denunciados radica en que el cumplimiento de esta obligación constitucional se interrumpió precisamente cuando el Poder Ejecutivo, concretamente a través del ex Presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori y el entonces Ministro de Defensa, decidió iniciar el fraudulento proceso de adquisición de los aviones MIG-29 en 1996. Tal práctica ilegal consistente en ocultar actos de corrupción tras el manto del secreto de Estado, se mantuvo aún después de terminado el conflicto armado y firmada la paz con el Ecuador en octubre de 1998, pues el Poder Ejecutivo continuó con esta práctica inconstitucional y delictiva, incluso después de que los escándalos de corrupción del gobierno del denunciado Alberto Fujimori Fujimori se pusieron de relieve en septiembre de 2000 tras la difusión del video Kouri-Montesinos.
4. En efecto, la expedición del Decreto de Urgencia N° 081-00 de 19 de septiembre de 2000, (apenas tres días después de hacerse pública la desactivación del SIN, el recorte del mandato presidencial y la convocatoria de nuevas elecciones), como ya es materia de investigación ante el Congreso de la República², tuvo como motivación aparente, las acciones del sector Defensa en la frontera con Colombia; argumento que sirvió únicamente de fachada, como medio de legitimación y encubrimiento para disponer ilegalmente de quince millones de dólares; acción ilícita en la que participaron además de Vladimiro Montesinos Torres, los denunciados Alberto Fujimori Fujimori, Carlos Boloña Behr, Federico Salas Guevara Schultz y Carlos Bergamino Cruz; y cuyo real beneficiario deberá ser identificado por las autoridades que están conduciendo las investigaciones pertinentes.
5. De acuerdo al análisis de los documentos que obran en la Comisión, se ha podido establecer que los Decretos de Urgencia secretos, en su gran mayoría no cumplieron tampoco con la condición constitucional de ser aprobados por el Consejo de Ministros, pese a que tal condición aparece en el texto de dichas normas como si se hubiera cumplido. Sólo seis de estos Decretos el 009-95, 020-95, 023-95, 046-95, 01-96 y 020-96 contaron con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros según se desprende de las actas que entregara durante el gobierno transitorio del Dr. Valentín Paniagua Corazao a la Comisión Morales, el Secretario de la Presidencia del Consejo de Ministros en dicho período, Sr. Felix Pino.

A continuación se presenta el **cuadro referido a los 6 Decretos de Urgencia que contaron previamente con Acuerdo del Consejo de Ministros**, precisándose quiénes los refrendaron y quiénes no los objetaron en las sesiones del Consejo, según se desprende de las respectivas actas:

² Ante la Sub-Comisión presidida por el Sr. Congresista Fausto Alvarado (Denuncia Constitucional N° 019-2001), a raíz de la denuncia constitucional presentada por la Procuraduría Ad-hoc contra Montesinos ante la Fiscalía de la Nación, contra Alberto Fujimori, Carlos Boloña, Federico Salas y Carlos Bergamino, por los delitos de asociación ilícita para delinquir y otros, en agravio del Estado.

DECRETOS DE URGENCIA SECRETOS CON APROBACION DE CONSEJO 1995-2000					
Decreto Urgencia	Fecha	Operación	Monto	Instituto	Responsables
009-95	8/03/95	Compensación de Deuda de Petroperú. Se dio cuenta al Congreso Tiene Acuerdo de Consejo de Ministros.	US\$ 25'000,000	FFAA	Refrendan: Alberto Fujimori (Presidente) – Jorge Camet Dickman (Economía)– Efraín Goldemberg Schreiber(Premier) – Víctor Malca Villanueva (Defensa) Participaron en la sesión de fecha 6/03/95 y aprobaron: Juan Briones Dávila (Interior), Pedro Villena Hidalgo (Educación), Eduardo Yong Motta (Salud), Absalón Vásquez Villanueva (Agricultura), Liliana Canale Novella (Industria), Daniel Hokahama Tokashiki (Energía y Minas), Augusto Antoniolli Vásquez (Trabajo), Juan Castilla Meza (Transportes), Jaime Sobero Taira(Pesquería encargado de Justicia), María Luisa Federici Soto (Presidencia)
020-95	20/04/95	Para fines de seguridad nacional. Se dio cuenta al Congreso. Tiene Acuerdo de Consejo de Ministros	US\$222000,000	Minist. Defensa	Refrendan: Alberto Fujimori (Presidente) – Jorge Camet Dickman (Economía)– Efraín Goldemberg Schreiber(Premier) , Víctor Malca Villanueva. Participaron en la sesión y aprobaron: Juan Briones Dávila (Interior), Víctor Malca (Defensa, no aparece su firma, pero sí el sello), Fernando Vega Santa Gadea (Justicia), Pedro Villena Hidalgo (Educación), Eduardo Yong Motta (Salud), Absalón Vásquez Villanueva (Agricultura), Liliana Canale Novella (Industria), Daniel Hokahama Tokashiki (Energía y Minas), Augusto Antoniolli Vásquez (Trabajo), Juan Castilla Meza (Transportes), Jaime Sobero Taira (Pesquería), María Luisa Federici Soto (Presidencia)

DECRETOS DE URGENCIA SECRETOS CON APROBACION DE CONSEJO 1995-2000					
Decreto Urgencia	Fecha	Operación	Monto	Instituto	Responsables
023-95	20/04/95	Autorización en vía de regularización a incorporar fondos en el presupuesto. Se dio cuenta al Congreso. Tiene Acuerdo de Consejo de Ministros	S./ 13' 545,890	Minist. Defensa	Refrendan: Alberto Fujimori (Presidente) – Jorge Camet Dickman (Economía) – Efraín Goldemberg Schreiber (Premier), Víctor Malca Villanueva (Defensa) Participaron en la sesión del 19/04/96 y aprobaron: Juan Briones Dávila (Interior), Víctor Malca (No firma pero sí aparece sello) Fernando Vega Santa Gadea (Justicia), Pedro Villena Hidalgo (Educación), Eduardo Yong Motta (Salud), Absalón Vásquez Villanueva (Agricultura), Liliana Canale Novella (Industria), Daniel Hokahama Tokashiki (Energía y Minas), Augusto Antonioli Vásquez (Trabajo), Juan Castilla Meza (Transportes), Jaime Sobero Taira (Pesquería, falta firma), María Luisa Federici Soto (Presidencia)
046-95	08/08/95	Autorización de calendarización y giro Se dio cuenta al Congreso. Tiene Acuerdo de Consejo de Ministros.	S/. 6'800,000	FAP	Refrendan: Alberto Fujimori (Presidente) – Jorge Camet Dickman (Economía) – Dante Córdova Blanco (Premier) – Víctor Malca Villanueva (Defensa) Participaron en la sesión del 8/08/1995 y aprobaron: Francisco Tudela Van Breugel Douglas (Relaciones Exteriores), Juan Briones Dávila (Interior), Fernando Vega Santa Gadea (Justicia), Eduardo Yong Motta (Salud), Absalón Vásquez Villanueva (Agricultura), Liliana Canale Novella (Industria), Amado Yalaco Medina (Energía y Minas), Sandro Fuentes Acurio (Trabajo), Juan Castilla Meza (Transportes), Jaime Sobero Taira (Pesquería), Manuel Vara Ochoa (Presidencia).

DECRETOS DE URGENCIA SECRETOS CON APROBACION DE CONSEJO 1995-2000					
Decreto Urgencia	Fecha	Operación	Monto	Instituto	Responsables
001-96	17/01/96	Para fines de seguridad nacional. Se dio cuenta al Congreso. Tiene Acuerdo de Consejo de Ministros.	US\$ 40'842,122	Minist. Defensa	Refrendan: Alberto Fujimori (Presidente) – Jorge Camet Dickman (Economía) – Dante Córdova Blanco (Premier) – Tomás Castillo Meza (Defensa) Participaron en la sesión del 17/01/96 y aprobaron: Juan Briones Dávila (Interior), Fernando Carlos Hermoza Moya (Justicia), Eduardo Yong Motta (Salud), Absalón Vásquez Villanueva (Agricultura), Liliana Canale Novella (Industria), Amado Yataco Medina (Energía y Minas), Manuel Vara Ochoa (Transportes) Sandro Fuentes Acurio (Trabajo), Jaime Sobero Taira (Pesquería), Jaime Yoshiyama Tanaka (Presidencia)
020-96	10/04/96	Concluir la ejecución de compromisos contraídos mediante los DU 020 y 039-95. No se dio cuenta al Congreso. Tiene Acuerdo de Consejo de Ministros.	US\$ 146732,401	Minist. Defensa	Refrendan: Alberto Fujimori (presidente) – Jorge Camet Dickman (Economía) – Tomás Castillo Meza (Defensa)– <u>Participaron en la sesión del 29/03/96 y aprobaron:</u> Dante Córdova, Francisco Tudela Van Breugel Douglas (Relaciones Exteriores) Juan Briones Dávila (Interior), Eduardo Yong Motta (Salud), Absalón Vásquez Villanueva (Agricultura), Liliana Canale Novella (Industria), Amado Yataco Medina (Energía y Minas), Manuel Vara Ochoa (Transportes) Sandro Fuentes Acurio (Trabajo), Jaime Sobero Taira (Pesquería, falta firma), Jaime Yoshiyama Tanaka (Presidencia)

Fuentes: Secretaría del Consejo de Ministros
Elaboración: Comisión sobre Delitos Económicos y Financieros

6. Para facilitar el establecimiento de las responsabilidades correspondientes, presentamos el siguiente cuadro con los detalles de los Decretos de Urgencia materia de la presente denuncia constitucional.

Número	Mo- neda	Monto	Fecha	Firmantes	Existe texto	Acuerdo De Consejo	Control De Cuenta
09-95	US\$	25'000,000	08/03/1995	FUJIMORI GOLDENBERG MALCA CAMET	Sí	Sí	Sí
020-95	US\$	222'000,000	20/04/1995	GOLDENBERG CAMET MALCA	Sí	Sí	Sí
023-95	S/.	13'545,890	20/04/1995	FUJIMORI GOLDENBERG MALCA CAMET	Sí	Sí	Sí
028-95			09/05/1995	FUJIMORI GOLDENBERG MALCA CAMET	Sí	No	Sí
039-95	S/.	21'792,500	10/07/1995	FUJIMORI GOLDENBERG MALCA CAMET	Sí	No	Sí
046-95	S/.	67'800,000	08/08/1995	FUJIMORI CORDOVA; MALCA CAMET	Sí	Sí	Sí
001-96	US\$	40'842,122	17/01/1996	FUJIMORI CORDOVA CAMET CASTILLO	Sí	Sí	Sí
002-96			17/01/1996	FUJIMORI CORDOVA CASTILLO CAMET	Sí	No	Sí
020-96	US\$	146'732,401	10/04/1996	FUJIMORI PANDOLFI CASTILLO CAMET	Sí	Sí	No
028-96	US\$	252'052,420	06/05/1996	FUJIMORI PANDOLFI CASTILLO CAMET	Sí	No	No
035-96	US\$	100'000,000	29/05/1996	FUJIMORI PANDOLFI CAMET CASTILLO	Sí	No	No
075-96	US\$	150'000,000	16/10/1996	FUJIMORI PANDOLFI CAMET CASTILLO	Sí	No	No
091-96	US\$	2'455,300.27			No		
005-97	US\$	4'136,622.41	20/01/1997		No	No	No
021-97		Por determinar	11/03/1997	FUJIMORI PANDOLFI CASTILLO CAMET	Sí	No	No
060-97	US\$	99'525,101.53 (ejecutado)	25/05/1997		No	No	No

Número	Mo- neda	Monto	Fecha	Firmantes	Existe texto	Acuerdo De Consejo	Control De Cuenta
032-98	US\$	126'293,000	14/07/1998	FUJIMORI BACA SAUCEDO	Sí	No	No
038-98	US\$	30'000,000	21/07/1998		No	No	No
044-98			25/08/1998	FUJIMORI SALAZAR VILLANUEVA BACA	Sí	No	No
052-99	US\$	8'500,000	17/08/1999	FUJIMORI JOY WAY BERGAMINO	Sí	No	No
060-99	US\$	15'602,259.92	25/09/1999	FUJIMORI JOY WAY BERGAMINO	Sí	No	No
081-2000	S/.	69'597,810	19/09/2000	FUJIMORI SALAS GUEVARA BERGAMINO BOLOÑA	Sí	No	No

7. Como se adelantó, el principal destino de los fondos desviados a través de los Decretos era el sector Defensa, lo cual puede inferirse claramente del cuadro siguiente que, en buena cuenta, exhibe que en la década de 1990 al 2000 se destinó a la compra de armamento la suma de **US\$1,885'675,000.00 (UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA).**

FONDOS UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE ARMAMENTO Y OTROS EFECTUADOS POR LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES-PERÍODO 1990-2000 (MILES DE DÓLARES)					
RECURSOS	EJERCITO	MARINA	AVIACIÓN	M. INTERIOR	TOTAL
1. PRIVATIZACIÓN	108'434	105'195	778'310		998'588
2. ORDINARIOS	32'195	99'743	93'917	228'124	453'979
3. RECAUD. DIRECTA	14'822	31'407	37'551	-	83'780
4. ZONA EMERGENCIA	105'340	33'796	33'268	-	172'404
5. ENDEUDAMIENTO EXTERNO	47'115	14'621	79'173	36'015	176'924
TOTAL	307'906	284'762	1,022'219	270'788	1,885'675

Fuente: Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio del Interior

8. Como bien se aprecia, la adquisición de armamento se efectuó no sólo con fondos de las privatizaciones sino también con recursos provenientes del endeudamiento externo, la recaudación directa y recursos de emergencia. No obstante, lo utilizado de los fondos de las privatizaciones reviste especial atención en la medida que estos fondos subvencionaron más del 50% del monto total de adquisiciones del sector Defensa.

9. Ahora bien, los actos de corrupción a través de los Decretos Secretos materia de esta denuncia constitucional, se realizaron principalmente a través de dos modalidades
- a) Se realizaba el hecho delictivo y luego su legalización mediante los Decretos secretos. Esto es, primero se realizaba la operación irregular de adquisición de bienes y luego en vía de regularización se dictaban los dispositivos secretos, lo que le daba aparente legalidad; y,
 - b) Se dictaba previamente una norma de autorización de carácter general, y luego se giraba con cargo a los fondos dispuestos por dicha norma, las adquisiciones que se decidiesen.

Esto era posible por la posición de poder y autoridad política de los denunciados y sus colaboradores, lo que les permitía tener información anticipada sobre las necesidades militares o crear necesidades militares.

10. Para poder realizar estas operaciones ilegales se utilizaban a terceros, militares o civiles, bajo dos modalidades principalmente:
- a) La concertación previa con proveedores ya existentes, como en el caso de la adquisición del avión presidencial en 1995 que se expondrá posteriormente; y,
 - b) La creación de empresas de proveedores cuyos accionistas serían testaferros o miembros de la asociación delictiva (como se aprecia en la adquisición de sistemas de armas de Bielorrusia y Rusia), a efecto de favorecer la colusión y repartirse comisiones ilícitas en perjuicio del erario nacional.

De esta manera, la expedición de Decretos secretos forma parte integrante y necesaria de los actos ejecutivos que integran los delitos denunciados. Este aporte de los denunciados es esencial, sin la expedición de dichas normas no hubiera sido posible la comisión de los delitos denunciados, más aún porque de ese modo se evitaban los controles externos por parte de la Contraloría General de la República u otros organismos fiscalizadores.

11. Debe tenerse presente que los Decretos Leyes, Legislativos, de Urgencia y Supremos dictados eran, sino exclusivamente sí principalmente, para la adquisición de bienes y servicios en los sectores Defensa e Interior. El único caso que aparentemente no se vincula a adquisiciones es el Decreto de Urgencia 028-95, sin embargo, la relación que guarda con tales operaciones es fundamental porque justamente se dictó para exonerar de licitaciones públicas o privadas, la adquisición de bienes y servicios necesarios para el sistema de logístico de las Fuerzas Armadas. Es decir, el mencionado Decreto de Urgencia, se constituye en instrumento fundamental de la legislación "ad hoc" que se construyó para facilitar la colusión y demás irregularidades.
12. El beneficiario formal de los Decretos es, como ya se puso en relieve, el Ministerio de Defensa, el único que, ante posibles necesidades vinculadas a la defensa nacional, podría justificar gastos tan cuantiosos como los que se efectuaron. Es preciso señalar que, a pesar de los ingentes recursos transferidos, las irregularidades y los ilícitos cometidos, finalmente afectaron gravemente la defensa nacional, al haber derivado

- fondos que debieron servir para elevar la capacidad operativa de nuestras fuerzas armadas, más aún, en pleno conflicto con el Ecuador.
13. Los hechos demuestran que las condiciones para cometer los ilícitos denunciados, tuvieron su origen en una serie de disposiciones y acciones cometidas desde los años 90 y 91, las mismas que se materializaron en el Golpe de Estado del 5 de abril de 1992 y en las normas que se derivaron de él. Así mismo, desde entonces hasta el final del gobierno del Ing. Fujimori, el uso abusivo de normas secretas siguió siendo una práctica ordinaria. Del análisis de las normas secretas emitidas, podemos establecer un claro vínculo de relación entre ellas. Como ejemplo, podemos citar el caso de los Decretos Supremos de Urgencia 020-95, 039-95, 20-96 y los Decretos Supremos 04, 15 y 16 y 17-95-EF, y los Decretos de Urgencia dictados para las adquisiciones de naves bielorrusas en 1996 y rusas en 1998, así como, el posterior contrato para los repuestos y mantenimiento de las aeronaves.
 14. Otro indicio importante es que a varios de los implicados en los delitos denunciados, a través del presente o ante el Congreso de la República, como Víctor Malca, José Villanueva Ruesta, Víctor Joy Way o Nicolás de Bari Hermoza, se les han hallado cuentas de dinero por varios millones de dólares en el extranjero, sin que hayan podido explicar su origen legal, lo que ha dado lugar a múltiples procesos judiciales por enriquecimiento ilícito, evasión tributaria, etc. Inclusive, en el caso de los aviones bielorrusos, donde se viene procesando a varios militares y particulares no aforados, el Sexto Juzgado Penal de Lima, Secretario Meyer, expediente 7853-2000 ha ordenado un embargo sobre los bienes de una de las empresas intervinientes.
 15. Tampoco puede perderse de vista, en orden a comprender la gravedad de los hechos denunciados que US\$ 998'588,000.00 (NOVECIENTOS NOVENTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTIOCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) de los transferidos al sector Defensa, fueron desviados de los fondos de privatizaciones, los cuales tenían dos destinos distintos. En efecto, la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 674 - Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado dispuso que los recursos que se obtuviesen del proceso de privatización constituirían parte del Tesoro Público y serían destinados a programas orientados a la erradicación de la pobreza y pacificación del país, por tanto, estos eran los destinos únicos y primordiales de los dineros obtenidos del proceso de privatización. Sin embargo, los denunciados, justamente, aprovecharon y abusaron de su capacidad normativa para desviar dichos fondos a través de dispositivos secretos y disposiciones en las diversas Leyes Anuales de Presupuesto Público para transgredir lo dispuesto en el D.Leg. N° 674 y, al mismo tiempo, impedir cualquier mecanismo de control efectivo sobre la disposición de dichos recursos.
 16. Pese a que los fondos de la privatización tenían un destino preestablecido, el ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori y los ex Ministros denunciados ante el Congreso o en este acto, abusando de sus cargos, se valieron de una serie de dispositivos secretos, unos con rango de ley como los Decretos de Urgencia, otros de menor jerarquía (meros Decretos Supremos y Resoluciones Ministeriales), para malversar estos fondos y destinar cientos de millones de dólares a objetivos distintos y favorecer el enriquecimiento ilícito de quienes obtuvieron comisiones ilegales como producto de las operaciones efectuadas por el Sector Defensa. La interpretación lata del concepto "pacificación" (uno de los destinos preestablecidos de dichos fondos)

- consignado en la Ley de Promoción de la Inversión Privada, sirvió de pretexto a los denunciados para desviar dineros cuya finalidad en estricto era combatir la subversión interna (lo que implicaba preparar y dotar de armas a los ronderos e invertir en planes de inteligencia) y derivarlos al sector Defensa, con la finalidad de apropiárselos.
17. En los Decretos de Urgencia que derivan los montos más exorbitantes se aprecia como una constante la muletilla «para fines de la seguridad nacional». La premisa seguridad nacional ha sido consignada intencionalmente con el objeto de abarcar en ella los conceptos de erradicación de la pobreza y pacificación nacional y así dar un viso de aparente legalidad a la derivación arbitraria y desproporcionada de recursos de la privatización al sector Defensa. Pero cabe resaltar que para disponer o modificar el destino de lo obtenido por las privatizaciones, previsto en el Decreto Legislativo N° 674 (Ley de Promoción de la Inversión Privada), se requería de una norma de igual jerarquía, por eso se echó mano a los Decretos de Urgencia. Derivar los fondos de la privatización a través de normas de menor rango hubiera implicado transgredir las Cartas de Intención firmadas con el FMI.
 18. Debemos hacer hincapié que en el período de 1995 al 2000, en el cual se resuelve destinar las sumas más elevadas al sector Defensa a través de Decretos de Urgencia, el flagelo del terrorismo había sido previamente derrotado estratégicamente y estaba controlado, gracias a la participación conjunta de las autoridades policiales, militares y de mecanismos de la sociedad civil (como los propios ronderos), lográndose la captura y procesamiento de los principales líderes de Sendero Luminoso y el MRTA. En este contexto la derivación arbitraria y abusiva de fabulosas sumas al sector Defensa (si nos apegamos rigurosamente a lo estipulado en la Ley de Promoción de la Inversión Privada que hablaba de "pacificación"), carece en estricto de justificación.
 19. No obstante, la perspectiva distorsionada de algunos de los más altos funcionarios del otrora oficialismo vieron en el conflicto con el Ecuador la excusa perfecta para la derivación de millonarios fondos de las privatizaciones al sector Defensa. Forzando un poco la figura los fines de pacificación en los que se debía invertir el dinero de las privatizaciones también podían incluir la necesidad de armarse para enfrentar un conflicto armado internacional.
 20. Si la derivación de dichos fondos hubiese servido para adquirir el equipo bélico adecuado en el marco de una estrategia militar defensiva-ofensiva que permitiera una real protección de la línea de frontera, se hubiera obrado en pro de la seguridad nacional. Sin embargo, por obra de los denunciados y sus cómplices se terminó poniendo en riesgo nuestra integridad territorial ya que fue utilizada para la obtención de ingresos ilícitos por parte de los más altos funcionarios del poder ejecutivo, institutos castrenses así como por proveedores inescrupulosos coludidos. No se compraron los armamentos y equipos idóneos; y la entrega de lo adquirido (que ameritaba celeridad extrema dada la coyuntura) en algunos casos se produjo inclusive después de la firma de paz con Ecuador, en Brasilia en octubre de 1998.
 21. Pero lo que reviste mayor gravedad en la expedición de estos dispositivos y que de por sí es un indicio razonable de las operaciones turbias que desencadenarían, es el que hayan sido dictados con carácter de SECRETO. Ello atenta contra el principio constitucional que establece que para la validez de toda norma del Estado es

indispensable su publicación (Art. 51º de la Constitución de 1993). La publicación es un elemento esencial para la entrada en vigencia de la norma pues esta sólo será de obligatorio cumplimiento desde que es de conocimiento público.

22. Pero el carácter secreto de estos dispositivos no es la única irregularidad en la que se ha incurrido. Tampoco se cumplió con dar cuenta al Congreso en la dación de muchos de ellos como es el caso del DU 028-96 del 06/05/96 por un monto de US\$252,052,420, el DU. 005-97 de fecha 20/01/97 por un monto de US\$105,494,060, el 060-97 de fecha 25/07/97 por un monto de US\$ 150,000,000 y el 032-98 del 14/07/98 por un monto de US\$ 126, 293,000, todos privilegiando al sector Defensa.
23. Más aún y en lo que implica el colmo de la falta de transparencia, en muchos casos no se ha encontrado el documento físico que contiene a estos Decretos. La más de las veces, tampoco se han encontrado las actas de aprobación de estos en el seno del Consejo de Ministros. Según refiere la Dra. Beatriz Mejía Mori (en declaraciones que adjuntamos), encargada de una investigación sobre este tema por el MEF y citada a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, en muchos casos la existencia de los dispositivos secretos tuvo que colegirse del faltante del correlativo de la norma en las publicaciones del Diario Oficial El Peruano y del seguimiento de los libramientos autorizados por el MEF, que presuponen su existencia. Las irregularidades que presentan estos dispositivos son de tal calibre, que nos llevan a afirmar su nulidad *ipso iure*, por carecer el grueso de ellos del voto aprobatorio del Consejo de Ministros y no haberse cumplido con el requisito constitucional de su publicación para dispensarles eficacia. Cabe resaltar que según el Oficio N° 341-2001-SCM-PR remitido por Félix Pino Figueroa (Secretario de la Presidencia del Consejo de Ministros durante el Gobierno Transitorio), sólo obran en los archivos de la Secretaría del Consejo de Ministros tres autógrafas, referidas a los Decretos de Urgencia 021-97, 052-99 y 060-99. Del resto de dispositivos sólo se tiene copias y de cuatro de ellos no existe el documento original, ni copia alguna (Decretos de Urgencia 091-96, 05-97, 060-97 y 038-98). Sin embargo, se sabe de la existencia de tales Decretos porque los operadores del gasto (MEF, Banco de la Nación y Ministerio de Defensa) dan cuenta de haber transferido o utilizado fondos por un total de US\$285'494,060.00 en virtud de los mismos, y se aprecia además la presencia de Decretos Supremos y Resoluciones Ministeriales expedidas al amparo de los citados Decretos de Urgencia cuya copia no se tiene.
24. Como bien se precisó, los Decretos de Urgencia secretos emitidos en el periodo 95-2000 sirvieron para realizar adquisiciones en el ámbito militar por más de US\$998 millones, siendo esta cifra preliminar, pudiendo ampliarse conforme las investigaciones permitan precisar los montos de algunas operaciones. Dentro del total de Decretos secretos ejecutados en el período 1995-2000 sólo seis Decretos de Urgencia concentran un monto de US \$891 millones, equivalentes al 89.3% de los fondos provenientes de las privatizaciones. Dichos Decretos son el 28-96 por US\$ 252 millones, el 20-95 (complementado por el 20-96) por US\$ 222 millones, el 75-96 por US\$150 millones, el 32-98 por US\$126 millones, el 60-97 por US\$100 millones y el 01-96 por US \$41 millones. Sólo dos Decretos de Urgencia el 28-96 y el 20-95 significan un monto de US\$ 474 millones, equivalentes al 47.5% del monto total derivado de los fondos de las privatizaciones al sector Defensa, a través de Decretos de Urgencia secretos.

25. Es a partir de estos dispositivos inconstitucionales y nulos *ipso jure*, que se derivan una serie de operaciones irregulares existiendo indicios razonables de la comisión de una gama de delitos por parte de funcionarios públicos y particulares. Todos ellos habrían **funcionado como una gran asociación delictiva. Así, tenemos como cabecilla de esta presunta asociación delictiva a Alberto Fujimori Fujimori que abusa de una atribución exclusiva del Presidente de la República (Art. 118º, inc. 19 de la Constitución vigente), como la de dictar Decretos de Urgencia para malversar fondos de la caja fiscal y la privatización, en aras de privilegiar al sector DEFENSA. Fujimori, hizo uso irrestricto de una potestad constitucional a la que sólo se debe acudir cuando una coyuntura extraordinaria e imprevisible que comprometa el interés nacional, demande prontitud en la expedición de leyes en materia económico financiera.** Así, deformó la utilización de los Decretos de Urgencia- con el agravante de haberlos dictado con carácter de secreto-, empleándolos como meros instrumentos para su beneficio personal o el de sus cómplices. En tal sentido, resulta difícil de entender que asunto de interés nacional implicaba adquirir a través de estos dispositivos el avión presidencial (DU 039-95), autorizar adquisiciones directas de bienes y servicios en las fuerzas armadas (DU 028-95), contratar exclusivamente con Popular y Porvenir seguros en los sectores Defensa e Interior (DU 044-98) o en la decadencia del régimen, disponer de US\$ 15,000,000 millones de dólares en una irregular operación para una supuesta indemnización a Vladimiro Montesinos (DU 081-00), por citar algunos ejemplos.
26. Cabe hacer hincapié en el Decreto de Urgencia 028-95 el cual autoriza a las fuerzas armadas a adquirir mediante adjudicación directa, exonerada de licitación, concurso de méritos y concurso público de precios públicos o privados, los bienes, servicios, contratación de obras efectuadas que creyeran convenientes. Dicha exoneración dio cabida a la comisión reiterada de diversos delitos. Para la adjudicación directa según el Art. 4.5.3º del DS 065-85-PCM (Reglamento Único de Adquisiciones para el Suministro de Bienes y Prestación de Servicios no Personales en el Sector Público) se requiere un mínimo de tres cotizaciones y propuestas sobre el mismo tipo de bien o de servicio. Así, el DU 028-95 habría sido exprofesamente expedido para favorecer al grupo de empresa allegadas a los denunciados (W-21, Treves Inttora, entre otras), en la medida que se reducía el número de potenciales proveedores y facilitaba la colusión y el pago de comisiones ilícitas. Vale decir, los denunciados aprovechando que estaban en el poder, se crearon un marco de aparente legalidad para confabulados con altos mandos militares y proveedores privados, saquear el erario nacional. Ello refleja la premeditación y cohesión con la que procedieron, elementos típicos de toda asociación criminal.
27. Pero lo que importa especial gravedad es que escudándose en el DS 028-95, los denunciados ni siquiera respetaron los procedimientos del RUA a los cuales debían sujetarse, adquiriendo equipos por millones de dólares sin que existiera variedad en las ofertas. Si bien el DS 028-95 facultaba la adjudicación directa de bienes al sector Defensa, esta debía realizarse según el Reglamento Único de Adquisiciones, no al libre albedrío de los denunciados y sus cómplices. En todo caso, la utilización abusiva e indiscriminada de estas normas secretas en ocasiones ha sido tan burda que primero se asumían los compromisos y se daba luz verde a los libramientos (sin acuerdo previo del Consejo de Ministros ni documento alguno que contenga el Decreto autoritativo) y luego se dictaba la norma en "vía de regularización".

- 00020
28. Confabulados con Fujimori y Montesinos, como copartícipes en la comisión de diversos actos delictivos, se encuentran los ex Ministros denunciados, además de otros que por los plazos legales vigentes, han perdido ya el derecho al antejucio político. A éstos la Constitución vigente les atribuye una responsabilidad especial en cuanto cuerpo colegiado. Así, la Constitución de 1993 en el Art. 128º establece dos niveles de responsabilidad: personalísima, la misma que vincula al Ministro por todos los actos de su gestión y por los que refrenda, pudiendo acarrearle un proceder poco ético, responsabilidades de índole política (inhabilitación por el Congreso), civil (reparación civil al Estado por perjuicios causados) y penal (acusados por los delitos en que incurran). De otra parte, se establece la responsabilidad solidaria de todos los Ministros por los actos delictivos o violatorios a la Constitución en los que incurra el Presidente de la República. De ello se colige que el cargo de Ministro importa el más alto grado de responsabilidad en la medida que no sólo se responde por la propia gestión sino además por la del Presidente de la República, en cuanto los Ministros, como hombres de confianza del Presidente, le dan validez a los actos de éste. Por tanto, salvar el voto en una sesión de Consejo no basta para quedar exonerado de responsabilidad. Si en dicha sesión el Presidente y demás miembros del gabinete incurren en actos contrarios a la Constitución y las leyes, es obligación del Ministro renunciar en el acto y formular la denuncia correspondiente ante la autoridad competente.
 29. En tal sentido, entre los ex Ministros denunciados pueden diferenciarse dos grupos con distinto grado de responsabilidad. Primero el grupo de los ex Ministros que participaron directamente en la comisión de hechos delictivos refrendando los dispositivos secretos e interviniendo en las operaciones en las que se dilapidaron los fondos del erario público (responsabilidad comisiva) y el segundo grupo de ex Ministros (ya denunciados ante el Congreso de la República), como Juan Briones Dávila de Interior, Liliana Canale Novella de Industria, Daniel Hokama Tokashiki de Energía y Minas y Francisco Tudela Van Breugel Douglas de Relaciones Exteriores, que no refrendaron los Decretos pero que los aprobaron en las sesiones de Consejo, según se desprende de las actas referidas a los DU 09-95, 023-95, 020-95, 046-95, 001-96 y 020-96 permaneciendo en sus cargos no obstante tener pleno conocimiento de las irregularidades cometidas a través de estos dispositivos secretos, no haciendo nada por denunciar estos hechos (responsabilidad omisiva). Los miembros del gabinete que presuntamente estarían más involucrados en esta red de corrupción por comisión serían los Primeros Ministros, los Ministros de Defensa y Economía que se sucedieron durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori Fujimori.
 30. Como se denunciara ante el Congreso, existe a su vez particular responsabilidad del ex Ministro de Justicia Carlos Hermoza Moya, quien conoció del uso indebido y secreto de los Decretos de Urgencia y otras normas de menor jerarquía. Según el Art. 5º de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, al Ministro de Justicia le compete asesorar legalmente al Poder Ejecutivo. Siendo así, los Ministros de Justicia que hubieren asistido a las sesiones de Consejo en las que se dio luz verde a estos dispositivos estaban en la obligación de ilustrar al Gabinete en su conjunto sobre la flagrante transgresión constitucional que implica expedir normas secretas, así como de la utilización impropia que se les estaba dando.

III. EL CASO DE LA ILÍCITA ADQUISICIÓN DEL AVIÓN PRESIDENCIAL

1. El 4 de mayo de 1995, con el Informe II-55-OPDP-Nº 0359, el Teniente General FAP Waldo Richter Cruz, Director de Operaciones de la Fuerza Aérea del Perú, sustentó la necesidad de adquirir un nuevo avión presidencial, estableciendo para tal fin los criterios básicos de carácter operativo que debía cumplir dicha compra. Así también y mientras se concretaba la compra del nuevo avión se recomendó invertir US \$ 2'700, 000.00 a efecto de reparar el avión FOKKER F-28, para emplearlo como alterno del avión presidencial.
2. El 9 de mayo de 1995 se emitió el Decreto de Urgencia secreto 28-95 – que carece de validez jurídica por las razones explicadas anteriormente – suscrito por Alberto Fujimori Fujimori, Presidente de la República, Efraín Goldemberg Schreiber, Presidente del Consejo de Ministros, Jorge Camet Dickman, Ministro de Economía y Finanzas, Víctor Malca Villanueva, Ministro de Defensa, que autorizó a los programas 04 Ejército, 05 Marina de Guerra y 06 Fuerza Aérea del Pliego 26 Ministerio de Defensa **a adquirir mediante Adjudicación Directa**³, exonerada de Licitación, Concurso de Méritos y Concurso de Precios Públicos o Privados, los bienes, servicios, contratación de obras **efectuadas y por efectuar durante el presente ejercicio**, que sean necesarios para apoyar el sistema logístico de las Fuerzas Armadas.
3. Mediante Acta Nº 06-CSFA-95 y Acuerdo Nº 06-CSFA-95, ambos de 21 de junio de 1995, el Consejo Superior de la Fuerza Aérea del Perú, conformado por el General del Aire Enrique Astete Baca, Tenientes Generales FAP: Luis Bouroncle Loayza, Waldo Richter Cruz, Orlando Butron Horna, Danfer Suarez Carranza y el Mayor General FAP Pablo Carbone Merino, recomendó la adquisición de un avión Boeing 737-528 (avión básico) y un paquete de repuestos para 1,000 horas de operación, ofertado por la empresa The Boeing Company, así como repuestos adicionales y acondicionamiento interior por un total de US \$ 29'394,796.91, cuya evaluación estuvo a cargo de una Comisión Especial presidida por el Mayor General FAP Enrique González Vásquez.

Aquí se presentaría la primera irregularidad en la medida que se evidencia la voluntad de adquirir determinada marca y modelo de avión: Boeing 737-528 (en un mercado que ofrece variedad de opciones) y no un patrón de avión con determinadas características, a efecto de que diversos proveedores presenten cotizaciones.

4. Asimismo la adjudicación se realizó liberada de licitación o concurso público en razón a lo expuesto en el DU 028-95 antes mencionado, pese a que en cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 26404, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 1995, la adquisición del avión presidencial requería que se realice mediante licitación pública. Otra irregularidad producida con dicha adquisición estaría referida a que las exoneraciones aludidas eran para compras que estuvieran relacionadas a apoyar el sistema logístico de las fuerzas armadas. Supuestamente se requería celeridad en la adquisición de equipo militar para repotenciar nuestra capacidad ofensiva, por lo que la compra del avión presidencial ("inserta de contrabando") quedaba al margen de la exoneración de pasar por concurso público de precios o licitación pública.

³ El artículo 4.5.3 del Decreto Supremo Nº 065-85PCM – Reglamento Único de Adquisiciones para el Suministro de Bienes y Prestación de Servicios no Personales en el Sector Público, prescribe que para la Adjudicación Directa se requiere un mínimo de tres cotizaciones sobre el mismo tipo de bien o de servicio.

5. Cabe hacer hincapié en el hecho que los adelantos de pago y ulterior contrato firmado con la Boeing acaecieron antes de que se contase con el presupuesto aprobado para realizar tal adquisición (DU 046-95) habiéndose violentado a su vez el procedimiento que correspondía (adjudicación directa). A continuación se hace un listado de las acciones irregularmente ejecutadas:
- El 4 de julio de 1995, mediante Oficio IV-170-DEDT N° 1174, suscrito por el Mayor General FAP Javier Pasco Valladares, Director General de Economía, Comandante FAP Alfredo Landeo Lema, Director de Tesorería, y el señor Atilio Valencia Bendezú, Contador de Tesorería, se emitió la orden de un giro cablegráfico a favor de The Boeing Company por la suma de US \$ 271,200.00.
 - El 10 de julio de 1995 se emitió la Resolución Suprema N° 0323-DE/FAP, suscrita por Alberto Fujimori Fujimori y el General Víctor Malca Villanueva, Ministro de Defensa, nombrando al Mayor General FAP Enrique González Vásquez, Comandante General del Ala Aérea N° 2, como representante del Gobierno del Perú para que intervenga en la suscripción del contrato de adquisición, recepción y traslado de un avión Boeing 737-500 de la Compañía Boeing Comercial Airplane Group.
 - Esta Resolución Suprema eludió el procedimiento establecido, en el cual se establecía que el Director General de Economía de FAP era el funcionario autorizado para suscribir el contrato. Así también, denota el interés de Alberto Fujimori Fujimori en la ejecución del contrato con la Boeing Company sin haberse barajado otras ofertas, lo que constituiría delito de negociaciones incompatibles preceptuado en el Art. 397° de nuestro Código Penal.
 - El 2 de agosto de 1995, el Estado Peruano representado por el Mayor General FAP Enrique González Vásquez, Comandante General del Ala Aérea N° 2, suscribió el Contrato de Compra N° 1883 con The Boeing Company para la adquisición de una aeronave Modelo 737-528 y repuestos para 1,000 horas de vuelo por un total de US \$ 27'640,000.00, en esa misma fecha, The Boeing Sales Corporation emitió la factura N° 58506 correspondiente.
6. **Pero es recién el 8 de agosto de 1995, 6 días después de haberse suscrito el contrato, que se emite el Decreto de Urgencia Secreto 046-95,** firmado por Alberto Fujimori Fujimori, Presidente de la República, Dante Córdova Blanco, Presidente del Consejo de Ministros, Jorge Camet Dickman, Ministro de Economía y Finanzas, y Víctor Malca Villanueva, Ministro de Defensa, que autorizó a la Dirección General de Presupuesto Público y a la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas a calendarizar y girar, respectivamente, al Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea del Perú, la suma de S/. 67 000 000,00 - aproximadamente unos US \$ 30 112 359- , con cargo a la fuente de financiamiento del Tesoro Público. Asimismo, se dispuso que los gastos que demandaba tal solicitud, se atenderían con cargo a los recursos provenientes de la privatización y a las modificaciones presupuestarias al cierre del ejercicio fiscal 1995.
7. La adquisición del avión presidencial es un caso paradigmático porque permite apreciar el uso abusivo de los Decretos de Urgencia durante el gobierno de Fujimori. En efecto, según el Art. 5° de la Ley de Control Parlamentario sobre los actos del Presidente (Ley 25397), los Decretos de Urgencia sólo se fundamentan en la

urgencia de dictar normas en situaciones extraordinarias e imprevisibles cuyos efectos o el riesgo inminente que se extiendan, constituyen peligro para la economía nacional o las finanzas públicas, circunstancias que deben quedar expresadas en los considerandos del Decreto.

8. No obstante las limitaciones para el recurso a los Decretos de Urgencia, conforme a la Constitución y la Ley 25397, Alberto Fujimori vía el DU 046-95 quiso defraudar al Estado. Así, en los considerandos del DU 046-95, no se aprecia la existencia de situación extraordinaria alguna que comprometiese el interés nacional, que justificara un desembolso de 30 millones de dólares. Ahora bien, existe un tácito reconocimiento de ello en la medida que en el Decreto de Urgencia que dispone la compra del avión no se alude a la trillada muletilla de otros decretos: «para fines de seguridad nacional», lo que implicaría que ellos eran conscientes de que ni forzando la figura podían utilizar dinero de las privatizaciones para una compra de ese tipo.
9. La adquisición del avión presidencial revistió mayor gravedad en la medida que nos encontrábamos en permanente conflicto con el Ecuador, por lo que resultaba más razonable invertir dicho dinero en equipo bélico idóneo. De otra parte en el presente caso se ha producido una evidente malversación de fondos en la medida que se utilizó fondos de la privatización destinados a programas asistenciales y de apoyo social, lo que implicó una aplicación definitiva distinta de los fondos aludidos, con la subsiguiente afectación del servicio.
10. Incluido el adelanto pagado el 4 de julio de 1995, el Mayor General FAP Javier Pasco Valladares, Director General de Economía, el Comandante FAP Alfredo Landeo Lema, Director de Tesorería, y el señor Atilio Valencia Bendezú, Contador de Tesorería, autorizaron pagos a la empresa The Boeing Company mediante los siguientes documentos:

Fecha	Documento		Concepto	Importe	
	Número			Parcial	Total
02.AGO.95	Contrato		Costo del avión y repuestos		27 640 000,00
04.JUL.95	Oficio IV-170-DEDT N° 1174		Adelanto	271 200,00	
08.AGO.95	Oficio IV-170-DEDT N° 1499		Pago a cuenta	2 500 000,00	
25.AGO.95	Oficio IV-170-DEDT N° 1633		Pago a cuenta	22 228 800,00	
27.OCT.95	Mensaje por Facsímil N° 1294		Pago a cuenta	2 108 216,63	
					(27 108 216,63)
Importe cuyo pago no ha sido evidenciado					531 783,37

11. Debido a que el contrato fue suscrito el 2 de agosto y que recién el 8 de agosto de 1995 se emitió el Decreto de Urgencia secreto 046-95 que aprobó el presupuesto para la adquisición del avión presidencial, con la finalidad de regularizar la compra se prepararon los documentos que se detallan a continuación:
 - El 13 de agosto de 1995, el Coronel FAP Pedro Suárez Galecio, Comandante del Servicio de Abastecimiento Técnico, y el Mayor FAP Juan Cantuarias Pace, Jefe del Departamento de Adquisiciones, suscribieron el Pedido N° 3225-EP-SAT-95, solicitando la adquisición de un Boeing modelo 737-528 (básico) valorizado en US \$ 25'000,000.00; acondicionamiento interior ejecutivo presidencial valorizado en

US \$ 2'025,000.00; sistema auxiliar de combustible con capacidad para 6,700 libras y paquete de repuestos para 1,000 horas de operación valorizado en US \$ 2'369,796.91; que en total ascendía a US \$ 29'394,796.21.

- Al día siguiente, el 14 de agosto, la Junta de Régimen Administrativo de la Unidad (JURA) del Servicio de Abastecimiento de la FAP, conformado por el Comandante FAP Esteban Castro Díaz, Comandante FAP Reinaldo Morales Vásquez, Mayor FAP Juan Cantuarias Pace, y el Capitán FAP Pedro Jordán Palma, firmaron el Acta JURA N° 337 en la que recomendaron en «Vía de Regularización» adquirir el avión Boeing 737-528 (básico) y paquete de repuestos para 1 000 horas de operación ofertado por The Boeing Company, por cumplir con los criterios establecidos en el Anexo IV del Estudio de la Comisión Evaluadora; asimismo, recomendaron adquirir los servicios de acondicionamiento interior de la aeronave.
 - Mediante Resolución Ministerial N° 1574-DE/FAP-CE de 29.DIC.95, suscrita por el Mayor General FAP Rolando Magni Flores, Director de Material FAP, Coronel Art. EP. Raúl O'Connor La Rosa, Jefe de la Sub Secretaría de Coordinación y Dispositivos Legales del Ministerio de Defensa, y el General EP Víctor Malca Villanueva, Ministro de Defensa, se aprobó irregularmente en «Vía de Regularización» la adjudicación directa en la «modalidad de compra directa» que efectuó el Programa N° 06 de la Fuerza Aérea, conforme al Pedido N° 32225-EP-SAT-95.
 - El 30 de septiembre de 1995, se emiten en «Vía de Regularización» las Ordenes de Compra – Guías de Internamiento para adquirir el avión presidencial, repuestos y acondicionamiento interior.
12. Mediante Oficio N° II-67-SADT-N° 0018 de 13 de enero del año 1997, firmado por el Coronel FAP Jorge Damila Cabrejos, Comandante del Servicio de Abastecimiento Técnico y el Comandante FAP Armando Vega Rodríguez, se solicita el alta de inventarios de una aeronave Boeing, Modelo 737-528, asignada al Grupo Aéreo N° 8. En atención a lo solicitado, mediante Decreto Supremo secreto N° 021-DE-FAP de 25 de abril de 1997, firmado por el ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, Presidente de la República, General EP Tomás Castillo Meza, Ministro de Defensa, Coronel Luis Vera Betancourt, Secretario de Coordinación y Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa, y el Mayor General FAP Carlos Portillo Vásquez, Secretario General de la FAP, se aprobó el alta de los inventarios de la aeronave Boeing, Modelo 737-528, la misma que es asignada al Grupo Aéreo N° 8.
13. Como bien puede advertirse, el proceso de adquisición del avión presidencial no sólo ha violado las reglas más elementales de la contratación pública y con ello diversos dispositivos de naturaleza penal, sino también las normas relativas al análisis económico financiero de la oferta finalmente aceptada, habida cuenta además de que para la adquisición no se contó siquiera con otras ofertas o cotizaciones que permitieran un mayor bagaje de posibilidades de contratación, las cuales se requerían conforme a ley. A fin de encubrir estas graves irregularidades se acude al uso de dispositivos secretos a todas luces inconstitucionales.

IV. EL CASO DE LA IRREGULAR ADQUISICIÓN DE LOS MIG-29 y SU-25

IV.1 Generalidades

1. En el año 1995 tropas ecuatorianas invadieron la zona peruana del Alto Cenepa, derribando varias aeronaves (ya desde 1994). Por otro lado, según informe de la FAP, la capacidad operativa de la Fuerza Aérea bordeaba el 30.6%; en esa coyuntura era de necesidad reforzar la defensa aérea para recuperar el equilibrio estratégico perdido frente al Ecuador.
2. El fraudulento proceso de adquisición de aviones MIG-29 y SU-25 en el contexto de conflicto con el Ecuador, se desarrolló conforme a la secuencia cronológica que, con fines de explicación general, se precisa en el siguiente cuadro:

Hechos del Conflicto Fronterizo con el Ecuador	Disposición de Recursos y emisión de normas secretas																								
La situación que atravesaba el Perú en su frontera norte con Ecuador entre los años 1991 a 1995-1998 era de gran tensión. En 1991 se enfrentó el incidente del Falso Pasquisa, el cual culminaría con la suscripción del llamado Pacto de Caballeros.	La capacidad operativa de la Fuerza Aérea representaba en 1994 el 30.6% del total de sus aeronaves de combate. En diciembre de 1995 y en las proyecciones a diciembre de 1996, se indicaba un porcentaje de operatividad anual inferior al 50%, pese a las inversiones realizadas, siendo el porcentaje de operatividad de aeronaves de combate del 41%.																								
El conflicto del Alto Cenepa, tuvo su punto mas alto álgido entre enero y marzo de 1995. La alta tecnología adquirida por el Ecuador para la guerra electrónica, sumado al desproporcionado desequilibrio estratégico entre las fuerzas del Ecuador y las peruanas, determinó que en el conflicto armado del año 1995, el Ecuador derribara dos (02) aviones SU-22, un (01) avión Camberra, un (01) avión A-37 y un (01) helicóptero MI-25 de la Fuerza Aérea Peruana y tres (03) helicópteros MI-17 del Ejército Peruano, en tanto que el Perú no logró derribar ninguna aeronave ecuatoriana. Los aviones Mirage 2000 que participaron en el conflicto, no tenían armamento aire/aire así como tampoco tenían autoprotección de guerra electrónica.	Entre 1994 y 1995 el gobierno sólo había destinado US\$ 39'600,000.00 para recuperar la capacidad operativa de la FAP. De la Ejecución Presupuestal, del Sector Defensa entre 1990 - 1994 podemos señalar el siguiente detalle, en millones de soles: <table border="1" data-bbox="748 1017 1362 1187"> <thead> <tr> <th></th> <th>1990</th> <th>1991</th> <th>1992</th> <th>1993</th> <th>1994</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GASTO CORRIENTE</td> <td>118.7</td> <td>460.7</td> <td>918.4</td> <td>1349</td> <td>1914</td> </tr> <tr> <td>GASTO DE CAPITAL</td> <td>7.3</td> <td>18.6</td> <td>22.6</td> <td>25.8</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>126</td> <td>479.2</td> <td>941</td> <td>1375</td> <td>1972</td> </tr> </tbody> </table>		1990	1991	1992	1993	1994	GASTO CORRIENTE	118.7	460.7	918.4	1349	1914	GASTO DE CAPITAL	7.3	18.6	22.6	25.8	58	TOTAL	126	479.2	941	1375	1972
	1990	1991	1992	1993	1994																				
GASTO CORRIENTE	118.7	460.7	918.4	1349	1914																				
GASTO DE CAPITAL	7.3	18.6	22.6	25.8	58																				
TOTAL	126	479.2	941	1375	1972																				
El 17 de febrero de 1995 se suscribió la Declaración De Paz De Itamaraty (Brasilia). Perú y Ecuador acuerdan iniciar conversaciones destinadas a encontrar soluciones a los impases subsistentes.	A la par que se desarrollaban estas tensas negociaciones, un instrumento crucial para la paz lo constituía el desarrollo de una estrategia defensiva - ofensiva, modernizando la fuerza armada, incorporando los adelantos de la guerra electrónica, e incrementando la capacidad operativa de la Fuerza Aérea del Perú.																								
28 de febrero de 1995. Declaración De Montevideo. Los países garantes reiteran su compromiso de cumplir con las obligaciones que les imponía el Protocolo de 1942.																									

Hechos del Conflicto Fronterizo con el Ecuador	Disposición de Recursos y emisión de normas secretas
<p>10 de marzo de 1995. La Misión de Observadores Militares Ecuador Perú (MOMEPE) inicia sus reuniones en Lima. Finalmente, fija la zona desmilitarizada, se dispone que habrá equiparidad de fuerzas militares en la frontera. El proceso de implementación de la zona desmilitarizada se inicia el 10 de marzo y el 25 de julio se define cual habría de ser la Zona, medida que entraría en vigencia el 1 de Octubre, a fin que la desmovilización de las unidades ubicadas en la zona de conflicto concluya el 23 de febrero de 1996.</p>	<p>En junio de 1995, el Comandante General de la FAP, Enrique Astete Baca, recibió de parte de la empresa LINCA S.A. una propuesta para adquirir de la República de Ucrania un sistema integral de defensa aérea. El 26 de junio de 1995 se suscribió un Protocolo de Intención con la delegación del Perú. El 20 de julio de 1995 el Comandante General de la FAP Enrique Astete elabora una Hoja de Recomendación COFA-0027 dirigida al Presidente Alberto Fujimori. El 21 de agosto de 1995, el entonces Presidente de la República Alberto Fujimori, expide un Memorandum s/n dirigido al Ministro de Defensa Víctor Malca Villanueva para hacerle de su conocimiento la formación de una Comisión encargada de estudiar la forma de satisfacer los requerimientos de la Fuerza Aérea. El 25 de agosto de 1995, el Ministro de Defensa comunica al Comandante de la FAP el nombramiento de la Comisión Reservada designada por el Presidente que se encargue de la compra de un sistema integral de armamento. El 02 de octubre de 1995, la Comisión Reservada nombrada por el Presidente Alberto Fujimori y el Ministro de Defensa Víctor Malca, tras viajar a Rusia y Ucrania, desestima por unanimidad la propuesta de Ucrania y propone que sea aceptada la oferta de W-21 INTERTHECNIQUE. El 22 de octubre de 1995 y el 17 de noviembre del mismo año, TREVES INTORA y W-21 INTERTHECNIQUE informan al gobierno peruano que su oferta se limita al suministro de aviones de segundo uso pertenecientes a las fuerzas armadas de Bielorrusia. El 21 de diciembre de 1995, el Comandante General de la FAP informa al Ministro de Defensa que se ha aprobado la oferta de Bielorrusia.</p>
<p>1996. Enero/Febrero. Reuniones de Cancilleres. Los cancilleres de Perú y Ecuador se reúnen en Lima (17 y 18 de enero) y Quito (22 y 23 de febrero), donde entregan a los representantes de los garantes sus relaciones de impases subsistentes.</p>	<p>El 14 de febrero de 1996 el Consejo de Defensa Nacional recibió la exposición del general FAP Rolando Magni, quien planteó la urgente e imperiosa necesidad de la adquisición del sistema de armas interceptor. Esa misma fecha, el Comandante General de la FAP Waldo Richter, nombra una Comisión Especial presidida por el mayor Carlos Modenessi e integrada por otros oficiales para que determine el sistema de armas que satisfaga los requerimientos de la FAP. El 26 de febrero de 1996, ésta Comisión eleva su informe en el que se selecciona al avión MIG 29 como el más conveniente luego de evaluar entre las aeronaves SU 27, M2000, MIG 29 y F16. El 15 de febrero de 1996 es convocado el ex Ministro de Economía, Ing. Jorge Camet Dickman por el Presidente Fujimori para que se haga cargo de los aspectos económicos del contrato. Al Ministro le fueron entregados los documentos para que intervenga, por encargo del Presidente, en la determinación final de los precios.</p>
<p>6 de marzo de 1996. Reunión en Brasilia. Los representantes de los países garantes entregan a los cancilleres de Perú y Ecuador las listas de impases subsistentes preparadas por ambos países.</p>	
<p>18 de junio de 1996. Reunión en Buenos Aires. Se establecen los procedimientos para tratar los impases subsistentes.</p>	<p>Para este contrato se dictó el Decreto de Urgencia 028-96 del 6 de mayo de 1996. Los contratos para la adquisición del sistema de armas MIG 29, se firman el 13 de mayo de 1996 con los Adendums N° 001 del 29 de mayo, N° 002 del 30 de mayo de 1996 y N° 003 del 3 de diciembre de 1997</p>

Hechos del Conflicto Fronterizo con el Ecuador	Disposición de Recursos y emisión de normas secretas
<p>28 de octubre. Acuerdo de Santiago. Se acordó que los impases subsistentes serían tratados en forma separada, secuencial y sin vetos y con la colaboración eventual de los garantes.</p>	<p>El 21 de octubre de 1996 se suscribe el contrato para la adquisición de los SU-25 en las mismas condiciones que el contrato anterior. Para este contrato se había dictado el 16 de octubre de 1996, el Decreto de Urgencia 075-96, autorizando el uso de \$150 millones de dólares provenientes de la privatización.</p>
<p>1997. 26 de noviembre. Declaración de Brasilia. Segunda fase de las conversaciones. Se acuerda buscar la solución final mediante la creación de cuatro Comisiones que estudiarían (a) un tratado de comercio y navegación, (b) un acuerdo amplio de integración fronteriza, (c) la fijación en el terreno de la frontera terrestre común y (d) el establecimiento de medidas de confianza mutua y seguridad.</p>	
<p>1998. 19 de enero. Se aprobó el cronograma de las conversaciones con el propósito de culminarlas el 30 de mayo. Esta fue una reunión de importancia pues se puso fecha a la entrega de los pareceres trabajados por las comisiones mixtas. El marco de las mismas, cuyos pareceres técnicos jurídicos, sobre todo en la demarcación territorial fueron favorables al Perú, y contaban con el apoyo de los países garantes, eran el marco en el cual las tensiones fronterizas localizadas debían interpretarse como tales.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Comisión de un Tratado de Comercio y Navegación se instaló el 17 de febrero y el 16 de junio llegaron a un punto muerto. El 13 de septiembre aprueban una versión, que es ratificada en Brasilia. 2. La Comisión de Integración Fronteriza, se instaló el 17 de Febrero. Concluyó sus labores el 21 de mayo y entregaron su informe el 11 de Junio. 3. Comisión de Fijación en el Terreno de la Frontera Terrestre Común. Se instaló el 17 de Febrero. El 8 de Mayo hicieron entrega de sus opiniones-pareceres, que eran favorables al Perú. 4. Comisión binacional sobre medidas de confianza mutua y seguridad. Inició sus actividades el 17 de Febrero. El 20 de abril suscribió un acta con lo acordado. 5. Comisión sobre el Canal de Zarumilla. Se instaló el 2 de marzo. Adoptó sus acuerdos el 8 de abril. 	

Hechos del Conflicto Fronterizo con el Ecuador	Disposición de Recursos y emisión de normas secretas
<p>28 Julio al 13 de agosto de 1998. Ante una nueva infiltración ecuatoriana en la zona de la Cordillera del Cóndor, y en función del marco de relaciones internacionales y de opinión de los países garantes en torno a lo avanzado por las comisiones técnico jurídicas, interviene la MOMEPE y establece una nueva Zona de Control y Vigilancia ubicada al sur de la primitiva Zona Desmilitarizada. El 10 de Agosto, Jamil Mahuad asume la Presidencia de Ecuador, y se reúne con Fujimori el 13 de Agosto en Brasilia.</p>	<p>El 9 de Junio de 1998, con el Acta N° 05-CSFA-98 en la Sesión del Consejo Superior de la Fuerza Aérea resuelve Aprobar la adquisición de tres (03) aeronaves MIG-29 a la República de Rusia Cía. ROSVOOROUZHEINE con su respectivo armamento, soporte logístico e instrucción para completar el Sistema de Armas Interceptor del tipo MIG-29 por un monto aproximado de US\$ 126'290,000.00 dólares americanos. El 4 de julio de 1998, se firmó el Contrato de Suministro de Material de Aviación y accesorios y equipos entre la República del Perú, representada por el Director de Economía del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea del Perú Teniente General Claudio Martínez Gandolfo y la Empresa Federal Estatal Unitaria «Compañía Estatal Rosvooruzhenie». El 14 de julio de 1998, 10 días después de haberse suscrito el contrato, se emite el Decreto de Urgencia N° 032-98, donde se autoriza al Ministerio de Defensa la suma de US\$ 126'293,000 dólares americanos, recursos provenientes de la privatización. Recién mediante la Resolución Ministerial N° 1591 DE/FAP-CE de fecha 30 de diciembre de 1999, suscrita por el Ministro de Defensa General de Ejército, Carlos Bergamino Cruz; se aprobó en « Vía de Regularización » la adquisición de tres (03) aviones MIG-29SE y Equipo Asociado, Repuestos y Servicios de Reparación y Mantenimiento de Aviones MIG-29.</p>
<p>El 23 de octubre de 1998, se suscribe el Acuerdo de Paz en Brasilia, en virtud del cual se cedió al Ecuador 1 kilómetro cuadrado en la zona de Tiwinza, entre otras prestaciones a favor del citado Estado extranjero.</p>	<p>Respecto a los contratos de Servicios de Mantenimiento y provisión de Repuestos para los MIG 29 y SU 25, en diciembre de 1996, se hace el requerimiento y se dicta el 25 de junio de 1997 el Decreto de Urgencia 060-97 por \$ 50 millones de dólares para atender con carácter de muy urgente y prioritario, los requerimientos formulados. Recién un año después, el 21 de julio de 1998 se dicta el Decreto de Urgencia 038-98, por el cual se asignan \$20 millones de dólares para servicios y \$ 10 millones de dólares para repuestos. De este modo, en el período de mayor tensión en la frontera y con aeronaves compradas con garantía técnica de seis meses y repuestos limitados se demoró la compra por cerca de dos años y recién se puso en efectividad el Service luego de la firma del Acuerdo de Paz de octubre del 98, habiéndose realizado las acciones del Service entre diciembre del 98 y diciembre del 99.</p>

IV.2 Compra de aviones MIG-29 y SU-25 de Segundo Uso a Bielorrusia

1. En junio de 1995, el Comandante General de la FAP, Enrique Astete Baca, recibió de parte de la empresa LINCA SA una propuesta para adquirir de la República de Ucrania un sistema integral de defensa aérea. El referido General designó a dos oficiales para que evalúen la factibilidad de la propuesta; quienes viajaron a Ucrania llevando en su poder la Carta II-70-DIMA-0222 suscrita por el propio general, la misma que acredita al coronel FAP Luis Spicer Wihittembury como representante personal del Comandante General de la FAP, con el mandato ejecutivo de aprobar, de ser posible, la mencionada oferta.

2. La empresa LINCA S.A. tenía como actividad inicial el negocio de alimentos, ampliando posteriormente su objeto a la comercialización de equipamiento militar. Aunque contando en 1995 únicamente con un capital de 150 mil soles, ello no fue razón para la aceptación de su propuesta, teniendo en consideración el riesgo ante un incumplimiento contractual.
3. Como resultado de este viaje, el 26 de junio de 1995, se suscribió un Protocolo de Intención entre la delegación del Perú, el representante de LINCA S.A., Víctor Santander, y el Ministerio de Defensa de Ucrania, documento que da origen a la oferta técnico-económica enviada por la empresa LINCA S.A. el 16 de julio de 1995. El 20 de julio de 1995, el Comandante General de la FAP Enrique Astete elabora una Hoja de Recomendación COFA-0027 dirigida al Presidente Alberto Fujimori. En este documento el Comandante General de la FAP expresa la necesidad de adquirir equipo para la Fuerza Aérea, poniendo a consideración del Presidente de la República la oferta de Ucrania.
4. Esta empresa estuvo interesada en negociar con la fuerza aérea, presentando diversas ofertas: el 16 de julio del 1995 la oferta de Ucrania; el 29 de diciembre del mismo año la oferta de Moldavia, la que se remitió al ex Presidente Fujimori el 10 de enero de 1996; el 09 de enero de ese año presentó la oferta de la Federación Rusa.
5. Según manifestación del General FAP Enrique Astete Baca la oferta presentada por LINCA S.A. por los equipos de Ucrania abortó, porque las negociaciones se filtraron a la prensa. Estados Unidos advirtió al Gobierno de Ucrania que suspendería la ayuda económica que tenía con este país, si es que éste no cumplía con el acuerdo de destruir y no vender el material bélico excedente que heredó de la Unión Soviética. Asimismo, el General FAP Astete señaló que sólo el Presidente de la República y el Ministro de Defensa Víctor Malca tenían conocimiento de las negociaciones y acuerdos arribados con Ucrania.
6. En su testimonio ante la Comisión Móralas, el señor Alberto Venero Garrido informó que el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos le hizo conocer sobre la existencia de la oferta Ucraniana. Es más, le adelantó que sería rechazada y ambos acordaron organizar una propuesta alternativa.
7. De acuerdo a los hechos mencionados, se venían contraviniendo los procedimientos de carácter administrativo y técnico operativos establecidos para la adquisición de aeronaves de acuerdo a la Ordenanza FAP 70-2 – sobre proceso de adquisición de aviones – en cuyo párrafo sexto, inciso b) se establece que «corresponde al Estado Mayor de la FAP proponer el nombramiento de la Comisión que se encargará del estudio, adquisición y financiamiento de las aeronaves en los casos de renovación e incremento».
8. Con fecha 21 de agosto de 1995, el entonces Presidente de la República Alberto Fujimori, expide un Memorándum s/n dirigido al Ministro de Defensa Víctor Malca Villanueva para hacerle de su conocimiento la formación de una Comisión encargada de estudiar la forma de satisfacer los requerimientos de la Fuerza Aérea, **transgrediendo con este acto el procedimiento institucional para la adquisición de aeronaves;** esta Comisión, compuesta por seis miembros, estuvo encabezada por el Mayor General Rolando Magni Flores y por el Sub Director de

Inteligencia FAP, Rubén Mimbela; coincidiendo en tal fecha, la empresa TREVES INTORA, invita a una delegación de la FAP a viajar a Rusia.

9. El 25 de agosto de 1995, el Ministro de Defensa comunica al Comandante de la FAP el nombramiento de la Comisión Reservada designada por el Presidente encargada de la compra de un sistema integral de armamento.
10. Con Oficio I-70-CRETO N° 001 del 02 de octubre de 1995, la Comisión Reservada nombrada por el Presidente Alberto Fujimori y el Ministro de Defensa Víctor Malca, tras viajar a Rusia y Ucrania, desestima por unanimidad la propuesta de Ucrania y proponen que sea aceptada la oferta de W-21 INTERTHECNIQUE (empresa representante de la compañía TREVES INTORA y ante el Gobierno del Perú como representante de la empresa estatal bielorrusa Beltec Export).
11. La empresa TREVES INTORA recién se constituyó en las Bahamas el 25 de octubre de 1995, en evidente relación con el negocio de la venta de aviones a la Fuerza Aérea del Perú. Por otro lado cabe mencionar que recién el 27 de febrero de 1998 solicitó su inscripción en el registro de proveedores de la FAP.
12. El 07 de marzo de 1996, Benavides Morales transfiere su empresa W21 a Moshe Rostchild. En las declaraciones de Alberto Venero se expresa que este cambio se realizó por indicación de Vladimiro Montesinos, porque Oscar Benavides Morales «estaba muy cuestionado por otras operaciones de venta de armamentos».
13. La FAP solicitó a TREVES INTORA que confirme la posibilidad de atender un eventual requerimiento de aviones MIG 29 y SU25 y material de defensa. La compañía TREVES INTORA responde que puede suministrar aviones MIG29 y SU25 nuevos de Rusia con un plazo de tres años y también aviones MIG29 y SU25, así como material de defensa aérea de segundo uso entre seis y doce meses de plazo; el 22 de octubre de 1995 y el 17 de noviembre del mismo año, TREVES INTORA y W-21 INTERTHECNIQUE informan al gobierno peruano que su oferta se limita al suministro de aviones de segundo uso pertenecientes a las fuerzas armadas de Bielorrusia.
14. La FAP designó una Comisión Presidida por el General Rolando Magni para que viaje a Bielorrusia. A su retorno, el 19 de diciembre de 1995, ésta Comisión informó favorablemente en relación con la propuesta de TREVES INTORA y W-21 INTERTHECNIQUE. Con Oficio I-70-COFA-PE 390 de 21 de diciembre de 1995 el Comandante General de la FAP informa al Ministro de Defensa que se ha aprobado la oferta de Bielorrusia.
15. El 22 de enero de 1996, el nuevo Comandante General de la FAP, Waldo Richter, propone que la adquisición del sistema integral de defensa aérea se ejecute en dos etapas: la primera con una suma de 266 millones de dólares, y la segunda con 465 millones de dólares. El 23 de enero, el nuevo Ministro de Defensa, Tomás Castillo Meza, encarga al Teniente General FAP Dánfer Suárez Carranza evaluar los requerimientos adicionales que plantea la Comandancia General de la FAP para el sistema de armas disuasivas.
16. Con fecha 09 de febrero de 1996, a través del Oficio 007 SG MD-A, el Ministro de Defensa Tomás Castillo Meza recibe la propuesta de la Comisión presidida por el General Dánfer Suárez Carranza. Esta Comisión, que estaba integrada por cuatro

oficiales de la FAP, además del General Suárez, coincide con el estudio de la Comisión Magni.

17. El 14 de febrero de 1996, el Consejo de Defensa Nacional recibió la exposición del General FAP Rolando Magni, quien planteó la urgente e imperiosa necesidad de la adquisición del sistema de armas interceptor. Esa misma fecha, el Comandante General de la FAP Waldo Richter, nombra una Comisión Especial presidida por el mayor Carlos Modenessi e integrada por otros oficiales para que determine el sistema de armas que satisfaga los requerimientos de la FAP. El 26 de febrero de 1996, ésta Comisión eleva su informe en el que se selecciona al avión MIG 29 como el más conveniente luego de evaluar entre las aeronaves SU 27, M2000, MIG 29 y F16.
18. El Informe brindado a la Comisión Morales por parte del Ministro de Defensa, General Walter Ledesma, señala que la Comisión Modenessi no cumplió los criterios para la selección del sistema de armas interceptor, proporcionando falsa información, pues el MIG 29 es un caza interceptor de corto alcance, con un radio de acción de 340 y 395 Km., disminuyendo este rango conforme decrece la altura de la operación. Tampoco puede portar misiles antirradáricos y para disparar cañones debe necesariamente eyectar el tanque ventral de combustible. Esta irregularidad se hace más evidente cuando uno de los miembros de dicha Comisión, el Comandante FAP Ricardo Vílchez Raa, fue nombrado posteriormente Comando de Grupo de los aviones MIG 29, permaneciendo en ese puesto 4 años, caso inédito en la historia de la FAP.
19. El 15 de febrero de 1996, es convocado el ex Ministro de Economía, Ing. Jorge Camet Dickman por el Presidente Fujimori para que se haga cargo de los aspectos económicos del contrato. Al Ministro le fueron entregados los documentos para que intervenga, por encargo del Presidente en la determinación final de los precios.
20. Según Informe N° 015-2001-CG/B370 efectuado en el Ministerio de Defensa sobre el proceso adquisitivo de armamento militar y otros bienes y servicios del período 1990 al 2000 por la Contraloría General de la República, se determina que el Ministerio de Defensa solicitó opinión previa de la Contraloría con posterioridad a la suscripción de los contratos para la adquisición de aviones MIG 29 y SU 25; sorprendiendo en la obtención de la opinión favorable.
21. Los contratos para la adquisición del sistema de armas MIG 29, se firman el 13 de mayo de 1996 con los Adendums N° 001 del 29 de mayo, N° 002 del 30 de mayo de 1996 y N° 003 del 3 de diciembre de 1997; suscribiendo por la FAP, el Director de Material Rolando Magni, autorizado mediante R.M. 423-DE-FAP, pese a que debía hacerlo el Director de Economía, mientras que por los proveedores suscribe el Sr. Moshe Rothschild representante de W-21 INTERTHECNIQUE.
22. Para este contrato se dictó el Decreto de Urgencia 028-96 del 6 de mayo de 1996, autorizando el uso de \$ 252'052,420.00 dólares de la privatización, suscrito por el ex Presidente Fujimori, el entonces Presidente del Consejo de Ministros Alberto Pandolfi, el Ministro de Economía Jorge Camet y el Ministro de Defensa Tomás Castillo. Este Decreto no fue aprobado por el Consejo de Ministros y tampoco se dio cuenta al Congreso del mismo.
23. Los contratos para la adquisición del sistema de armas MIG 29, se firman el 13 de mayo de 1996 con los Adendums N° 001 del 29 de mayo, N° 002 del 30 de mayo de

1996 y N° 003 del 3 de diciembre de 1997; suscribiendo por la FAP, el Director de Material Rolando Magni, pese a que debía hacerlo el Director de Economía, según la Ordenanza FAP 070. Mientras que por los proveedores suscribe el Sr. Moshe Rothschild representante de W-21 INTERTHECNIQUE.

24. El 21 de octubre de 1996, se suscribe el contrato para la adquisición de los SU-25 en las mismas condiciones que el contrato anterior. Para este contrato se había dictado el 16 de octubre de 1996, el Decreto de Urgencia 075-96, autorizando el uso de \$150 millones de dólares provenientes de la privatización. Fue suscrito con carácter de secreto por el Presidente Alberto Fujimori, por Alberto Pandolfi como Presidente del Consejo de Ministros, por Jorge Camet como Ministro de Economía y por el Ministro de Defensa, Tomás Castillo Meza. Este Decreto no fue aprobado por el Consejo el Ministros y tampoco se dio cuenta al Congreso.

25. La adquisición de armamento debió efectuarse de acuerdo a las disposiciones que se hallaban vigentes, el Decreto Supremo No. 065-85-PCM, Reglamento Unico de Adquisiciones (RUA) para el suministro de Bienes y Prestación de Servicios No Personales para el Sector Público, y la Ordenanza FAP 070-2, habiéndose incumplido en los siguientes aspectos:
 - a) La necesidad de completar, renovar o incrementar aeronaves, la determina el Estado Mayor General (EMGRA), sobre la base del Planeamiento para el Desarrollo de la FAP y los Programas de Inversión.
 - b) El contrato no fue firmado entre DIGEC y el VENDEDOR, en su defecto se nombró un representante del Ministerio de Defensa (MAG FAP Rolando Magni Flores).
 - c) El expediente técnico recién es preparado y aprobado por el Consejo Económico de la FAP en vía de regularización en el año 1998, es decir primero se firmó el contrato y luego se aprobó el expediente.

26. TREVES INTORA se inscribe en Las Bahamas recién el 25 de octubre de 1995, señala como Directores a John Foster y Emiliano Navas y como apoderado a Peter Jeney. No registra bienes y señala como capital autorizado \$5000. Las personas que se señalan como Directores de la empresa, son empleados del Estudio Legal panameño Alemán, Cordero y Asociados que es la que respalda legalmente la inscripción. Se constituyen como una Cuenta-Off Shore para negociar las aeronaves al Perú.

27. Recién el 28 de septiembre de 1995, se constituye W-21 INTERTECHNIQUE S.A. en los Registros Públicos, con un capital de S/. 44,000 integrándola varios proveedores de armamento. Figuran formalmente como socios: Oscar Benavides Morales, Raggio Guerra, Oscar Muelle Flores, Iván Barco Lecussan.

28. El 07 de marzo de 1996, Benavides Morales transfiere la empresa W21 a Moshe Rostchild sin que se modifique el capital de S/. 44,000, debido a lo expresado en el numeral 12 de éste acápite.

29. Según manifestación de Alberto Venero ante la comisión Morales, el ex asesor presidencial exigía, por intermedio suyo, el pago de una comisión, hechos confirmados por las testimoniales de Duthurburu y Valencia, reconociendo además que desde el año 1992 aproximadamente tiene vínculos ilícitos con el ex asesor,

como lo demuestran las investigaciones respecto a la Caja de Pensiones Militar, entre otros; asimismo afirmó que los proveedores de armas que participaron en la adquisición de los aviones son Moshe Rotshild, Enrique Benavides, Klaus Corpancho y Luis Duthurburu. Este último, según Venero, es el encargado de diseñar la parte financiera dirigida a garantizar el pago por la venta de los aviones.

30. En el total de órdenes de pago y facturas sólo figura la firma de Rolando Magni en ambos documentos, sin que exista ninguna firma del representante de Treves Intora, y no existe indicación de la modalidad del cobro. Además, se presentan facturas no de la empresa W-21 Intertechnique, sino de Treves Intora, con actividad en Panamá sin que dicha empresa esté funcionando en dicho país. Esta sólo tiene como referencia legal propia, en su condición de empresa off shore, las señas de un estudio de abogados, con las incógnitas que hemos indicado respecto a sus verdaderos propietarios. Según el testimonio de Luis Duthurburu Cubas, Alberto Venero y Juan Valencia Rosas, los titulares de las cuentas en Panamá son, además del propio Luis Duthurburu Cubas, Moshe Rostchild Chassin, Oscar Muelle Flores, Klaus Corpancho Kleincke.
31. En declaraciones ente Comisión Investigadora Morales, Alberto Venero ha declarado que de dicha cuenta de Treves Intora se han transferido recursos hacia el Perú a través de la modalidad de « repatriación » de dinero vía el banco de Comercio y otras entidades financieras. A la Comisión Investigadora han llegado los listados de «repatriaciones de capitales» realizadas entre los años 1996 al 2000 de la cuenta de Treves Intora del Bex en Panamá, la que suma US\$ 10,379,684.7 por vía del Banco de Comercio y por vía de FINSUR la cantidad de US\$ 31'973,064, haciendo un total de \$ 42'352,748. De esta forma en el año 1996 «repatriaron» US\$ 999,770; en el año 1997, US\$ 16'388,350; en 1998, US\$ 14'401,428; en 1999, US\$ 7'750,198; en el año 2000, US\$ 1'406,501.

IV.3 Contrato de servicio de mantenimiento y repuestos para los aviones MIG-29 y SU-25 Bielorrusos

1. La garantía técnica prevista en los contratos era de seis meses; siendo indispensable para la operatividad de las aeronaves MIG 29 y SU 25, un programa de repuestos, accesorios y mantenimiento.
2. Mediante Oficio I-170-MAIN-Nº 1356 del 17 de diciembre de 1996, firmado por el General del Aire Waldo Richter Cruz, Comandante General de la Fuerza Aérea, se solicitó al Ministerio de Defensa US\$ 50 000 000,00 (Cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América) para la adquisición de materiales para el mantenimiento programado, no programado y eventual de los aviones adquiridos.

El Ministro de Defensa, mediante Oficio N° 8001 MD-06/19.00 del 17 de enero de 1997, se dirige al Ministro de Economía y Finanzas para solicitar financiamiento correspondiente.

3. En atención a lo requerido, el 25 de junio de 1997 se emite el Decreto de Urgencia 060-97 por US \$ 150 000 000,00 (Ciento cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América) para atender con carácter de muy urgente y prioritario, los requerimientos del Pliego 026 – Ministerio de Defensa que se indican a continuación:

- a) Unidad Ejecutora 003 – Defensa Terrestre: US \$ 23 000 000,00.
 - b) Unidad Ejecutora 004 – Defensa Marítima: US \$ 45 000 000,00.
 - c) Unidad Ejecutora 005 – Defensa Aérea: US \$ 82 000 000,00.
4. Basándose en el listado de requerimientos de la FAP y la valorización hecha por los proveedores, en \$ 150 millones de dólares según la Ayuda Memoria, la Comisión Técnica FAP efectuó una priorización para la adquisición del equipamiento requerido; confeccionándose tres listados nominados A, B y C a fin de realizar una adquisición progresiva. Dichos listados fueron entregados al Ministerio de Economía y Finanzas el 10 de diciembre de 1997, sin cotización.
5. Mediante Oficio Nº I-55-COOP Nº 1744 de 26 de diciembre de 1997, el Mayor General FAP Carlos Modenesi Cobian, Comandante de Operaciones de la Fuerza Aérea, remitió al General del Aire Elesván Bello Vásquez, Comandante General de la Fuerza Aérea, el Acta de Coordinación COMOP-COMAT-Nro. 007-97 de fecha 26 de diciembre de 1997, que en sus conclusiones señala lo siguiente:
- a) «Que el soporte técnico – logístico remanente en los sistemas de armas «A» y «B», sólo permitirá el apoyo de mantenimiento programado para la ejecución de operaciones aéreas hasta el 31 de enero de 1998, en vista de haberse consumido la mayoría de los repuestos y partes adquiridas durante el programa de entrenamiento 1997, debiendo efectuarse su pronta reposición de stocks».
 - b) «Que al no contarse con el material y equipo necesario para realizar el mantenimiento no programado, se prevé una disminución progresiva de la operatividad de aeronaves, lo que afectará significativamente el cumplimiento de las operaciones aéreas de entrenamiento y fundamentalmente de las misiones aéreas de combate contempladas en los planes de operaciones vigentes para hacer frente a una contingencia bélica en el frente externo, lo que pone en grave riesgo la seguridad y defensa nacional del país, toda vez que la FAP no podría a partir del 01 FEB 98 cumplir con la misión que la Constitución le asigna como integrante de la fuerza armada ».
 - c) « Que es necesario, con la anticipación del caso, poner en conocimiento del señor Comandante General de la FAP la situación operativo – logística anteriormente indicada, con la finalidad de alertarlo sobre las serias consecuencias que acarrearía el hecho de no solucionarse a la brevedad la situación planteada ».
6. Con fecha 26 de diciembre de 1997, el General del Aire Elesván Bello Vásquez, Comandante General de la Fuerza Aérea, cursó el Oficio Nº I-67-COFA Nº 053 al General EP César Saucedo Sánchez, Ministro de Defensa, a través del cual hizo de su conocimiento que de no atenderse con la debida oportunidad los requerimientos logísticos para los sistemas de armas « A » y « B », cuyos listados se encontraban en poder del Ministerio de Economía y Finanzas, quien era el responsable de todo el proceso económico, la Fuerza Aérea no estaba en condiciones de cumplir con los Planes de Entrenamiento previstos para 1998, así como no podrá contar con aeronaves operativas necesarias para hacer frente a cualquier contingencia bélica que

se pudiera presentar en el frente externo, afectando con ello gravemente la Seguridad y Defensa Nacional.

7. El requerimiento efectuado al Ministro de Defensa fue puesto en conocimiento del ingeniero Jorge Camet Dickman, Ministro de Economía y Finanzas, mediante el Oficio N° 10760-97DE/DM de 29 de diciembre de 1997; quien mediante Oficio N° 003-98.EF/10 de 06 de enero de 1998 dio respuesta manifestando que la documentación remitida era inexacta e inoportuna, y solicitaba a la brevedad la opinión definitiva, debidamente sustentada, de la razonabilidad de los precios del material a adquirirse y también de la conveniencia, precio, condiciones, plazos, etc., de la oferta de mantenimiento y reparaciones, para que pueda concluir la parte de la negociación que era de su competencia.

El 9 de febrero de 1998, Jorge Camet Dickman, Ministro de Economía y Finanzas, cursó el Oficio N° 020-98-EF/10 al Ministro de Defensa, a través del cual informó del avance de las negociaciones con los proveedores.

8. Del 10 al 17 de febrero de 1998, según el COFA 01-08, la FAP efectuó la evaluación de las propuestas presentadas por Beltechexport, formulando los correspondientes contratos. Estos proyectos de contrato fueron entregados por Rolando Magni a Jorge Camet, el 17 de febrero. Entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la Fuerza Aérea del Perú se formó una Comisión integrada por Rolando Magni, el Vice Ministro Alfredo Jalilie y el Asesor Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, Francisco Moreyra, los cuales elaboraron el proyecto de contrato. Según el documento del General Esleván Bello Vásquez quedó a cargo del Ministro de Economía y Finanzas, la incorporación de los aspectos netamente económico - financieros.
9. Mediante Carta de 29 de mayo de 1998, la empresa Treves Intora Association Ltd manifiesta a Jorge Camet Dickman haber tomado conocimiento de los tratos directos con una delegación rusa para el suministro de repuestos y mantenimiento de aeronaves, lo cual no era concordante con el marco general de los contratos suscritos para la venta de aviones, y que ello les ocasionaba daños y perjuicios materiales, económicos y morales que tendrán que ser resarcidos de continuarse en esa ambivalencia.

Asimismo, manifiestan que de continuar esta situación se verían en la obligación de emplazarlo a título personal y al Estado Peruano en forma solidaria en la vía judicial, para reclamar por los daños y perjuicios causados y exigir una reparación que no sólo compense los gastos efectuados por un monto de US \$ 50 000 000,00 (cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América), sino de un monto adicional que determine la autoridad jurisdiccional correspondiente, frente a la inversión efectuada y al lucro cesante.

10. Debido a que no se ejecutó la asignación excepcional a la Fuerza Aérea dispuesta mediante el Decreto de Urgencia 060-97 de 25 de junio de 1997, y considerando que continuaba la situación de emergencia, el 21 de julio de 1998 se emitió el Decreto de Urgencia secreto 038-98-, que aprobó la asignación de US \$ 50 000 000,00 (cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América) para el Sector Defensa – Fuerza Aérea.

11. Con fechas 21 de julio y 3 de agosto de 1998, el General EP Cesar Saucedo Sánchez, Ministro de Defensa, cursó los Oficios N° 0051 y 0053-98-DE al señor Jorge Baca Campodónico, Ministro de Economía y Finanzas, solicitando la transferencia inmediata de US \$ 30 000 000,00 (Treinta millones de Dólares de Estados Unidos de América), transferencia que fue aprobada mediante Decreto de Urgencia 038-98; precisando que se encontraban pendientes de atención US \$ 20 000 000,00 (Veinte millones de dólares de los Estados Unidos de América) que eran necesarios para completar la operatividad de los Sistemas « A » y « B », lo que permitiría a la Fuerza Aérea estar en condiciones de contribuir a garantizar la Seguridad y Defensa Nacional.
12. Con la finalidad de aparentar el cumplimiento de las formalidades, se efectuó una licitación privada para contratar los servicios de reparación y mantenimiento no programado por el importe de US \$ 20 millones y la adquisición de repuestos por US \$ 10 millones para la flota de aeronaves MIG-29 y SU-25; cantidades que habían sido asignadas con el Decreto de Urgencia 038-98 de 21 de julio de 1998.

Para la adquisición de repuestos y accesorios prioritarios se efectuó el proceso de adquisición mediante la Licitación Privada 019-1998 de fecha 24-08-98, invitándose a las Cías. Beltechexport (Treves Intora), Lizin Center (Soide), Kiev Aviation (Shemesh), Zefeya (Muvarch) aprobándose en el Consejo Económico, la propuesta presentada por la Cía. Beltechexport (Treves Intora) con la Sesión N° 0012-98 del 25-11-98 y adjudicándose mediante R.M. N° 346 DE/FAP del 31-03-99 por un monto de US \$ 10 millones.

Para la contratación de Servicios de Reparación de Equipos y Sistemas de la Flota de aviones MIG-29, se efectuó el proceso de contratación mediante la Licitación Privada 020-1998 de fecha 24-08-98, invitándose a las Cías. Beltechexport (Treves Intora), Lizin Center (Soide), Kiev Aviation (Shemesh). El Consejo Económico aprobó mediante la Sesión N° 0010-98 del 08-09-98 la propuesta presentada por la Cía. Beltechexport (Treves Intora) y le adjudicó mediante R.M. 1328 DE/FAP del 22-12-98 el contrato por un monto de US \$20 millones.

13. De este modo, **en el período de mayor tensión en la frontera y con aeronaves compradas con garantía técnica de seis meses y repuestos limitados se demoró la compra por cerca de dos años y recién se puso en efectividad el Service luego de la firma del Acuerdo de Paz de octubre del 98, habiéndose realizado las acciones del Service entre diciembre del 98 y diciembre del 99.**
14. El Comandante del Grupo Aéreo N° 6, mediante Oficio II-66-E606 N° 3565 de 13 de diciembre del 2000 informó que, en vista de la carencia de un paquete de repuestos y volantes destinado a asegurar el soporte logístico y, a fin de asegurar una óptima operatividad de la flota MIG-29, la superioridad efectuó las gestiones correspondientes y contrató un servicio de mantenimiento conformado por 23 especialistas a cargo de mantenimiento no programado de la flota. Este personal permaneció en el Grupo Aéreo N° 6 desde el 13-09-98 hasta el 20-12-99; **lo que demuestra que existían compromisos anteriores a los propios procesos de licitación y suscripción de los contratos. Se evidencia así, el aspecto meramente formal de una decisión ya adoptada previamente, respecto al proveedor de los servicios. Esto ha sido ratificado por el Sr. Alberto Venero, quien en su declaración indicó que había un**

compromiso de autoridades del gobierno con Treves Intora para asignarles a ellos estos contratos.

15. El 19 de agosto de 1998 el Banco de la Nación abonó US \$ 30 000 000,00 en la cuenta corriente N° 62-000-003129 de la Fuerza Aérea, de la cual, mediante Oficio N° IV-170-DEJT-N° 0986 de 11 de septiembre de 1998 se solicitó la emisión de un giro bancario a favor de la empresa Treves Intora Association Ltd.; quien a su vez en garantía del dinero recibido entregó la Carta Fianza emitida el 16 de septiembre de 1998 por el Banco Exterior S.A. de Panamá.

Con cargo al giro bancario efectuado y de acuerdo con el Contrato N° I-FA-003-98, la empresa Treves Intora Association Ltd. emitió las siguientes facturas:

Fecha	Factura		Concepto	Importe
	Número			US \$
20.SET.99	300-001-09-99		Pago parcial (Actas de operatividad del 20/12/98 al 19/08/99)	13 333 333,36
06.DIC.99	300-002-12-99		Pago parcial (Actas de operatividad del 20/08/98 al 19/10/99)	3 333 333,28
16.ENE.00	300-001-01-00		Pago parcial (Actas de operatividad del 20/10/98 al 19/12/99)	3 333 333,36
Total				20 000 000,00

El Grupo Aéreo N° 6, mediante Oficio II-66-E606 N° 3851 del 16 de septiembre de 1999, informa al Comandante General del Ala Aérea N° 1 y al Comando de Materiales que el Service ha realizado la transferencia tecnológica de acuerdo al contrato y que la Unidad se encuentra en capacidad de realizar reparaciones al mismo nivel de complejidad que ha realizado el Service, pero que carece de bloques volantes y de los repuestos respectivos que permitan asegurar la ejecución de las reparaciones.

De igual forma, con Oficio II-66-N° 3565 del 13 de diciembre del 2000, el Grupo Aéreo N° 6 informó que, durante la ejecución del Service, se efectuó la reparación de 716 bloques radio electrónicos e instrumentos y 150 bloques de avión, motor, electricidad y otros.

16. Mediante Oficio N° IV-170-DEJT-N° 1324 de 01 de diciembre de 1998 se solicitó la emisión de un giro bancario a favor de la empresa Treves Intora Association Ltd., la misma que se ejecutó de tal forma que fuera cobrado por los beneficiarios a partir del día viernes 4 de diciembre de 1998.

Con cargo al giro bancario efectuado y de acuerdo con el Contrato N° I-FA-004-98, la empresa Treves Intora Association Ltd. emitió las siguientes facturas:

Fecha	Factura		Concepto	Importe
	Número			US \$
05.DIC.98	400-001-12-98		Pago parcial (Lote N° 1)	2 629 876,95
02.AGO.99	400-001-08-99		Pago parcial (Lote N° 2)	2 821 824,97
06.DIC.99	400-002-12-99		Pago parcial (Lote N° 3)	1 666 579,61
18.ENE.00	400-001-01-00		Pago parcial (Lote N° 4)	936 081,48
04.OCT.00	400-002-10-00		Pago parcial (Lote N° 5)	1 945 636,99
Total				10 000 000,00

17. Es un hecho que en la Ayuda Memoria que se prepara al Comandante General de la FAP, en diciembre del 2000, se menciona que al cabo de dos años de operación

(1997 y 1998) expirados los plazos de garantía y agotados en su mayoría, los stocks de repuestos adquiridos al proveedor, ya se habían preparado desde 1997, la solicitud de repuestos, accesorios y servicios requeridos para garantizar el mantenimiento programado y no programado de la flota de aeronaves por dos años a partir de 1999, cuyo costo ascendía a un monto de US \$ 150 millones de dólares americanos.

18. Las negociaciones que permiten apreciar los compromisos previos y la demora de aproximadamente dos años, se explican en el documento I-70-COFA N° 01-08 del 26 de febrero de 1998 enviado por el entonces Comandante General de la FAP Esleván Bello al ex Ministro de Defensa y también en el documento de Ayuda Memoria sin firma que envió a la Comisión Investigadora Morales, el ex Ministro de Defensa César Saucedo Sánchez.

De acuerdo a estos documentos, en agosto de 1997, se completaron los listados de requerimientos, siendo entregados por la Comandancia General de la FAP al Ministerio de Economía y Finanzas. De acuerdo a la Ayuda Memoria, dichos requerimientos no fueron cotizados por la FAP, por cuanto el Ministerio de Economía y Finanzas indicó que sería esta entidad la encargada de negociar los aspectos económicos - financieros, lo que explicaría que los fondos de \$ 50 millones de dólares asignados por el Decreto de Urgencia 060 no fueron asignados a la FAP.

De septiembre a noviembre del año 1997, dichos requerimientos son negociados por el Ministerio de Economía y Finanzas con la firma proveedora Beltechexport.

A fines de noviembre de 1997, el general Rolando Magni recibió la información del ex Ministro Camet, en el sentido de que la firma proveedora le había hecho saber que el monto requerido supera en dos o tres veces el monto aprobado, lo que explica la cifra de \$ 150 millones de dólares de la cual se habla en varios documentos.

IV.4 Contrato de compra de aviones MIG 29 SE rusos (Nuevos)

1. Al igual que en la anterior adquisición a Bielorrusia se violan los procedimientos administrativos en la compra. De acuerdo a la información proporcionada por la Sra. Fiscal Especial de Zurich, Suiza, existen comisiones ilícitas depositadas en cuentas bancarias en ese país por la empresa Rosvoorouzhenia, a nombre del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos por \$ 48 millones de dólares las cuales, y que de acuerdo a las investigaciones realizadas por las autoridades de ese país dichos fondos provienen de los depósitos ilegales de comisiones derivadas de la venta de este equipamiento.
2. Esta vez, sin embargo, Vladimiro Montesinos decide buscar otros « intermediarios». La adquisición se llevó a cabo teniendo de por medio, al proveedor de armas James Stone y su socio, Ilán Weil Levy, aunque no figuren formalmente en el Contrato con la FAP.
3. Según informaciones obtenidas de las investigaciones efectuadas por la Fiscal Especial de Suiza, en relación con las mencionadas Cuentas ilegales de Montesinos en ese país, el 6 de junio de 1998 (es decir casi un mes antes de firmarse el Contrato en el Perú), se suscribió el acuerdo entre la Empresa Estatal Rusa ROSVOOROUZHENIA

y los ciudadanos Fernando Carulla e Ilán Weil Levy (socio de James Stone) para que éstos a través de la firma Ghiss Ibérica SRL, apoyen a la empresa rusa a finalizar y ejecutar los contratos de abastecimientos de equipos especiales al Perú.

De acuerdo a información obtenida en la Base de datos del INFOCORP, la Empresa Ghiss Ibérica figura con dirección en Av. Las Palmas s/n. Sede de la FAP.

Esta relación es la que generó la cuenta bancaria existente en el Fibi Bank de Zurich que tiene como beneficiario a la firma Lenwick Trading Inc., una de las fuentes a través de las que se realizaron los depósitos ilegales para Vladimiro Montesinos.

4. Esta probado que la adquisición de los tres MIG-29 la aprueba el propio ex Presidente Alberto Fujimori, a petición del Comandante General de la FAP Elesván Bello y del Ministro de Defensa César Saucedo, quienes le solicitan al entonces Ministro de Economía Jorge Camet Dickmann interceda sus buenos oficios ante el ex Presidente de la República para convencerlo sobre la necesidad de esta compra. Según ha sido declarado por el Ministro Jorge Camet, esto ocurrió el 12 de Junio de 1997 en una reunión en el Servicio de Inteligencia en las que además estaban presentes, el General Nicolás Hermoza Ríos, el Comandante General AP Antonio Ibárcena Amico y Vladimiro Montesinos. Si se tiene en consideración que en este proceso de adquisición Vladimiro Montesinos obtuvo ganancias ilícitas, resulta razonable pensar que para ello necesitó de la colaboración del Comandante General FAP Elesván Bello y del Ministro de Defensa César Saucedo.
5. En la negociación de los contratos, la participación del Ministro Jorge Camet Dickmann fue gravitante. Entre el 20 y 23 de enero de 1998, el mencionado ministro viaja a Moscú con la finalidad de negociar con los fabricantes rusos de la empresa MAPO, una adquisición de repuestos que estaba dirigida, según él, a romper el monopolio con los bielorrusos. Se trataba de comparar propuestas y tener una idea de los precios ya que desde junio de 1997 la FAP y el Ministro de Defensa César Saucedo exigían la adquisición de repuestos para las aeronaves.
6. Una nueva reunión sobre este tema, sostuvo el ex Ministro Camet en el Servicio de Inteligencia Nacional, el 13 de abril de 1998, esta vez con el Gral. César Saucedo Sánchez, el Comandante General FAP Elesván Bello, el ex asesor Montesinos y los proveedores rusos. Testimonio de este hecho son los videos que obran en poder del Congreso de la República.
7. De la transcripción y observación de los videos a los que tuvo acceso la Comisión Morales se ha comprobado que el Ministro Jorge Camet elaboró los aspectos económicos - financieros de los contratos de adquisición de los tres MIG-29 rusos. Es decir, que el Ministro Camet participó de la violación de los procedimientos legales. Fue parte del núcleo central de funcionarios que tomaron las más importante decisiones. Es probable que desde esta posición haya por lo menos tenido conocimiento o sospecha de los actos ilícitos que venía tramando el ex asesor Vladimiro Montesinos, junto con el Ministro de Defensa César Saucedo, el Comandante General FAP Elesván Bello y el proveedor de armas James Stone.
8. Según las declaraciones brindadas a la Comisión Morales por el General FAP (r) Elesván Bello Vásquez, el 22 de junio del presente año, en el Penal San Jorge, él no solicitó la compra de los tres MIG 29 rusos, sino que esto fue una orden del ex

Presidente Fujimori a través del Ministro Jorge Camet. De acuerdo a su declaración, se pretendía matar «dos pájaros de un tiro» al hacer este contrato con los rusos, de un lado, solucionar los problemas aún pendientes en cuanto a la cancelación de la deuda rusa y, de otro lado, buscar un proveedor alternativo para el caso de los repuestos a los MIG 29 que ya tenía la FAP, comprados a Bielorrusia.

9. Es preciso señalar, así mismo, que obra en la Comisión, copia del Informe 124/99-CGR, de la Contraloría General de la República, en relación con el examen especial efectuado sobre el Contrato de Cancelación de la Deuda Rusa, en la que se consigna como una observación que el Ministro Jorge Camet en 1996, había comprometido al Perú a la adquisición de bienes de la República Rusa, por un monto entre \$150 y \$200 millones de dólares. De otro lado, el ex Ministro Jorge Camet ha reconocido ante la Comisión Investigadora que su estadía en el Hotel Metropol en Moscú en el mes de enero de 1998, fue concertada por los funcionarios del Swiss Bank, que intermedió en la recompra de la deuda Rusa. La factura de dicho alojamiento además figura a nombre del Swiss Bank, aunque el Ing. Jorge Camet señaló que fue él quien canceló la cuenta.
10. Existen indicios para pensar que los proveedores rusos, se negaron a proveer los repuestos para los 18 MIG 29 que el Perú había adquirido en 1996 a Bielorrusia, ya que no se había respetado el Acuerdo establecido al momento de la cancelación de la deuda rusa, y que por ello era necesario realizar la compra de los tres nuevos MIG 29.
11. El Decreto de Urgencia a través del cual se autoriza la adquisición fue el 032-98, refrendado por el ex Ministro de Economía Jorge Baca Campodónico, sin embargo, la autógrafo de este documento carece de la numeración oficial y no tiene el sello de la Presidencia de Consejo de Ministros.
12. El 09 de junio de 1998 el Consejo Superior de la Fuerza Aérea aprobó la adquisición de los tres MIG-29 a Rusia. Sin embargo, lo real, es que la determinación de la compra como se ha referido líneas arriba, fue hecha muchos meses antes, en Junio de 1997. El ex Ministro Jorge Camet Dickman ha puesto en poder de la Comisión, copia del manuscrito hecho conjuntamente con el ex Presidente Fujimori, en el que consta su decisión de disponer la compra de los tres aviones MIG Rusos, con la diferencia que en aquella nota, el precio figura en \$90 millones de dólares por las tres aeronaves, cifra menor a la que se pagó posteriormente que fue de \$ 126' 292,029.78.
13. Según ha sido declarado ante la Comisión por el Oficial FAP Ramón Gamarra, la Comisión conformada para efectuar la evaluación técnica - económica, que fue presidida por el Gral. FAP Rubén Mimbela Velarde, tenía prácticamente la orden de aprobar las propuestas presentadas previamente por el proveedor, con el cual la operación ya había sido concertada prácticamente un año antes. De otro lado, la Comisión Investigadora tuvo acceso al vídeo grabado el 4 de julio de 1998, durante la firma del Contrato de Compra de los tres aviones rusos en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional.
14. De acuerdo al vídeo mencionado, una vez que es suscrito el contrato con la delegación rusa, se realiza un dialogo entre el ex asesor Montesinos, el ex ministro

Saucedo, el COFAP Elesván Bello, y los oficiales de la FAP participantes en ese evento. De la transcripción del diálogo correspondiente se ha podido establecer que:

- a. Aún no existía el Decreto de Urgencia 032-98, el que recién es suscrito el 14 de Julio de 1998, circunstancia que era de conocimiento de todos los presentes.
- b. Se trata de justificar la compra de los 3 nuevos MIG29 a Rusia con el argumento de pasar a la ofensiva con una invasión a Ecuador el 3 de Enero de 1999, argumento falaz porque, como se ha puesto de relieve, la adquisición de tal armamento no sólo fue extemporánea sino además inadecuada por no satisfacer las necesidades de la defensa nacional.
- c. Se hace explícito que la adquisición de los MIG29 y SU25 a Bielorusia tenía problemas de operatividad y de repuestos, razón por la cual se incluye estos temas en el Contrato con los Rusos, los que se comprometen a «corregir los problemas de los bielorrusos». Este acuerdo será luego retirado para continuar negociando con los proveedores Bielorrusos, por un monto menor al que estos habían solicitado inicialmente.
- d. Se evidencia que no se sustentaba el contrato en precios unitarios sino en un monto global de compra, al que se adecuaban los precios de los componentes del sistema de armas de los MIG29 rusos.
- e. Se confirma que muchos meses antes ya se habían iniciado las negociaciones con los Rusos.
- f. Se evidencia una grave deficiencia en estrategia de combate e inteligencia militar, pues todos aceptan que con los 3 MIG29 rusos, que son caza interceptores natos, el país podía supuestamente pasar a una ofensiva invadiendo Ecuador, cuando dichos aviones no estaban equipados para sostener una ofensiva.

IV.5 Aspectos técnicos en la compra de los aviones

1. Los requerimientos técnicos y operativos de la Fuerza Aérea para la adquisición de aviones debían sustentarse sobre la base de la Directiva 012-EMFA-D3-PEO de acción inmediata de agosto de 1995. Esta directiva detallaba los aspectos logísticos, operativos, estratégicos, políticos y económico - financieros (referenciales).

Entre los aspectos operativos se señalaba que se debía adquirir un avión interceptor con capacidad multirol, que debía tener un radio de acción como interceptor que cubra los requerimientos de acuerdo a nuestro territorio y localización geográfica de nuestras bases militares, con capacidad de utilización de misiles aire-aire de mediano alcance, con posibilidad de empleo de misiles antirradar para cumplir misiones de supresión de la defensa aérea enemiga y, que cuente con una línea segura de abastecimientos.

2. De los informes evaluativos del Ministerio de Defensa y las Comisiones de Investigación de la FAP se puede concluir que lo adquirido a través de los contratos de Bielorrusia no correspondía a las necesidades del país, ni a la propia directiva de la FAP.

3. La Junta Especial de Investigación FAP determinó que la Comisión que presidió el mayor FAP Rolando Magni estableció en forma equivocada que el MIG29 posee un radio de acción de mil quinientos kilómetros sin tanques externos y dos mil novecientos kilómetros con tanques. Esto es contradictorio con el MIG29 adquirido por la FAP, que en una misión clásica de interceptación, entre cinco mil a siete mil metros de altura y tres minutos de combate, sólo tiene un radio de acción de 340 y 395 kilómetros respectivamente. En caso de que quiera usarse para una misión de ataque aire-tierra, el radio de acción en la mejor de las posibilidades estará limitado a 300 kilómetros de promedio, portando armamento convencional.
4. El MIG 29 es una aeronave de corto alcance y por las características de diseño como interceptor, no puede portar misiles antiradárnicos. Para disparar cañones tiene necesariamente que eyectar el tanque ventral de combustible. Sin misiles antiradárnicos la aeronave no puede interceptar vectores aéreos ofensivos, quedando a su disposición absoluta, lo que obliga que el avión tenga este sistema; pese a lo cual los MIG29 adquiridos no lo tienen.
5. Los niveles de operatividad de las aeronaves eran insuficientes para las condiciones en la que estaba el país al momento de adquirirlas. Los MIG 29, en el año 1997, tenían un 66.6% de operatividad y en 1998 un 55.4% de operatividad. Mientras que los Sukhoi 25 tenían, en 1997, un 46.6% de operatividad y en 1998 un 55.4%.

Con el Service contratado en 1998, es que recién se adquieren niveles superiores de operatividad a partir de 1999, cuando ya estaba suscrito el Acuerdo de Paz con el Ecuador. Es así que los MIG 29 alcanzaron en 1999, el 94% de operatividad y el año 2000 el 75% de operatividad. Los SU 25, por su parte, alcanzaron en 1999, el 65% de operatividad y en el año 2000, el 69%. Así lo señala el Comandante de Material FAP en el Informe que cursa el 31 de Enero de 2001, al Comandante General de la FAP.

6. Un problema fundamental es la relación con la empresa fabricante, que es decisiva en la adquisición de aviones. La fábrica de aviones MIG 29 está en Rusia y ella se negaba, con su gobierno, a suministrar repuestos y dar mantenimiento, por lo que la compra tenía un gravísimo riesgo de inoperatividad en el caso probable de que los aviones fuesen exigidos en un conflicto intenso y/o prolongado, como era la naturaleza de los conflictos que tenía el Perú en esos años. Quien tenía la mayor cantidad de aviones en venta era nada menos que la Federación Rusa, la fabricante. Pero esta opción, u otras relacionadas, como la de Ucrania, son dejadas de lado, para asumir la de Bielorrusia por parte del gobierno de Fujimori.
7. Al momento de suscribirse los contratos no se adquirió un paquete de repuestos y accesorios para mantenimiento no programado. Este servicio de adquisición de repuesto y de tecnología no se ha podido evaluar al interior de la propia FAP, porque no se encontró evidencia sobre el origen de los diferentes listados de repuestos, accesorios y servicios requeridos para garantizar el mantenimiento programado y no programado de las flotas de aeronaves por dos años.

De acuerdo al testimonio del Sr. Alberto Venero en la Comisión Investigadora Morales, el monto de los repuestos y mantenimiento era de \$150 millones de dólares, por lo que el ex Presidente Alberto Fujimori dio la orden de adquirir repuestos sólo

para un periodo de dos años aproximadamente; quedando el compromiso de la suscripción de un contrato posterior para hacerlo efectivo.

Este contrato para el servicio de mantenimiento y de transferencia de tecnología por \$20 millones de dólares y de adquisición de repuestos por \$ 10 millones, se negoció desde diciembre de 1996 y solo se realizó después de la firma del Acuerdo de Paz con Ecuador, en octubre de 1998, en el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 1998 al 20 de diciembre de 1999. En la actualidad no existe un contrato para el mantenimiento no programado.

8. Los tres MIG 29 SE nuevos comprados en Rusia se adquirieron con un conjunto de repuestos, herramientas, equipos terrestres, cubiertas de protección, repuestos e instrucción. Por el monto de la adquisición se hubiera podido mejorar la infraestructura logística de las anteriores adquisiciones o adquirir el equipamiento de guerra electrónica y armamento inteligente de las aeronaves M2000P y M-59; los cuales no se adquirieron pese a ser considerados indispensables para recuperar la capacidad operativa de la FAP

IV.6 Aspectos económicos en la compra de los aviones

1. Es necesario hacer una referencia al mercado de armas en Rusia y otros países de la antigua URSS. Al disolverse la URSS desde 1989, y con mayor intensidad desde 1992; se genera un mercado de armas en el que podía encontrarse equipos de alta calidad y bajo precio. Así como podía encontrarse chatarra y equipos sin sostenibilidad. Era un mercado de oportunidad para países como el Perú. Los fabricantes o los oficiales al mando de un equipamiento ruso, estaban dispuestos a vender parte de sus armas, directamente o a través de representantes; que muchas veces era la mafia rusa, a precios de ganga y en operaciones legales o mafiosas. Es por esta razón de amplias y diversas oportunidades, que llegan tantas ofertas al Perú de varios países de la antigua URSS, muchas de las cuales son monopolizados desde el comienzo por el grupo de testaferros de Montesinos.
2. A lo largo de las adquisiciones no ha existido una evaluación de precios de mercado, ciñéndose tanto el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS como la FAP a los precios de los proveedores asumidos como referenciales y que tuvieron carácter determinante.
3. La negociación de los precios de las adquisiciones fue realizada por el Ministro de Economía Jorge Camet y el Ministro de Defensa Tomás Castillo Meza, asumiendo la FAP las ofertas de los proveedores como precios referenciales. Las Comisiones Especiales Reservadas de la FAP no realizaron comparaciones elementales de precios entre bienes similares en Bielorrusia y en Rusia.

En la Comisión Investigadora Morales, el Gral., Magni explicaba esta situación argumentando que los integrantes de los proveedores presentes en Bielorrusia no les permitían a los técnicos y oficiales de la FAP que estuvieron suficiente tiempo en dicho país para conversar los aspectos económicos con los funcionarios de las empresas.

4. No existe referencia documentada en los diversos informes de la FAP y del Ministerio de Defensa respecto a la antigüedad efectiva de las naves, como de acuerdo a su registro de las empresas fabricantes, así como tampoco existen evaluaciones precisas de equipamientos adquiridos como lo referido a los misiles IGLA. Esto es de gran importancia, pues su conocimiento podría evidenciar una gran diferencia de precios según las características reales de los bienes.
5. En el caso de los MIG 29 y SU 25 existen indicios de sobrevaluación detectados en una muestra de estudio realizada por la Comisión de la FAP. Entre estos aspectos se menciona la adquisición de armamento para el MIG 29 (8 misiles anti-radar, 4 vigas antimisil anti-radar, 2 misiles anti-radar de instrucción y la implementación de 4 aviones) por un monto de \$ 6'306,360 dólares americanos. Posteriormente este equipamiento se trata de adecuar para su uso por los SU 25.

Así mismo se adquirieron 22 tanques ventrales usados a un precio unitario de 85,000 dólares que difiere del mismo tipo de tanque pero nuevo adquirido a Rusia con los MIG 29 SE que ascienden a 53,000 dólares cada uno.

También existe un conjunto de ítems que requieren una investigación más detallada por cifras aparentemente abultadas como el de "botiquín de emergencia" por \$5'769,338 dólares, "juego de documentación técnica" por \$1'150,000 dólares, "programa de entrenamiento" de \$ 4'552,000 dólares, "programa de especialistas" por \$2'747,130 dólares.

En el caso de los SU 25 el Informe del MINDEF, también sobre una muestra, indica por ejemplo una cantidad que podría ser excesiva de \$4'924,900 dólares en entrenamiento para pilotos.

6. Para el caso del servicio de mantenimiento y repuestos se sujetó la adquisición a los precios unitarios establecidos por el proveedor, sin que existiera una real comparación de precios, realizándose una subdivisión en 3 programas de equipamiento sobre la base de la misma propuesta de precios, evidentemente sobrevaluadas en \$ 150 millones de dólares.
7. La negociación final de precios fue realizada personalmente por el Ministro Jorge Camet viajando a Bielorrusia para el trato de los MIG 29 y directamente en Lima para el caso de los Sukhoi 25. En ambas oportunidades, se hizo en negociación con Moshe Rothschild en representación de W 21 y Treves Intora.

La Comisión Investigadora Morales fue informada por el Gral. Rolando Magni, que acompañó a Jorge Camet a Bielorrusia para participar en la negociación, pero que no fue invitado ni participó en la reunión en la cual se tomaron los acuerdos.

Así mismo, la Comisión Investigadora Morales fue informada por el Ministro Camet que él no discutió precios unitarios, ni la reformulación de la oferta técnica; si no que se concretó a negociar un descuento de la oferta total del precio de venta; el que singularmente, y sin explicación, para ambos casos, fue del 11%. Conforme ha declarado el ex Vice Ministro de Economía Alfredo Jalilie ante la Comisión Investigadora presidida por el Congresista Morales Mansilla, él viajó a Bielorrusia a fin de negociar una rebaja adicional de US\$10'000,000, por orden del Ex Ministro Jorge Camet.

Un descuento de aproximadamente \$ 40 millones de dólares sin que existiera una modificación de la composición de la oferta de bienes a adquirir, ya evidenciaba una irregularidad que debió haber llevado al Ministro, a una necesaria revisión de precios unitarios de los bienes a adquirir como lo manda la legislación y el sentido común. Lo que no fue realizado.

8. El precio final de la compra de los MIG 29 nuevos a Rusia, fue también negociado directamente con la ofertante rusa para lo cual Vladimiro Montesinos encarga a James Stone como representante. De esta compra es que sale una de las comisiones comprobadas de los ingresos ilícitos de Montesinos. Existen también indicios de sobrevaluación en diversos ítems que tienen que ser investigados, como lo relativo a "botiquín de emergencia" por \$ 5'769,338 dólares, "juego de documentación técnica" por \$ 1'150,000 dólares y "programa de entrenamiento" por \$ 2'747,130 dólares.
9. No existe en los informes de la FAP y del MINDEF una comparación que nos permita apreciar el precio efectivo de los aviones adquiridos pues en el caso de los MIG 29 y SU 25 Bielorrusos es necesario considerar al precio pactado de adquisición (252 millones de dólares) el precio ofertado de repuestos y mantenimiento (150 millones de dólares), y el precio de la inminente reparación mayor de casi toda la flota en un corto plazo de no más de cinco años (una cifra todavía por evaluar). Sobre este total se podrá hacer una adecuada comparación con otros resultados de esa misma inversión bajo otras formas consideradas para potenciar la capacidad de operación de la FAP. Además, el precio era referencial y de oportunidad, y no de mercado, por lo que no puede aplicarse criterios de depreciación y otros para hacer comparaciones relacionadas con el mercado occidental de armas.
10. Es evidente que la forma cómo se organizó la compra de los MIG 29 y SU 25 a Bielorrusia, con los intermediarios Treves Intora y W 21, fue para cubrir la distribución de las ganancias ilícitas acordadas desde el inicio de la operación de adquisición. La oferta de Treves Intora era la más costosa (según documentos secretos de la FAP que adjuntamos) y pese a ello, la Comisión Presidida por el mayor general FAP Rolando Magni recomendó se optase por dicha oferta aduciendo que satisfacía íntegramente los requerimientos técnicos, operativos, logísticos y administrativos de la Fuerza Aérea. Las diversas ofertas de LINCA SA fueron objetadas. El propio Alberto Venero ha reconocido ante la Comisión Presidida por el Congresista Pedro Morales Mansilla que la oferta de Treves Intora salió airosa en virtud a la colusión preexistente entre los involucrados con tal adquisición. Queda por determinar cual es la actividad empresarial real de Treves Intora, pues de acuerdo a lo declarado por el Sr. Juan Valencia Rosas a la Comisión Investigadora que presidió el Congresista Morales Mansilla, se trataba de otra simulación, ya que en Panamá no tenían ni siquiera oficinas, funcionando en un estudio de abogados panameños.
11. En la Comisión Investigadora Morales el señor Alberto Venero reconoció que por la compra de los aviones MIG 29 y Sukhoi 25 a Bielorrusia le había entregado al Sr. Montesinos en dinero efectivo repatriado de la cuenta de Treves Intora la suma de 12 millones de dólares para que lo reparta con otras autoridades no identificadas. También aceptó que del porcentaje de utilidades de W21 sería aproximadamente el 10%, monto similar tendría la empresa Treves Intora. Puede colegirse que la empresa Bielorrusa Beltechexport no tendría una cifra menor de "utilidades". Sumas que en total pueden llegar al 40% del precio final, esto es de 252 millones de MIG 29 de dólares un monto de aprox. 100 millones de dólares. El propio Venero considera

que de la segunda operación de los MIG 29 SE rusos deben haber obtenido una comisión de 60 millones de dólares que corresponden a cerca del 35%. En relación al service de mantenimiento la evidente sobrevaloración, pero la falta de un análisis más detallado de precios unitarios, no nos permiten precisar todavía el porcentaje de las comisiones. A lo que habría que agregar lo relativo a Radars y otros equipos en los que tuvo comisión ilícita Montesinos y otras autoridades, como ha sido reconocido en la Comisión Investigadora Morales por Venero.

12. Es posible señalar que las Comisiones legítimas de un proveedor de armas podría bordear el 10%. Por lo cual, la existencia de un 30% adicional en este caso es un claro indicio de posibles comisiones ilegítimas, tal porcentaje representa aproximadamente 140 millones de dólares, solo en este Caso. En todo caso, estas posibles comisiones ilícitas expresarían la concertación ilegal organizada desde un primer momento por Vladimiro Montesinos y otras autoridades del Estado.
13. Se cancelan los pagos de los MIG 29 y SU 25 Bielorrusos, a través de una cuenta bancaria del Banco de la Nación en el Banco Exterior de Panamá. Esta cuenta es abierta por medio de una carta de crédito stand by, en una forma singular según ha informado en la Comisión Morales el vice Ministro Jalilie. Esta carta de crédito funcionaba como un colateral para garantizar la ejecución del contrato, cobrando el proveedor con la presentación de los siguientes documentos: una orden de pago del agente autorizado del ministerio y una factura comercial de Treves Intora, los que extrañamente solo tienen ambas una firma que es la del Mayor Magni. De esta forma manteniendo un depósito de 100 millones de dólares se iba pagando las órdenes hasta por un monto total de 252 millones y 150 millones. Es de señalar que extrañamente a esta cuenta no fueron derivados los pagos por los contratos del Service de mantenimiento los que fueron transferidos directamente por Treves Intora a Suiza a través de New York y vía transferencias directas.
14. La modalidad de la cuenta en Panamá tenía que ver, según ha sido explicado en la Comisión Investigadora Morales por funcionarios del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, ante las sospechas de posibles vulnerabilidades de una adquisición de segundo uso con intermediarios desconocidos. De todos modos estas seguridades en garantizar el pago en función de la llegada de los bienes al Perú y en montos progresivos, fue acompañada por ausencia de seguridades en la modalidad de cobro por parte del proveedor sin indicar destino de dónde se giraban las cancelaciones. Es sorprendente que en el total de órdenes de pago y facturas sólo figuren la firma de Rolando Magni en ambos documentos sin que exista ninguna firma de un representante de Treves Intora ni tampoco indicación de la modalidad del cobro. Además, se presentan facturas de Treves Intora de Panamá, sin que dicha empresa este funcionando en dicho país, sino solo tenga un estudio de abogados, con las incógnitas que hemos indicado respecto a sus verdaderos propietarios.
15. En la Comisión Investigadora presidida por el Congresista Morales, Alberto Venero ha declarado que de dicha cuenta de Treves Intora se han transferido recursos hacia el Perú a través de la modalidad de "repatriación" de dinero vía el banco de Comercio y otras entidades financieras. También el Sr. Juan Valencia ha declarado que una cuenta suya en dicho Banco fue utilizada para esta transferencia de dinero hacia beneficiarios en el Perú.

V. OTRAS IRREGULARIDADES EN RELACIÓN CON LOS DECRETOS SECRETOS EMITIDOS EN EL PERIODO 1995 – 2000

1. Ahora bien, debe tenerse presente que entre 1995 y 2000, se ejecutaron 22 Decretos de Urgencia y 24 Decretos Supremos con carácter de "secreto" cuya finalidad primordial fue la adquisición de armamento y demás bienes y servicios para las Fuerzas Armadas peruanas. Para ello se utilizaron las siguientes modalidades de operación:

- a) 14 Decretos de Urgencia fueron utilizados para poner los recursos del Tesoro Público a disposición de las Fuerzas Armadas por cerca de \$ 1140 millones.
- b) 8 Decretos Supremos sirvieron para realizar transferencias de partidas presupuestales por cerca de \$ 126 millones.
- c) 4 Decretos Supremos y un Decreto de Urgencia pusieron a disposición de las Fuerzas Armadas, recursos de Endeudamiento Externo, por más de \$50 millones.
- d) 2 Decretos Supremos pusieron a disposición de las Fuerzas Armadas, recursos de endeudamiento interno por \$ 17,4 millones.
- e) 2 Decretos de Urgencia y dos Decretos Supremos sirvieron para exonerar las adquisiciones efectuadas y por efectuarse, de los mecanismos previstos de licitación pública y privada, concurso de precios; a empresas intermediarias que venían operando irregularmente.
- f) 4 Decretos de Urgencia y 5 Decretos Supremos sirvieron para realizar autorizaciones que sustentaron o facilitaron operaciones por montos diversos, sin definición precisa de los objetivos de las adquisiciones.

2. Los Decretos de Urgencia fueron los instrumentos preferentemente utilizados para las operaciones que implicaban sumas cuantiosas de dinero, fundamentalmente provenientes de recursos de privatización. Ello, con la intencionalidad de usar un instrumento con fuerza de ley que sirviera para modificar el destino de los recursos de privatización que estaba estipulado en el D.L. 674 (Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado), destinados a la erradicación de la pobreza y la pacificación nacional, hacia fines de "seguridad nacional".

Realizar la modificación explícita del D.L. 674 hubiera implicado una contradicción con los compromisos establecidos por las Cartas de Intención suscritas con el FMI. Por ello, se utilizó la vía de «interpretar» el Decreto Legislativo; es así que los Decretos de Urgencia señalan que en concordancia con dicha norma, es necesario «autorizar al Ministerio de Defensa la utilización para fines de la seguridad nacional». Sin embargo, tal como está señalado explícitamente en el D.L. 743, Ley del Sistema de Defensa Nacional, el concepto de «pacificación nacional» está restringido a lo referente al orden interno.

3. En cuanto a los Decretos Secretos que sirvieron para autorizar el uso de recursos de endeudamiento externo para financiar operaciones de compra de armas o bienes para las Fuerzas Armadas, es notorio el hecho de que las Leyes de Endeudamiento Externo que anualmente se aprobaron, se hayan flexibilizado en cuanto a los

condicionamientos necesarios. Así por ejemplo, en 1999, la correspondiente Ley de Endeudamiento Público, sólo exige opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, cuando en años anteriores, se exigía la opinión favorable de las unidades orgánicas competentes del Ministerio, además de un Informe sustentatorio. Para un mejor análisis de las disposiciones emitidas bajo el secreto militar, se presenta en el siguiente cuadro el detalle de los Decretos Supremos secretos emitidos en el sector Economía y Finanzas para la disposición de fondos en el sector Defensa.

Decretos Supremos secretos emitidos entre 1995 –2000 en el Sector Economía y Finanzas para disposición de fondos en Defensa

Nº	Fecha	Funcionarios firmantes	Monto	Instituto	Operación	Fuente de Financiamiento
04-95-EF	25/01/95	Alberto Fujimori Jorge Camet Víctor Malca Villanueva	S/. 46'000,000	Marina	Actividades diversas para operatividad de las fuerzas navales	Presupuesto Público
15-95-EF	09/02/95	Alberto Fujimori Liliana Canale Víctor Malca Villanueva, Efraín Goldemberg	S/. 24'986,250	Ejército	Transferencia de partidas para adquisición de 10 Helicópteros MI-17-1B.	Presupuesto Público
16-95-EF	09/02/95	Alberto Fujimori Liliana Canale Víctor Malca Villanueva, Efraín Goldemberg	S/ 11'373,750	Ejército	Transferencia de Partidas para compra de Municiones y necesidades básicas de equipamiento	Presupuesto Público
17-95-EF	09/02/95	Alberto Fujimori Liliana Canale Víctor Malca Villanueva, Efraín Goldemberg	S/. 62'405,540	Ejército y FAP	Transferencia de Partidas para compra de 03 Aviones Antonov y 06 Helicópteros MI-17-1B. (Ejército) y Equipos y accesorios para parque automotor, un radar P-37 y repuestos para aeronaves AN-72 (FAP)	Presupuesto Público
63-95-EF	29/03/95	Alberto Fujimori Jorge Camet, Efraín Goldemberg	S/. 15'844,801	Ministerio de Defensa Comando Conjunto	Transferencia de Partidas para seguridad de Elecciones Generales.	Presupuesto Público
81-95-EF	20/04/95	Alberto Fujimori Jorge Camet, Efraín Goldemberg, Víctor Malca	S/. 4'170,032	Ejército	Transferencia de Partidas para la Adquisición de locales para agregadurías militares en Chile, Ecuador, Argentina y Bolivia.	Presupuesto Público
163-95-EF	29/12/95	Alberto Fujimori Jorge Camet, Dante Córdova Víctor Malca	US\$ 11'839,864	FAP	Adquisición de equipos para Hospital Central de la FAP	Endeudamiento Externo
164-95-EF	29/12/95	Alberto Fujimori Jorge Camet, Dante Córdova Víctor Malca	-----	Ejército	Precisan que operaciones de compra para adquisición de helicópteros serán con MOBETEX – Panamá	Endeudamiento Externo
077 DE/MGP	17/11/95	Alberto Fujimori Víctor Malca	US\$ 80,000	Marina	Autorización para adquirir instalaciones, obras y maquinarias de zona adyacente al complejo pesquero de Paita - Cía. Pesquera Grau	Presupuesto Público

Nº	Fecha	Funcionarios firmantes	Monto	Instituto	Operación	Fuente de Financiamiento
104-96-EF	21/10/96	Alberto Fujimori Jorge Camet, Alberto Pandolfi	S/. 5'870,000	SIN	Transferencia de partidas	Presupuesto Público
141-96-EF	21/12/96	Alberto Fujimori Jorge Camet, Tomás Castillo Meza	\$ 8'083,073	FAP	Adquisición de un sistema modular automático de radiovigilancia	Endeudamiento Externo
048-97-EF	06/05/97	Alberto Fujimori Jorge Camet, Tomás Castillo Meza César Saucedo	Por precisar	Minist. Defensa e Interior	Fijan ración orgánica para personal militar y policial.	Presupuesto Público
058-97-DEF	21/10/97	Alberto Fujimori Jorge Camet, César Saucedo	Por precisar	Marina	Autorizan a la Marina venta de motonaves Mantaro y Pachitea	Presupuesto Público
026-98-EF	14/03/98	Alberto Fujimori Jorge Camet, César Saucedo Alberto Pandolfi	US\$ 13'200,000	FAP	Adquisición de dos aeronaves y un motor de avión	Endeudamiento interno
122-98-EF	29/12/98	Alberto Fujimori Jorge Baca Julio Salazar M. Alberto Pandolfi	US\$ 1'679,000	Ejército	Adquisición de equipos médicos para el Hospital Militar Central del Ejército	Endeudamiento Externo
132-98-EF	31/12/98	Alberto Fujimori Jorge Baca Julio Salazar M.	No precisa	Ejército INDUMIL	Autorización para adquirir documentos cancelatorios para pago del IGV por transferencia de bienes muebles (DU 021-97)	Presupuesto Público
137-98-EF	31/12/98	Alberto Fujimori Jorge Baca Julio Salazar M. Alberto Pandolfi	US\$ 11'977,000	FAP	Compra de un sistema de gestión operacional y funcional de comando y control	Endeudamiento Externo
024-99-EF	18/02/1999	Alberto Fujimori, Victor Joy Way, Julio Salazar Monroe	US\$ 4'200,000	FAP	Aprueba operación de deuda interna (Compra de dos aeronaves)	Endeudamiento Interno
030-2000-EF	29/03/2000	Alberto Fujimori, Jorge Chamot Sarmiento, Alberto Bustamante Belaúnde, Carlos Bergamino Cruz	US\$ 13'200,000	FAP	Ampliación del período de gracia y plazo del préstamo de endeudamiento interno (compra de dos aeronaves y un motor de avión)	Endeudamiento Interno

4. Para el análisis de las diversas operaciones efectuadas al amparo de estas normas se debe considerar los aspectos legales vigentes. El régimen legal para las adquisiciones de carácter reservado o secreto se regula de manera genérica mediante un conjunto de normas que permiten evaluar la legalidad de las operaciones.

Esas normas son:

- La Constitución Política de 1993
- Las normas presupuestarias
- Las normas del régimen general sobre contrataciones y adquisiciones del Estado
- Las normas específicas de los Institutos Armados para las adquisiciones de carácter reservado

- e) Las normas específicas dictadas para cada adquisición
5. El marco legal antes enunciado establece un esquema que funciona sobre la base de la obtención de los productos de la mejor calidad al menor costo posible. Estas normas promueven la transparencia en la ejecución de los fondos públicos mediante procedimientos que garantizan la competencia entre los distintos proveedores, no obstante el carácter reservado de las adquisiciones. Los procedimientos de las adquisiciones militares también está determinado por el Reglamento Unico de Adquisiciones, D.S. 065-85-PCM, norma vigente en la fecha que se produjeron las operaciones investigadas. Sin embargo, en la mayor parte de casos, se transgredieron las normas para poder beneficiar al núcleo de funcionarios, militares y proveedores participantes.
 6. El uso de estos fondos se realiza vulnerando los procesos y procedimientos de adquisición del Estado, establecidos por el Reglamento Unico de Adquisiciones (RUA). También se vulneran los que estaban establecidos para cada arma, los que, de acuerdo a sus leyes orgánicas y al RUA tenían aprobadas normas para estas adquisiciones, las que debían ser cumplidas. Esta vulneración de los procedimientos, realizada de manera intencional y premeditada, trata posteriormente de ser «regularizados». De la Información recibida, es posible señalar algunas características resaltantes de estas irregularidades en los procedimientos:
 - a) En el Ejército se simulan procesos de licitación, haciéndose compras directas sin autorización, pagándose indebidamente en efectivo, aceptándose empresas proveedoras sin RUC.
 - b) En la Aviación se vulneran casi todos los procedimientos, creándose para las principales adquisiciones un procedimiento arbitrario, no legal ni presente en documento alguno.
 - c) En la Marina, si bien se cometen varias de las irregularidades señaladas, es bueno indicar que tienen una mejor organización los procedimientos establecidos por el Comando.
 7. Una característica muy importante que se generó fue la superposición de autoridad, lo que permitió que desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, las Comandancias Generales, y el MEF, se manejen la mayoría de procedimientos que correspondían a los respectivos institutos armados.
 8. Se ha encontrado como actos irregulares más reiterados los siguientes:
 - a) Se organiza un proceso de adquisición paralelo al que manda la ley y las normas de los institutos armados, propiciada desde la Presidencia de la República y el jefe de facto del SIN, bajo pretexto de seguridad y secreto.
 - b) Se adquieren bienes y recién luego se regularizan fabricando los estudios técnicos y los requerimientos.
 - c) Se entregan «líneas de gasto» en los años 95,96 y 97, para cada instituto armado y a arbitrio de su comando, el que lo utiliza para diversas adquisiciones sin los requerimientos correspondientes y a veces cancelando directamente.

- d) Se usan el sello de secreto militar, justificativo de compra directa, para bienes que debían adquirirse en forma pública y por licitación, como aviones comerciales, equipos médicos, equipos de ingeniería, etc.
- e) Se suscriben contratos sin la autorización de decreto y sin contar con la contrapartida requerida, cuando se necesitaba acudir al endeudamiento externo.
- f) Se violan exigencias de la Ley de Adquisiciones, facilitando exoneraciones de fianzas, otorgando recursos para el proveedor, permitiendo el traslado del crédito documentario a un tercero.
- g) Se promueve en forma directa y personal a empresas que otorgan beneficios económicos a funcionarios de alto rango, como ministros, etc.
- h) Se excluye sistemáticamente a los organismos encargados por ley de las adquisiciones
- i) Se evade y deja sin control todos los procesos de adquisiciones.

Debe analizarse con especial cuidado el caso de los Decretos de Urgencia Secretos con los que se aprobaron líneas de Gasto abiertas por más de \$ 500 millones de dólares, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

020-95	US\$ 222'000,000	Para fines de seguridad nacional. Se dio cuenta al Congreso. Alberto Fujimori – Jorge Camet Dickman – Efraín Goldemberg Schreiber
001-96	US\$ 40'842,122	Para fines de seguridad nacional. Se dio cuenta al Congreso Alberto Fujimori – Jorge Camet Dickman – Dante Córdova Blanco – Tomás Castillo Meza
020-96	US\$ 146'732,401	Concluir la ejecución de compromisos contraídos mediante los DU 020 y 039-95 (No se dio cuenta al Congreso) Firman Alberto Fujimori – Jorge Camet Dickman – Tomás Castillo Meza – Alberto Pandolfi Arbulú
060-97	US\$ 150'000,000	Adquisición de material y equipo para las FFAA No hay copia en el MEF (No se dio cuenta al Congreso)

9. En el caso del **DU 020-95**, la adquisición de armamento en las tres Fuerzas Armadas, se llevó a cabo sin las licitaciones y concursos públicos del caso, al amparo del DU 020-95. Esto permitió convocar en forma simulada, a dos o tres empresas acreditadas como proveedores; las cuales aparecían como representantes de empresas extranjeras. Algunas contaban con la inscripción en la oficina de Registros Públicos, pero varias de ellas no contaban con RUC o con los comprobantes de las facturas.

No se verificó que las empresas proveedoras cumplieran con los requisitos de ley para constituirse como tales en las instituciones de las Fuerzas Armadas. Por el contrario se aprecia un interés ilegítimo en considerar como proveedores a empresas abiertamente simuladas, constituidas por testaferros con capitales insignificantes que vendieron bienes por millones de dólares al Estado peruano.

El DU 020-95, tuvo como objeto ampliar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, en su aplicación las tres instituciones recibieron partidas del Tesoro Público para dicho fin.

Anteriormente se habían promulgado Decretos Supremos con carácter de « secreto » , estos se enmarcaron en el presupuesto del DU 020-95, como el DS 004-95, 015-95, 016-95, 017-95, siendo el DU020-96, la ampliación del calendario de compromisos.

La oficina del Comando logístico del ejército (COLOGE), a través de sus entidades se dedicó a la adquisición de materiales para el Ejército, desde helicópteros hasta mochilas de campaña.

A través de Resoluciones Ministeriales se autorizaron las compras de materiales. El Banco de la Nación las ejecutó a través de Créditos Documentarios coordinados con la Oficina de Economía del Ejército.

Como resultado de la investigación se ha logrado reconstruir las adquisiciones, no obstante no existir un registro detallado de todas las compras, ni de las facturas, ni la lista detallada de los proveedores o los representantes de las empresas extranjeras.

Entre las Empresas proveedoras de las Fuerzas Armadas que no cuentan con RUC, se han detectado las siguientes:

1. UNICOM S.A.
2. CIB & SSA
3. CROUSILLAT BROTHERS INC.
4. TRADING Co. Ltda.

De estos 4, sólo Crousillat Brothers Inc. tiene un poder de representación inscrito en la Oficina de Registros Públicos. Ninguna de las cuatro tiene registro de inscripción en el Perú.

Entre las Empresas que cuentan con RUC, pero que no han solicitado autorización de impresión de comprobantes de pago figuran:

1. Representaciones Asesores y Consultores Empresariales S.A.
2. Agentes y Consultores S.A.

Contribuyentes que cuentan con número de RUC, han solicitado autorización de impresión de comprobantes de pago, pero no han presentado ningún formulario de declaración de pago de tributos:

1. USACOM E.I.R.L.
2. Distribuidora EPELSA S.R.L.

Empresas que tiene RUC, han solicitado autorización de emitir facturas, y efectuado operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas, pero tienen Suspensión Temporal y Baja de Oficio:

1. BYF Comercialización y Representación S.R.L.
 2. CHEAP S.A.
 3. J y J Representaciones S.A.
10. En el caso del **D.U. 001-96**, este Decreto de Urgencia con carácter de «secreto» , fue dado para los fines de Seguridad Nacional, de parte de los recursos de privatizaciones, por el monto de US \$ 40,842,122.00.

Los fondos fueron para la compra de Armamento y Equipo Bélico, para la Fuerza Aérea y el Ejército. Las Resoluciones Ministeriales indican las compras, los proveedores extranjeros y nacionales.

Las compras han sido llevadas a cabo por medio de la FAP y el Ejército Peruano, contamos con la documentación del Banco de la Nación, ésta nos permite encontrar varias irregularidades en la compra de material bélico.

En las compras efectuadas por la FAP, a la Empresa Laurel Holding Inc. Con sede en la ciudad de Miami, Panamá y Bahamas. Observamos que el representante en el Perú es B & F Comercialización y Representaciones S.R.L., esta última descrita en el Decreto de Urgencia 020-95. La Compañía Laurel Holding Inc, tiene su sede principal en la ciudad de Panamá, en la Torre Swiss Bank, 2 piso, Calle 53 Este, Urbanización Marbella, Panamá. Es la misma dirección de la Compañía Treves Intora Association.

Con respecto a las compras efectuadas por el Ejército, sobre todo con respecto a la R.M. 1019, estas empresas no cuentan con representantes en el Perú, sus compras fueron de manera directa.

Los representantes en el Perú, adolecen de los requisitos básicos para ser proveedor de las Fuerzas Armadas, inclusive ellas han ganado la buena pro, como parte de la red de apoyo del ex asesor Vladimiro Montesinos. Pero, podemos observar a través de los informes del Banco de la Nación , y de los créditos documentarios de la FAP: 963033, 963050 y 963066, sobre todo estos dos últimos los medios para probar las irregularidades de tales adquisiciones.

Entre las personas implicadas en estos actos irregulares tenemos al Director General de Economía, el Mayor General Claudio Martínez Gandolfo y el Director de Tesorería Rodolfo del Portal Saco Vértiz, al Subdirector de Economía Jaime Castillo Vega, Luis Cáceres Gómez de la B., el Director de Control de Adquisiciones y Contratos Comandante FAP Jorge López ,Rolando Magni Flores.

En los documentos enviados por la FAP, se observa que los mecanismos de control de los misiles, no se encontraban operativos, ver carta del 12 de agosto de 1997, de Rolando Magni Flores a B Y F Comercialización y Representaciones S.R.L.

El representante de la Compañía es Antonio Maldonado Flores, persona que trabajaba de cerca con Enrique Benavides Morales.

Por el Banco de la Nación deben ser investigados : José Guillén Pastos y Alberto Arrasco Juárez.

11. En el caso del **D.U. 060-97**, no se encuentra el Dispositivo Legal correspondiente, sólo se atendió a través de los oficios dirigidos por el Ministerio de Defensa al Ministerio de Economía y Finanzas, del General César Saucedo Sánchez al ingeniero

Jorge Camet Dickman. Existen documentos del MEF que dan cuenta de que la autorización de gastos fue de US\$150'000,000, dentro de los cuales estaban incluidos los US\$50'000,000 requeridos por la FAP para la contratación de servicios de mantenimiento y repuestos para los aviones MIG 29 Bielorrusos, disposición de gastos que no se efectuó sino hasta 1998 a través del DU 038-98.

Oficios Nro	Fecha del Oficio	Sector Beneficiado	Monto Asignado (\$)
Of. 7192	14-10-97	Ejército	23,000,000.00
Of. 7208	30-10-97	Marina de Guerra	45,000,000.00
Of. 7206*	30-10-97	FAP	32,000,000.00
Total asignado			\$ 100,000,000.00

La Dirección General de Presupuesto Público, informa en su calendario de asignaciones la suma atendida a dicho Decreto de Urgencia por \$ 99,551,477.00 (Informe presentado por la Dirección General de Presupuesto Público, Pág. 237)

Mientras que la Oficina General de Administración (OGA) del Ministerio de Defensa menciona que los Libramientos fueron de la siguiente manera:

Marina de Guerra del Perú	\$	44,961,347.40
Fuera Aérea del Perú		29,785,310.46
Ejército Peruano		21,883,895.80
Total	\$	96,630,553.66

La diferencia que existe en ambos es de \$ 2,880,913.34, que fueron atendidos por la Dirección General de presupuesto Público, pero que nos informan que estos fondos no llegaron.

Durante la vigencia del mencionado D.U. 060-97, se emitieron una serie de Resoluciones Ministeriales refrendadas por el entonces Ministro de Defensa, General E.P. César Saucedo Sánchez y por el ex Comandante General del Ejército y Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza Ríos.

En el Ejército Peruano las compras se realizaron de manera directa, sólo en dos casos se recurrió a los representantes en el Perú, el resto se realizó de manera directa. Los implicados en las compras fueron: Jaime Zegarra Guillén, General de Brigada del Cologue; Luis Mayaute Chezzi, General de División del Cologue; Américo Fernández Cáceres General de Brigada, Jefe de Economía del Ejército; Coronel Jaime Calderón Chávez, Sub Jefe de Economía del Ejército; y Winston Alfaro Vargas, Jefe de Tesorería del Ejército.

En la Fuerza Aérea Peruana las empresas que deben ser investigadas son : Derco con su representante Wimpech y Treves Intora Association Ltd. Este último es investigado en la compra de los aviones MIG -29 y SUKHOI SU 25.

Los principales responsables de la Fuerza Aérea son : Elesván Bello Vásquez, Claudio Martínez Gandolfo, Director General de Economía y Rodolfo del Portal Saco Vértiz, Jefe de Tesorería; y el Subjefe de Tesorería Francisco Lizarzaburu Rechkmmer.

En la Marina de Guerra del Perú, sale a la vista la compra de diverso material bélico (misiles) a la Compañía AVIAKOM S.A. de Hungría, esta compañía tiene su sede en sus oficinas en Panamá, junto con Treves Intora Ltd y Laurel Holding, en la misma dirección de la ciudad de Panamá.

Los implicados de estas compras tenemos a : Víctor Ramos Ormeño y Gonzalo Rodríguez Maisterrena ambos directores generales de Economía y Rafael Francia Gonzaga Director de Tesorería de la Marina.

Se ha constatado que distintas empresas representantes en el Perú adolecen de documentación exigible por parte de la SUNAT. En la mayoría de los casos no han registrado sus ventas en el Perú. Estas se han llevado a cabo por medio de Créditos Documentarios. Los pagos a dichas empresas la realizaban por algún Banco del exterior, en especial aquellas empresas que se encontraban en la ciudad de Miami.

Los representantes en el Perú, no emitían facturas ni comprobantes probatorios de sus ventas. Las facturas eran hechas en el exterior y las distintas Fuerzas Armadas aceptaban estos documentos. Al amparo de las exoneraciones de licitación y concurso público para la compra de equipos de campaña, armamento, equipos de comunicación y otros, sólo invitaban a las mismas empresas a presentar sus precios y a una supuesta competencia en un círculo cerrado de postores, admitiendo a veces sólo un postor.

Varias de estas empresas vendían a las tres instituciones de las Fuerzas Armadas, por lo tanto sus datos y documentación se encuentran archivadas en las respectivas oficinas de adquisiciones. Algunas empresas contaban con capitales insignificantes, sin embargo vendieron por montos de varios millones de dólares al Estado. La forma de constitución y operación de estas empresas con personas sin ninguna trayectoria empresarial, con montos mínimos de capital y sin guardar los requisitos de formalidad tributaria exigida por SUNAT, demuestran que se trataron de empresas simuladas constituidas por testaferros para realizar la compra-venta de armamento y otros bienes a las Fuerzas Armadas, con el compromiso de los más altos niveles de decisión institucional y del gobierno.

Medios probatorios de los actos irregulares.

Las facturas emitidas en el exterior así como la documentación de pago emitida por el Banco de la Nación han permitido identificar a los beneficiarios de dichas compras, así como a los funcionarios intervinientes en cada operación de compra-venta.

La prueba documentaria de las irregularidades ha sido obtenida a través de la Oficina General de Administración del Ministerio de Defensa, de los tres institutos de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco de la Nación.

V.1. LA GESTIÓN DE NICOLÁS HERMOZA RIOS COMO COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO

1. El General EP (r) Nicolás de Bari Hermoza, se desempeñó como Comandante General del Ejército y Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre diciembre de 1991 y agosto de 1998.
2. Su decisiva influencia en el Gobierno del Ingeniero Alberto Fujimori y el control de las operaciones de adquisición de bienes, servicios y equipamiento para el Ejército durante los años en que ejerció la Jefatura del COLOGE y la Comandancia General de este

Instituto, permitieron el desarrollo de actividades ilícitas que son el origen de los depósitos bancarios descubiertos y denunciados por parte de la Fiscal de Zurich, Dra. Cornelia Caba y que, hasta el momento suman más de \$ 19,5 millones de dólares.

3. Durante el período del general Nicolás de Bari Hermoza, entre diciembre de 1991 y agosto de 1998, el Ejército Peruano realizó un total de 128 operaciones por un monto de \$ 282'983,909.93; las cuales fueron financiadas según el siguiente detalle:

Monto Total de Gastos 1991-1998 según fuente de financiamiento- (US \$)	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
Privatización	101,983,247.63
Recursos Especiales	26,185,318.00
Recursos Ordinarios	25,055,372.07
Presupuesto de Emergencia	86,270,749.74
Directamente Recaudados	5,794,026.73
Endeudamiento Externo	37,695,195.76
TOTAL	282,983,909.93

Fuente: Ministerio de Defensa y Comando General del Ejército.

4. Durante la gestión del General Hermoza Ríos se utilizaron un 94% de los recursos de privatización asignados al Ejército durante los años 1990 y 2000; un 82% de los Fondos de Emergencia y un 80% de los fondos adquiridos mediante operaciones de endeudamiento externo.
5. La mayor parte de estas operaciones fueron realizadas al amparo de Decretos de Urgencia secretos, bajo modalidades de Licitación Privada o Adjudicación Directa, conducidas por el Ejército y bajo la Jefatura del general Hermoza comprenden:

PRINCIPALES DECRETOS DE URGENCIA 1990-2000 QUE DETERMINARON OPERACIONES EN EL EJÉRCITO PERUANO			
065-94	Adquisición directa de maquinarias y equipo de ingeniería	\$ 31'000,000	Ejército
09-95	Autorizan a Petroperú a proveer combustible como Compensación de Deuda con AIG	\$ 25'000,000 *	(Los tres institutos)
020-95	Para fines de seguridad nacional	\$ 222'000,000	(Los tres institutos)
028-95	Autoriza la adquisición, por adjudicación directa, de bienes, servicios y contratación de obras.	No se precisa	FFAA
039-95	Autorización de calendarización y giro Con cargo al Tesoro Público	S/. 21'792,500	Ejército
001-96	Para fines de seguridad nacional	\$ 40'842,122	(Los tres institutos)
020-96	Concluir la ejecución de compromisos contraídos mediante los DU 020 y 039-95	\$ 146'732,401	(Los tres institutos)
005-97	Seguridad nacional (pacificación)	\$ 105'494,060	(Los tres institutos)

PRINCIPALES DECRETOS DE URGENCIA 1990-2000 QUE DETERMINARON OPERACIONES EN EL EJÉRCITO PERUANO			
060-97	Adquisición de material y equipo para las FFAA	\$ 150'000,000	Los tres institutos)
081-97	Destina partida de recursos de privatización	\$ 211,397.06	
052-99	Helicópteros MI-17 (No se dio cuenta al Congreso)	US\$ 8'500,000	Ejército
060-99	Overhaul para maquinarias adquiridas mediante DU 065-94 (No se dio cuenta al Congreso)	US\$ 18'355,599	Ejército

Fuente: MINISTERIO DE ECONOMIA. Dirección Nacional de Presupuesto: Información sobre Fondos Públicos Utilizados para Gastos de Defensa

6. Se ha podido establecer que el General EP (r) Nicolás de Bari Hermoza Ríos, desarrolló y promovió una larga serie de irregularidades en las adquisiciones de material bélico para favorecer un grupo privilegiado de proveedores a cambio de ilegales comisiones. Para ello contó con la participación de otros mandos militares y funcionarios que tuvieron responsabilidad en los respectivos procedimientos. En estas operaciones, se vio favorecido un reducido grupo de empresarios que gozaban de la protección de los altos mandos del Ejército. Los empresarios favorecidos en una serie de operaciones son los empresarios Tzvi Tsudit y Moshe Rothschild Chassin, Jean Devrout van Beckhoven, James Stone Cohen y Enrique Benavides Morales. Estas operaciones irregulares que habrían originado los ingresos ilegales descubiertos al Gral. (r) Hermoza Ríos, también se habrían concertado con el Gral. (r) Víctor Malca Villanueva, a quien también se le han encontrado más de \$ 16 millones de dólares en cuentas bancarias de Gran Cayman, México y Estados Unidos.
7. En la mayor parte de estas operaciones, se violaron las normas del Sistema Nacional de Control, al no ponerse oportunamente en conocimiento de la Contraloría General. En la mayoría de operaciones analizadas, se burlaron los mecanismos de fiscalización bajo la modalidad de simulación de la presentación de ofertas de distintas empresas, que en realidad pertenecían a una sola persona, y sin que existan los documentos del respectivo proceso que evidencien la existencia de las ofertas, como pudo apreciarse en la investigación de casos examinados en el Ejército.
8. De las declaraciones brindadas a nuestra Comisión por el Gral. EP (r) Manuel Pancorbo, quien ejerció la Comandancia General del COLOGE, durante 1995 (año en que se realizaron las principales adquisiciones; el Gral. Hermoza Ríos direccionaba el otorgamiento de la Buena Pro de las licitaciones, desde la formulación de los requerimientos. El mencionado oficial además explicó que el Gral. Hermoza en concertación con determinados proveedores y los Intendentes responsables de las adquisiciones en el COLOGE, fraguaban estas operaciones bajo mecanismos que se pueden apreciar mejor en el análisis de casos que se describen a continuación.
9. Mediante la Resolución Ministerial N° 0567DE/EP, del 15 de mayo de 1995, el entonces Ministro de Defensa, Gral. EP. Víctor Malca Villanueva, aprobó la solicitud del Gral. (r) Nicolás Hermoza de comprarle directamente a la compañía sudafricana "Denel Limited", representada por Jean Devrout, en centenares de morteros y lanzagranadas y munición, por un monto de \$ 3, 826, 250 dólares, sin la autorización previa de la Contraloría General como lo disponen las leyes vigentes.
10. El 15 de mayo de 1995, se emite la Resolución Ministerial N° 0568DE/EP que aprueba la adquisición bajo la modalidad de adquisición directa y otorga la buena pro a la firma

- "Trading Co. Ltd.", una de las empresas de Tzvi Tsudit, de 10 mil fusiles "Gallil", 5 mil millones de munición y un lote de repuestos; por un monto de \$ 12,980,000.00 dólares. Esta operación tampoco contó con el Informe Previo de la Contraloría, a pesar de que los dispositivos indican que cualquier operación bajo la modalidad de "secreto militar" requiere este informe previo.
11. El 09 de junio de 1995 se dispuso mediante Resolución Ministerial N° 0602DE/EP la compra de cuatro lanzadores múltiples calibre 107 y 3 mil cohetes para dicho armamento, por un total de \$ 2,412,000.00 dólares. La beneficiada fue la compañía "Denel Limited" del ciudadano sudafricano Jan Devrout. En esta operación se repiten las mismas irregularidades señaladas anteriormente.
 12. Mediante la Resolución Ministerial N° 125/DE/EP, suscrita por los generales César Saucedo Sánchez y Nicolás Hermoza Ríos, la compañía "Trading Co. Ltd." de Tzvid Tsudit resultó ganadora de una "licitación privada" mediante la cual se pagó \$ 1,486,190.00 dólares por un "Equipo para Fuerzas Especiales" que comprendía, entre otros, 100 pistolas con silenciadores "Jerichó", 92 mini ametralladoras "Uzi" con silenciadores, ocho rifles con miras telescópicas y visores nocturnos para francotiradores, 100 cascos balísticos, designadores de láser, explosivos plásticos para operaciones encubiertas, 30 fusiles micro "Galil" con silenciadores, ametralladoras "Neguev", además de un curso de instrucción especializada israelí.
 13. Existen evidencias sobre deficiencias en la calidad de los equipos y bienes adquiridos, tales como helicópteros, vehículos, municiones, vestimentas, entre otros. Existen además responsabilidades directas del General Hermoza en el uso de los DU 020-95, 020-96, 001-97 y 060-97, que dio carta libre para el uso de millones de dólares al Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina. En el Ejército, correspondía al General Hermoza el uso arbitrario de estos recursos, de donde obtuvo buena parte de sus ilícitas comisiones, como el mismo lo ha aceptado ante el poder judicial.

V.2 CASO ADQUISICIÓN DE HELICOPTEROS PARA EL EJERCITO PERUANO

V.2.1. DECRETO DE URGENCIA N° 039-95

1. Con base a este Decreto de urgencia, se solicitó al Banco de la Nación la apertura de un Crédito Documentario por la suma de US \$ 9,475,000.00 dólares, a favor de MOBETEK REPRESENTACIONES S.A. SUCURSAL PANAMA, para la compra de : 3 helicópteros MI-26 T, un lote de repuestos y curso para tripulantes y personal de mantenimiento.
2. Los libramientos tenidos a la vista y que respaldan la ejecución de este Decreto de Urgencia suman, en total S/. 17,748,000.00 nuevos soles. Siendo que la precitada norma autoriza una suma mayor, existe una diferencia de S/.4,044,500.00 nuevos soles que han sido cubiertos mediante la utilización de saldos de "fondos colaterales" previamente depositados pero cuyo uso se autorizó mediante Decreto de Urgencia 020-96.

El monto consignado en el Memorando 1562-95-EF/76.14 sirvió para pagar la factura N° 1029-95 por los helicópteros. Las otras tres facturas fueron pagadas con fondos autorizados por el MEF "vía colaterales", según se desprenden del párrafo 2.b. del oficio 370 E-5/a, dirigido por el Jefe de Economía del Ejército al Banco de la Nación; a pesar

de que las discrepancias se "levantaron " referencialmente, según consta en el párrafo 3.a del precitado Oficio.

Las observaciones o "discrepancias" formuladas por el Banco corresponsal a la vista de los documentos presentados en el exterior por el proveedor no han sido "levantadas" en detalle, sólo de manera genérica; sin considerar que ellas son de mucha gravedad. Aquí se evidencia cierta negligencia, cuando no complicidad, entre el funcionario del Ejército del Perú que, en cumplimiento de sus funciones, debió agotar los medios comerciales -y en su momento legales- para que el proveedor ejecute sus prestaciones tal como se ha comprometido, y este último, quien es liberado irresponsablemente de sus obligaciones.

Adicionalmente, existe una conducta irregular por parte de quien fuera Director General del Tesoro Público, en dos momentos: a) al liquidar la operación bancaria, se devuelvan fondos "colaterales" pero a nombre de "Dirección General - Tintaya S.A.", lo que induce a pensar que el dinero depositado como "colateral" provino de fuente distinta del presupuesto público o de dinero que, estando incluido en el presupuesto, sus fines son distintos a los de servir de garantía de créditos documentarios bancarios, porque los "libramientos" fueron expedidos con posterioridad a la imposición de los "colaterales"; b) porque al ejecutarse la devolución, ésta se hace al año medio posterior al de su solicitud, y cuando se efectúa el cambio de moneda extranjera a nacional, aparece una diferencia que aumenta el monto originalmente depositado, pero no se explica el destino de aquella diferencia, sólo se abre una "cuenta a plazo" por el total a nombre de la precitada "Dirección General - Tintaya S.A."

V.2.2. EL CASO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 052 - 99

La aplicación de este Decreto de Urgencia, se efectuó durante la gestión como Comandante General del Ejército, al Gral. E.P. (r) José Villanueva Ruesta. Según la documentación existente, este Decreto de Urgencia se emite para gastos en los siguientes rubros: "Bienes y Servicios" : US \$ 2,000,000.00 (reparación de conjuntos mayores aplicables a las aeronaves de la AE); y "Otros gastos de Capital" : US \$ 6,500,000.00 (02 helicópteros MI 17 1B, 02 aviones AN-28, y 01 avión Cessna Modelo 208). El monto es asignado en Nuevos Soles, al equivalente de S/.3.40 por cada dólar.

De la información alcanzada por el Banco de la Nación referida al Crédito Documentario 993070, se tiene que éste se abre hasta por US \$ 6,500,000.00 sólo para cubrir el rubro "Otros gastos de capital", y se nombra como "beneficiario" a una tercera persona con sede en Bahamas. MORECAMBE CORP. El material sería traído desde Europa.

El total del dinero se pagó en el exterior sólo contra la presentación de "recibos simples", según instrucciones del Jefe de Economía del Ejército.

La diferencia que se advierte en el tipo de cambio aplicado en el cuadro alcanzado por el Ejército, por el que ambos libramientos (647 y 648) suman un total de US \$ 6,529,850.75 dólares, no considera que: a) cada uno de ellos cubre partidas contables diferentes: "Bienes y Servicios" y "Otros Gastos de Capital"; b) el crédito documentario se abrió sólo para la compra del segundo de los rubros. Sin embargo, este total sobrepasa el monto del Crédito Documentario en US \$ 29,850.75 dólares, lo que hace presumir que la totalidad del dinero se utilizó para cubrir el monto de uno solo de los rubros quedando al descubierto el otro, máxime cuando éste no tiene documento contable que sustente su utilización como pago por bienes y servicios".

La oficina importadora, Servicio de Material de Guerra del Ejército, contradice sus propias instrucciones impartidas al Banco de la Nación al momento de abrir el Crédito

Documentario, y acepta que se pague al beneficiario la totalidad del crédito contra la presentación de recibos simples, no facturas. Es necesario acotar que lo expuesto se constituye en una violación de lo estipulado en la cláusula tercera del contrato, en la que sólo se pactó un adelanto por el 20% pero no por el total del crédito.

Además, esta autorización de pago es una especie de "cheque en blanco" respecto de las "discrepancias" advertidas, por el Banco Corresponsal, en los documentos presentados por el proveedor para que el crédito documentario sea pagado en el exterior. En efecto, la oficina importadora no precisa, en defensa de los intereses del Estado, cuáles son los motivos, causas o razones fundamentadas por las cuales "levantaba" las "discrepancias" advertidas.

A la vista de la Carta de Fianza emitida a favor de MORECAMBE CORP. Por el Banque Nationale de París, por el 100% del contrato, podemos inferir que lo que realmente ha sucedido es que el Estado Peruano ha financiado a su proveedor en la compra ofertada por éste; máxime cuando el proveedor es un intermediario, y cuando se ordenó el pago del total (20 + 80%) contra la presentación de simples recibos. En nuestra opinión, el documento que corre como "factura comercial" no es tal, sino más bien parece una simple proforma. En todo caso, es necesario comparar dicho documento con las emitidas por la misma empresa en la ejecución del DU 039-95, y así ver las obvias diferencias.

Sobre el extremo referido al "secreto militar" de que se ha cubierto la emisión y ejecución de este DU, creemos necesario advertir que la cláusula decimotercera del contrato hace referencia a ello como obligación de las partes. Sin embargo, no encontramos ninguna fórmula que se traduzca en una garantía real y efectiva para el caso del incumplimiento de este pacto por parte de la vendedora; quedando, en todo caso, como una norma cuya trasgresión si bien se sanciona por las reglas generales contractuales, no ha previsto que la indemnización resultante por el daño causado se encuentre garantizada de manera tangible(documentalmente), sobre todo considerando que la contraparte (proveedora) es una empresa intermediaria domiciliada en el extranjero. En realidad, esto rompe el equilibrio contractual que debe estar presente en toda relación obligacional de tipo patrimonial, en desmedro de los intereses del Estado Peruano.

V.3 De la responsabilidad de intermediarios y proveedores privados en las irregularidades cometidas contra nuestras Fuerzas Armadas.

En relación a las empresas intermediarias y proveedores que se han beneficiado de la actuación ilícita de los denunciados, podemos señalar que de las informaciones recogidas por la Comisión Investigadora que presidió el Congresista Pedro Morales Mansilla y de los documentos correspondientes de los Registros Públicos, se puede establecer las siguientes vinculaciones:

Empresas vinculadas a James Stone - Ilan Weil Levy – Fernando Carulla

ATLAS TRADE S.A
 SUTEX S.A
 TRADING CO. S.A
 AMERICAN SECURITY
 GHISS IBÉRICA

Estas personas además operaron como Apoderados de proveedores internacionales:
 AUTOMOTIVE INDUSTRIES LTD
 HIGHTECH TECHNOLOGY LTD.

Además están las empresas vinculadas a los socios del ciudadano Vladimiro Montesinos Torres en la formación de la Empresa W21 Intertechnique Enterprise, junto con los ciudadanos Víctor Alberto Venero Garrido, Luis Duthurburu Cubas y Gerard Kruger Dizzilo, entre otros:

Enrique Benavides Morales

CROUSILLAT BROTHERS INC.
 C W-1 INVERSIONES CORP
 DEBRET ENTERPRISES LIMITED
 PROSALES INTERNACIONAL INC.
 B&F. COMERCIALIZACIÓN Y REPRESENTACIONES
 DRAKO REPRESENTACIONES
 COMPAÑÍA IMPORTADORA FERRETERA
 INTERNATIONAL DEALERS S.A.
 CORPORACIÓN DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL S.A.
 JRB REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES
 MUVARCH INTERNATIONAL TRADING S.A.

Operó además como Apoderado de proveedores internacionales:

DELFIN INSTRUMENTS ELECTRO-OPTICS
 ELISRA ELECTRONIC SISTEM LTD.
 VASOV ENGINEERING PLANTS LTD.
 FABRIQUE NATIONALE NOUVELLE
 HERSTALD S.A.

Moshe Rothschild Chassin

MOBETEK REPRESENT. S.A.
 SHEMESH REPRESENTACIONES SRL.
 SOIDE REPRESENTACIONES SRL.

Operó además como Apoderado de proveedores internacionales:

BESPRIMERNY PRIVATE AVIATION
 ACHIDATEX NAZARETH ELITE
 RADOM AVIATION TECHNOLOGY LTD.
 G-92 COMMERCE
 NOGA LITE LTD.

Klaus Corpancho Kleinicke

WOTAN INTERNATIONAL S.A.
 ORMUZD S.A.
 GOTAMA S.A.

Operó además como Apoderado de proveedores internacionales:
 ALENIA DIFESA

Oscar Muelle Flores

MUVARCH REPRESENTACIONES
VIFEBRISA

Estas empresas se vieron favorecidas con una gran concentración de transacciones tal como se puede apreciar en el siguiente Cuadro obtenido de la información recogida por la Comisión Parlamentaria que presidió el Congresista Pedro Morales y de las investigaciones desarrolladas por el MEF, a través del Equipo conducido por la Dra. Beatriz Mejía Mori.

Así, podemos señalar que existen hasta tres grandes grupos de proveedores que se vieron beneficiados de una concentración de operaciones adjudicadas a través de procedimientos irregulares. Una muestra de la influencia de estos tres grupos de proveedores puede apreciarse en los siguientes cuadros:

EMPRESAS VINCULADAS A LOS SOCIOS DE W21 INTERTECHNIQUE :
TOTAL: \$ 473'139,330

252,052,420	18 Mig29 Bielorrusia	Treves Intora-W21
150,000,000	18 SU-25 Bielorrusia	Treves Intora-W21
30,000,000	Services y Mantenimiento MIG29 y SU25	Treves Intora
17,177,410	170 Misiles Iгла 9M-39 T/A	Laurel Holding/BYF/Intora
13,500,000	Ensamblaje e instalación radar NEBO	Treves Intora
3,934,500	45 Misiles Iгла 9M39M	Aviakom-JRB Importaciones-Treves Intora
9,475,000	3 Helicópteros MI-26/, repuestos	G-92 Commerce Hungría / Mobetek Panama

EMPRESAS VINCULADAS A JAMES STONE: TOTAL \$ 247'815,034

126,000,000	3 MIG-29 Rusos	Stone-Weil
64,471,187	Fusiles Galil y pistolas	Hightech Technology
31,510,047	Equipos y armamento	Denel
16,521,727	Equipamiento Ministerio del Interior	Sutex
9,312,073	Ministerio del Interior y FAP	Atlas Trade

**EMPRESAS VINCULADAS A CONSORCIOS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA:
TOTAL \$ 119'605,906**

18,000,000	6 Aviones Y-12, repuestos	CATIC
31,954,486	Equipos de ingeniería	CATIC
4,739,062	30 millares de munición	Norinco
18,355,599	Overhaul equipos ingeniería	CATIC
10,195,435	3 Aviones Y-12-II	CATIC
36,000,000	06 aviones Y-12	CATIC
48,682	Repuestos comunicación	Huong SRL
312,642	Municiones	Norinco

Del análisis de los listados de adquisiciones y Resoluciones Supremas o Ministeriales, se puede establecer claramente que la concentración de adquisiciones se organiza a través de estos tres grandes grupos de proveedores. En sus principales operaciones asumen contratos por **US\$840,560,270**, es decir el **44%** del total de fondos usados en el sector Defensa por toda fuente, que ascienden a **US\$1,922'591,000**.

VI. DE LA FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS QUE FUNDAMENTARON LA ACTUACIÓN DE LOS DENUNCIADOS

VI.1 De la inconstitucionalidad de los Decretos de Urgencia, Decretos Supremos y Resoluciones Supremas «secretos»: violación del principio de publicidad de las normas jurídicas previsto en los Arts. 51º y 109º de la Constitución

1. Tanto la Constitución de 1979 como la Constitución de 1993 consagran el principio de publicidad de las leyes. La Constitución de 1979 establecía que la ley era obligatoria desde el decimosexto día ulterior a su publicación en el diario oficial. La Constitución de 1993 recoge este principio en su Art. 109º cuando preceptúa: «La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte» .
2. Así también el texto de 1993 establece claramente en su Art. 51º que : «La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado» ... Nótese que la Constitución no hace distinciones. El texto de la Ley Fundamental es muy claro, todas las normas, sin ningún tipo de excepción, deberán ser publicadas para tener vigencia. La publicidad de la norma hace fe de ella y de su propia existencia y contenido. Se deja sentado de este modo ante la comunidad que existe una norma legal nueva, dictada por el órgano competente y que le corresponde a todos respetarla, cumplirla y hacerla cumplir. Como sostiene EDUARDO GARCIA DE ENTERRIA, «la publicación es un requisito esencial para la existencia de la ley, no una mera regla formal o una simple condición de eficacia» . En el mismo sentido, IGNACIO DE OTTO señala que «la publicación de la norma es un elemento constitutivo de su incorporación al ordenamiento jurídico. La norma no publicada carece de toda virtualidad, no tiene fuerza de obligar». Si no tiene fuerza de obligar, entonces, de conformidad con la Constitución, la norma no está vigente.
3. Se trata de una verdadera garantía constitucional, en la medida que nadie puede ser obligado al cumplimiento de una ley sin su previo conocimiento. Los órganos políticos,

los administrativos y los jurisdiccionales quedan advertidos del carácter imperativo de su observancia sin que su exigencia de cumplimiento deba serles reclamada o recordada por nadie.

4. Queda claro entonces que la publicación es esencial para que la norma forme parte del ordenamiento jurídico y sea de imperativo cumplimiento. Los Decretos secretos dictados por Fujimori en complicidad con los ex Ministros denunciados, son abiertamente inconstitucionales y en rigor debieron haber carecido de efectos jurídicos. No obstante, el andamiaje preconcebido para favorecer el desfalco de las arcas estatales y la ausencia de diligentes mecanismos de control, permitió que en la realidad, de facto, produjeran nefastas consecuencias pese a su nulidad.
5. Si bien es cierto que no sólo durante la Presidencia de Alberto Fujimori se ha hecho uso de Decretos de Urgencia y Supremos secretos, ello no implica que estos tengan validez jurídica. Se aduce como justificación de la aprobación de estos Decretos secretos el Decreto Supremo N° 001-68/JC del 9 de febrero de 1968, el cual excluía de la publicación en el diario oficial el Peruano de los Decretos Supremos y Resoluciones «que por razón de seguridad pública o defensa nacional tengan carácter de reservado o secreto». Lo primero que cabría resaltar es que esta norma no incluye a las normas con fuerza de ley como los Decretos de Urgencia por lo que no se podría justificar vía este artículo el dictado de Decretos de Urgencia secretos. Lo segundo que cabría precisar es que por un principio de jerarquía normativa debe preferirse la Constitución a cualquier norma de menor rango. Si la Constitución dispone la publicidad como requisito esencial para la vigencia de toda norma del Estado, mal podría establecerse por normas de inferior jerarquía excepciones que la Carta Magna no contempla. Así, implicaría un grueso contrasentido invocar como sustento legal una norma dada por el Ejecutivo en el año 1968 con rango infralegal, para justificar la expedición abusiva de dispositivos secretos que dieron pie a desfalcos durante el gobierno de Alberto Fujimori. Máxime, cuando en el caso de los Decretos de Urgencia, éstos fueron deliberadamente ocultados a la representación nacional.
6. Otro argumento aducido a favor de la validez de los dispositivos legales secretos es que según el inc 5 del Art. 2º de la Constitución de 1993, se establece como limitación al derecho de solicitar información a las entidades públicas el acceso a «informaciones referidas a la intimidad personal y **las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional**». Pero este artículo hace referencia a la información clasificada de inteligencia que se encuentre en poder de las fuerzas armadas o cualquier otro tipo de información confidencial que debe ser determinada por ley. El artículo habla de restricciones al acceso de información clasificada, no al acceso de dispositivos legales, los cuales por mandato expreso de la norma constitucional deben ser de público conocimiento. La interpretación antojadiza de una norma no puede dar cabida a la desnaturalización de otro precepto constitucional como el que contiene el principio de publicidad de las leyes. La Constitución no puede contener preceptos contradictorios y resulta forzado pretender defraudar una norma de sentido unívoco, como la que dispone el carácter esencial de la publicidad para la vigencia de **toda norma del Estado**.
7. En todo caso, una cosa es denegar el acceso a información confidencial castrense, la cual por seguridad nacional no puede estar en manos de cualquiera y otra cosa es impedir que la ciudadanía y el Congreso conozcan el contenido de Decretos de Urgencia que tengan relación con asignaciones presupuestales y pueden ejercer la debida

fiscalización. En el primer caso se protege los intereses nacionales, en el segundo se incurre en una gruesa transgresión constitucional que refleja arbitrariedad, autoritarismo y, como se ha podido ver, favorecer graves actos delictivos. Consideramos por ello que esta infracción no fue accidental sino dolosa para dar cabida a infinidad de actos irregulares en perjuicio del Estado, al quedar dichos dispositivos dolosamente al margen de los mecanismos democráticos de control.

VI.2 De la excepcionalidad de los Decretos de Urgencia y violación del deber de dar cuenta al Congreso (Art. 118º inc. 19 de la Constitución) y del deber presidencial de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes (Art. 118º inc. 1)

1. La Constitución Política de 1979 en su Art. 211º inc. 20) establece como atribución del Presidente de la República : **«Administrar la Hacienda Pública; negociar los empréstitos y dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso »** . También la Constitución de 1993 establece en su Art. 118º inc. 19) que es atribución del Presidente: **«Dictar medidas extraordinarias con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo a dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos Decretos de Urgencia»** .
2. Cabe resaltar que en ambas normas constitucionales se exige para la expedición por parte del Presidente de estas normas con rango de ley, de una coyuntura de excepción en la cual la dación pronta de la norma obre en salvaguarda del interés nacional. Vale decir, sólo se justifica la expedición de estos dispositivos cuando la urgencia de una regulación legal en determinado asunto haga imprescindible obviar el proceso ordinario de formación de leyes al interior del seno parlamentario. Obviamente, la fórmula interés nacional debe ser interpretada en forma restrictiva ya que un ejercicio abusivo de esta atribución como el desplegado por Fujimori con la complicidad de sus Ministros, usurparía y desnaturalizaría por completo la labor legislativa del Parlamento.
3. Ello es precisamente lo que ha ocurrido en el caso materia de la presente denuncia. Los Decretos de Urgencia expedidos y por los que se dispone de fabulosas sumas de dinero no han sido expedidos en una coyuntura que hiciere justificable el prescindir del proceso de formación de leyes ordinarias. No existía una situación que comprometiera el interés nacional para apresurarse a dictar Decretos de Urgencia, con el agravante de que estos no fueron publicados en el diario oficial. Asimismo, la norma constitucional circunscribe el ámbito materia de regulación de los Decretos de Urgencia a materia económica y financiera. El Presidente no puede hacer uso de ellos para asuntos de otra índole, como la compra de un avión presidencial o la mera simplificación general del proceso de adquisición de bienes por parte de las Fuerzas Armadas.
4. Otro aspecto sobre el que cabe hacer hincapié es que se establece expresamente la obligación del Presidente de dar cuenta al Congreso de los Decretos de Urgencia que dicte el Presidente en el ejercicio de esta atribución, quedando en manos del Congreso la facultad de modificarlo o derogarlo. Con ello queda claro que la facultad de expedir Decretos de Urgencia no es una facultad omnímoda del Presidente, sino más bien implica una salida realista que facilita la celeridad en la dación de dispositivos legales cuando así lo demandan los superiores intereses nacionales. Ello según la norma

constitucional no interfiere con la labor legislativa y de control del Parlamento ya que este tiene la última palabra pues el Presidente tiene la obligación de dar cuenta al Congreso. En este caso el Parlamento puede mostrar su conformidad con el dispositivo, modificarlo o incluso derogarlo si es que considera que es arbitrario y su dación no reviste carácter de urgencia.

5. Por lo tanto, Fujimori y los ex Ministros denunciados han incurrido en una gravísima infracción constitucional al dictar de manera subrepticia dispositivos con rango de ley, al margen del carácter excepcional de tales normas, y por no haber cumplido con informar al Congreso de la República sobre su expedición y contenido, por lo que dicha omisión acarrearía las responsabilidades denunciadas, existiendo responsabilidad inclusive por parte de los entonces Presidentes de las Comisiones de Fiscalización y Defensa del Congreso, que en razón de su cargo tuvieron conocimiento de estos hechos y las irregularidades que de ellos derivaron y no hicieron nada para denunciarlos, como era su deber atendiendo a los cargos que ocupaban.
6. La responsabilidad del ex Presidente Fujimori se agrava teniendo en cuenta que el Art. 119 núm. 1 establece que le corresponde «Cumplir y hacer cumplir» la Constitución y las Leyes, deber que ha sido violado de múltiples formas a través de los citados Decretos de Urgencia.

VI.3 Infracción del los Arts. 125º inc. 2 y 126º de la Constitución

1. El Art. 125º núm. 2 de la Carta Magna precisa:

«Son atribuciones del Consejo de Ministros: (...)

2. Aprobar los decretos legislativos y los **decretos de urgencia** que dicta el Presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley».

De otra parte, el Art. 126 de la Constitución establece lo siguiente:

«Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros y consta en acta.

Los miembros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa.

Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas».

3. Los ex Ministros denunciados han incurrido en flagrante transgresión constitucional en la medida de que no obstante estar al corriente y prestar conformidad con los dispositivos secretos que destinaban millonarias sumas de la privatización al sector Defensa, pretendieron ocultar su responsabilidad, no suscribiendo las actas correspondientes, desapareciéndolas o evitando la aprobación de los dispositivos en el Consejo de Ministros, como ordena la Constitución como condición de validez. Así, al no existir las actas de aprobación del grueso de los dispositivos secretos aludidos ante el Consejo de Ministros, estos no debieron surtir efecto jurídico alguno pues se habría violentado un

requisito que la propia Carta Magna establece para la validez de los acuerdos y su inobservancia acarrearía la nulidad del acto. Así, un Decreto dictado sin que haya sido previamente aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros –lo que necesariamente debe constar en acta- adolece de un vicio insalvable en su génesis que acarrea su nulidad. No produce efecto jurídico alguno ni importa obligatorio cumplimiento pues no se observa un requisito esencial que la norma constitucional establece para la validez del acto.

- Los ex Ministros denunciados también habrían actuado como gestores de intereses propios y de terceros, pues su complicidad en la dación de estos dispositivos es la que habría dado cabida a la realización de una serie de operaciones irregulares constitutivas de delitos contra el Estado. El carácter de secreto de los dispositivos, la inexistencia de las actas de acuerdo del Consejo, así como la festinación de los fondos derivados al sector Defensa a través de empresas intermediarias, apunta a ello y denota el ánimo lucrativo con el que pudieron actuar.

VI.4 Infracción al Art. 102º inc. 2 de la Constitución

- Este dispositivo constitucional establece claramente que es atribución del Congreso: **«Velar por el respeto a la Constitución y las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores»**. En tal sentido establece el deber genérico de los Congresistas de estar vigilantes ante cualquier posible transgresión de la Carta Magna por parte de cualquier persona. También se establece el deber y potestad de los parlamentarios de efectuar actos positivos que impliquen disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de todos aquellos que infrinjan la Constitución.
- En esta línea de ideas, es preciso esclarecer la responsabilidad de quienes desde las funciones ejercidas en el Poder Legislativo debieron controlar y fiscalizar el uso de los dispositivos secretos emitidos por el Poder Ejecutivo y proceder a investigar las sucesivas denuncias que se presentaron ante el Parlamento Nacional respecto a las irregularidades cometidas en las adquisiciones de armamento efectuada bajo el carácter de "secreto militar". Para mayor detalle, se presenta en el siguiente cuadro, la relación de las Mociones de Orden del Día presentadas ante el Pleno del Congreso por Parlamentarios de diversas bancadas y que, reiteradamente, fueron rechazadas por la bancada del entonces oficialismo.

MOCIONES PRESENTADAS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA PARA SOLICITAR INFORMACION ENTRE 1996-1999 Y QUE FUERON RECHAZADAS

MOCION	CONGRESISTA	FECHA	No.
Para que se investigue la compra de los aviones de guerra de segunda mano sin garantía y sobrevalorados	Arturo Castillo Chirinos	28.03.96	4257-95
Para que se investigue al Ministro de Defensa Sr. Malca por la compra de aviones MIG	Jorge Del Castillo, Angel Velásquez, César Zumaeta	02.04.96	4341-95
Para que se investigue la Licitación de uniformes de la policía	Henry Pease	13-04-96	4770-95
Para que se investigue el tráfico de armas de Argentina a Ecuador durante	Javier Diez Canseco, Ernesto Gamarra	30.05.95	5225-95

el conflicto del Cenepa.			
El tráfico de armas de Argentina a Ecuador	Javier Diez Canseco, y Ernesto Gamarra	02.08.96	76-96
De irregularidades en la compra de armamento obsoleto lesivo durante el conflicto con el Cenepa	Jorge Del Castillo	06.08.96	96-96
Sobre sobornos de la fábrica italiana Otto Melara en la venta de armas.	Fernando Olivera	23.09.96	159-96
Del tráfico de armas caso Tangentópolis e Italia	Antero Flores Araoz y Lourdes Flores Nano	23.09.96	161-96
Comisiones ilegales de Otto Melara a la Marina de Guerra del Perú	Jorge Del Castillo	24.09.96	164-96
La compra en el 92 de helicópteros usados al Ejército Sandinista.	Fernando Olivera	22.10.96	225-96
Investigación sobre compra de uniformes.	Henry Pease	14.07.97	750-96
Anomalías del Ministerio del Interior por uniformes de la Policía Nacional del Perú.	Henry Pease	08.08.97	35-97
Importaciones de la FAP de 1994 a la fecha.	Ernesto Gamarra	07.10.97	204-97
Comprobando de oficiales de las Fuerzas Armadas.	Javier Diez Canseco	09.10.97	205-97
Adquisición de MIG-29 y Deuda Rusa.	Fernando Olivera	10.06.98	549-97
Deuda Rusa y aviones MIG-29	Fernando Olivera	18.08.98	34-98
La muerte de un soldado por maltratos en SMO	Annel Townsend	02.06.99	548-98
La compra de Material bélico irregular para las Fuerzas Armadas.	Carlos Chipoco	21.09.99	102-99

- De esta forma, actualmente la Comisión de Delitos Económicos y Financieros viene ahondando en las investigaciones a fin de establecer los específicos grados de responsabilidad a fin de denunciar oportunamente los hechos delictivos e infracciones a la Constitución que se hubieren realizado.

VI.5 Participación y responsabilidades del Consejo de Ministros en la dación de Decretos por el Presidente

- El artículo 123 inc. 3 de la Constitución vigente establece que le corresponde la Presidente del Consejo de Ministros: «Refrendar los Decretos Legislativos, los Decretos de Urgencia y los de más Decretos y Resoluciones que señala la Constitución y la Ley». El Art. 125º inc. 2 de la Constitución de 1993 establece entre las atribuciones del Consejo de Ministros : **«Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el Presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley »** .
- De lo consagrado en este inciso se desprende que todo decreto de urgencia, decreto supremo y otras resoluciones deben debatirse y votarse previamente en el Consejo de Ministros. Sólo después de ser aprobado y publicado el Decreto de urgencia entrará en vigencia.
- El artículo 120 de la Constitución de 1993 establece tajantemente que: **« Son nulos los actos del Presidente que carezcan de refrendación ministerial »** . Es decir la

norma constitucional sanciona con nulidad la inobservancia del requisito de la refrendación ministerial. Así también, el Art. 129 de la Constitución de 1993 establece que « **Los Ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan** ». Así también se establece en la segunda parte de este artículo: « **Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente**» .

4. Lo primero que cabría resaltar es que el Consejo de Ministros es, per se, un cuerpo colegiado por lo que, tanto su Presidente como demás miembros comparten una serie de responsabilidades. Se parte del presupuesto de que el Presidente llama a formar parte del ejecutivo no sólo a personas idóneas para ocupar cada cartera, sino a aquellos en los que tiene más confianza. Es precisamente esta relación de confianza la que permite al Presidente nombrar y remover a sus ministros en caso les haya perdido la confianza. Así también, los ministros pueden renunciar y manifestar públicamente sus discordancias con las medidas tomadas por el Ejecutivo, salvando de esta forma su responsabilidad política por los actos del presidente y demás ministros.
5. En el artículo 128 de la Constitución vigente se observan dos niveles de responsabilidad. En primer término la responsabilidad personalísima de cada ministro en atención al desempeño propio de su cargo, es decir, por todo lo que haga (acción) o deje de hacer (omisión) como integrante del Poder Ejecutivo. Ello abarca, como se ha indicado con anterioridad, tres tipos de responsabilidad: Civil, por los perjuicios causado al Estado en razón a los actos arbitrarios e ilegales que refrenden o realicen, penal en razón a los delitos que se deriven de los mismos y política en atención a las posible transgresiones constitucionales en las que pudieran incurrir, correspondiendo al Parlamento convenir la inhabilitación previo juicio político. Este primer nivel de responsabilidad abarca a su vez todos los actos presidenciales que refrenda el Ministro en virtud de que ello importa indubitable conformidad con el acto realizado por el Presidente, alcanzándole todas sus implicancias en cuanto con dicho aval habría contribuido a darle validez al acto presidencial. Siendo así, cuando un ministro refrenda un decreto, lo hace convencido de su necesidad y en tal sentido asume la gama de responsabilidades que de este acto deriven.
6. El segundo nivel de responsabilidad es el de la responsabilidad solidaria de cada ministro por la actuación del Presidente. Si el Presidente incurre en infracción a la Constitución o en diversos delitos a vista y paciencia del Ministro, la sola permanencia en el cargo le acarrea a este responsabilidad solidaria, cuando menos de carácter política. En el caso de que las irregularidades deriven de un acuerdo del Consejo, cabe resaltar que aún cuando el Ministro no empeñe su voto en avalar el acto o dispositivo inconstitucional o legal, no queda exonerado de dicha responsabilidad solidaria de naturaleza política. Sólo la renuncia concomitante a la detección de actos delictivos o irregulares del Presidente o demás miembros del Consejo, lo puede exonerar de responsabilidad política, pudiendo mantenerse la de carácter penal porque su posición de garante le obliga, inclusive, a denunciar las irregularidades detectadas.
7. En tal sentido y como ha sucedido a raíz de los hechos denunciados, si el Ministro aprueba o refrenda un decreto que viola la Constitución o que implica un acto arbitrario y delictivo o da pie a la comisión de una gama de actos ilícitos, es co-responsable con el

Presidente de la República y puede por ello ser denunciado por infracción a la constitución así como por delito de función.

VII. DE LOS DELITOS COMETIDOS

VII.1 DEL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR

1. El delito de asociación ilícita está tipificado en el Art. 317° del Código Penal en los términos siguientes:

«Artículo 317°.- El que forma parte de una agrupación de dos o más personas destinada a cometer delitos será reprimido, por el sólo hecho de ser miembro de la agrupación, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

Cuando la agrupación esté destinada a cometer los delitos de genocidio, contra la seguridad y tranquilidad públicas, contra el Estado y la defensa nacional o contra los Poderes del Estado y el orden constitucional, la pena será no menor de ocho años, de ciento ochenta a trescientos sesenticinco días multa e inhabilitación conforme al artículo 36°, incisos 1, 2 y 4».

2. Como puede apreciarse, este delito se consuma con la mera pertenencia a una agrupación de dos o más personas destinada a cometer delitos, sin importar la materialización de los ilícitos penales proyectados, pues lo que se sanciona es el peligro que significa para la tranquilidad pública la existencia de una agrupación criminal, entendida como aparato organizado con división funcional de roles, en cuya estructura sus integrantes tienen una participación decisiva o simplemente ejecutiva.

El bien jurídico penalmente protegido es, por tanto, la tranquilidad y la paz pública, y el dolo específico que distingue el delito de asociación ilícita de las infracciones penales que dicha agrupación cometa, es, precisamente, el de atentar contra la paz pública resultante del normal funcionamiento de las instituciones y servicios públicos al integrar una asociación destinada a cometer delitos.

3. En tal sentido, los elementos materiales de la infracción son: **a)** En lo que respecta al sujeto activo, se trata de un hecho punible necesariamente plurisubjetivo o pluripersonal, exigiéndose la concurrencia de una base organizativa entre ellos; **b)** Es indispensable la concurrencia de un elemento tendencial, finalista o teleológico, expresado en el propósito colectivo de cometer delitos.

De la exigencia del primer elemento típico, se evidencia que no se castiga la participación específica en un delito, sino la participación en una asociación destinada a cometerlos con independencia de la ejecución o inejecución de los hechos planeados o propuestos. Se trata pues de un caso de adelantamiento de la barrera criminal, concretamente de la sanción de actos preparatorios elevados a la categoría de actos ejecutivos por razones de prevención general.

En definitiva, para que pueda hablarse de asociación criminal es necesario cierto elemento de *permanencia*, así como un mínimo de *cohesión*. Sin embargo, ello no implica equiparar los conceptos de banda, concierto o la mera pluralidad de personas con el de «asociación ilícita». La banda exige al igual la permanencia, pero a diferencia de la simple asociación delictiva parece requerir necesariamente del elemento organizativo, es decir de un sistema jerárquico y de reparto del trabajo, aspectos que no necesariamente deben observarse en la asociación criminal. Distintos son los casos del concierto o pluralidad de personas, en donde se aprecia una asociación eventual de personas, muchas veces desordenada, sin jerarquía ni una clara distribución de roles.

4. Según las indagaciones realizadas por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros del Congreso de la República, por la Procuraduría Ad Hoc para los casos de Montesino y Fujimori, por el Ministerio Público y el Poder Judicial en estas investigaciones, es posible afirmar que la agrupación ilícita dirigida por Vladimiro Montesinos Torres se organizó como un aparato de poder de organización no estatal (criminalidad organizada) que operó como «para-Estado», esto es, integrada a éste, aprovechando el dominio material que detentaba sobre el ámbito público y los «cauces del Derecho» para la común satisfacción de intereses delictivos⁴. Con relación al segundo elemento típico, debe tenerse presente que la organización de Montesinos Torres utilizó la estructura de las FF.AA., PNP, del SIN, como de diferentes organismos públicos como el PJ, el MP, el JNE, el Congreso de la República, etc. para perpetrar diversos delitos, de suerte que el propósito delictivo se manifestó en organizaciones preexistentes.

En tal sentido, el dominio de la organización por parte del Ex Asesor del SIN y del Ex Presidente Fujimori se ejerció en el marco de un aparato de poder formal, esto es, una organización que estuvo estructurada de modo jerárquico-lineal e integrada por un número suficientemente grande de ejecutores intercambiables. Así, cuando una «asociación criminal», más allá de la habitual conexión poco densa en forma de red, sí presente estructuras fijas de organización y un gran número de miembros, formará parte de la «criminalidad organizada» en sentido estricto⁵.

5. Ahora bien, la indebida deposición de recursos públicos era uno de los frentes de esta organización criminal y una de las modalidades a través de las cuales se persiguió y logró tal designio, fue mediante el uso irregular de Decretos Leyes secretos, Decretos de Urgencia secretos, Decretos Supremos secretos y Resoluciones Ministeriales Secretas. Efectivamente, como bien se ha descrito en el apartado II de esta denuncia constitucional, la organización criminal liderada por Montesinos Torres, Fujimori Fujimori, y con la intervención en diversos momentos de los denunciados como Primer Ministro o Ministros, utilizaron fraudulentamente un conjunto de normas secretas con la finalidad de desviar fondos públicos, con diversos argumentos falsos, al sector Defensa, desde donde se ejecutaron actos de disposición directa con fines ilegales o simplemente contratos fraudulentos que acarrearán beneficios a los denunciados.
6. De esta forma, los denunciados, por el sólo hecho de haber formado parte de la organización criminal en referencia son penalmente responsables por el delito de asociación ilícita para delinquir, sin necesidad de demostrarse su participación en el planeamiento o ejecución de los concretos delitos cometidos por la agrupación. Una

⁴ Sobre el concepto de aparato de poder de organización no estatal, *vid.* AMBOS, Kai. «Dominio del hecho por dominio de voluntad en virtud de aparatos organizados de poder. Una valoración crítica y ulteriores aportaciones». *Thémis* N° 37/1998, pp. 190 y ss.

⁵ *Ibid.*, pp. 189-190.

consecuencia inmediata de esta constatación es que los ilícitos materia de esta denuncia no deben observarse como simples hechos independientes o aislados, sino interconectados, relacionados entre sí por derivar del mismo aparato criminal, lo que a su vez conduce a entender que nos hallamos ante delitos continuados en el sentido del Art. 49º del CP, de modo que el plazo de prescripción debe computarse recién desde el «día en que terminó la actividad delictuosa». Conforme se ha expuesto anteriormente, la utilización de normas secretas para atentar contra el erario público fue una práctica utilizada desde 1990 e, inclusive, hasta el año 2000, prácticamente en los estertores del régimen de Alberto Fujimori Fujimori. Consecuentemente, la prescripción de todos los delitos debe computarse recién desde el año 2000, de modo que haya expedita la acción penal respectiva por todos los delitos materia de la presente causa constitucional.

7. Un tema de notoria relevancia práctica es el relativo al carácter subsidiario o complementario del tipo penal de asociación ilícita, esto es, si es admisible el concurso con las infracciones penales perpetradas por la agrupación criminal o, si por el contrario, éstas subsumen al delito de asociación ilícita.

En caso que determinada agrupación criminal cometa delitos contra la administración pública, tráfico de drogas, contra la vida, contra la administración de justicia y, en general, cuando se trate de infracciones penales contra bienes jurídicos distintos a la tranquilidad pública, es necesario castigar por cada afectación para abarcar independientemente el desvalor de cada hecho. En consecuencia, es posible alegar en tales casos un concurso de delitos, el cometido por la organización con la intervención del imputado y el de asociación criminal precisamente.

La relevancia de ello es indiscutible en el presente caso debido a la pluralidad de hechos ilícitos cometidos por los denunciados, de modo que la acción penal a instaurarse en su momento contra los denunciados ante el Poder Judicial, deberá serlo por el delito de asociación ilícita y por todos aquellos en los que tuvieron intervención personal, por acción y omisión como aquí se sostiene.

VII.2 DEL DELITO DE MALVERSACIÓN DE FONDOS

1. El delito de malversación de fondos, como modalidad de delito contra la administración pública, se encuentra tipificado por el Art. 389 del CP, modificado por el Art. único de la Ley Nº 27151 de 7 de julio de 1999, del siguiente modo:

«Artículo 389.- El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Si el dinero o bienes que administra corresponden a programas de apoyo social, de desarrollo o asistenciales y son destinados a una aplicación definitiva diferente, afectando el servicio o la función encomendada, la pena privativa de libertad será no menor de tres años ni mayor de ocho años».

2. Como precisa Rojas Vargas, el delito de malversación de fondos tutela la regularidad y buena marcha de la administración pública, «El objeto específico de la tutela penal es preservar la correcta y funcional aplicación de los fondos públicos, es decir, la organización en la ejecución del gasto y en la utilización y/o empleo del dinero y bienes públicos. En suma, se trata de afirmar el principio de legalidad presupuestal, esto es, la disciplina y racionalidad funcional en el servicio»⁶. Consecuentemente, este delito persigue evitar todo comportamiento orientado a perjudicar una determinada función o servicio público a través de la disminución de las partidas contables o fondos respectivos.
3. El delito mencionado se considera de carácter de especial propio, sólo puede ser cometido por quien es funcionario o servidor público, calidad presente en los denunciados quienes ostentaban cargos de confianza del más alto nivel dentro del Estado, como el de Presidente de la República, Ministros, etc. En cuanto al comportamiento típico, el Art. 389 exige dar una aplicación definitiva diferente a la prevista al dinero o bienes que se administra, comportamiento que en el presente caso se ha configurado de modo diverso. Como puede apreciarse del informe de la Dra. Mejía, muchos de los fondos objeto de los Decretos y Resoluciones secretas provenían directamente de las privatizaciones y estaban expresamente destinados a la pacificación y erradicación de la pobreza. Esta última finalidad de los fondos de la privatización correspondería a la implementación de programas asistenciales y apoyo social, habiéndose desviado tales fondos a fin de asignarlos sin retorno al sector Defensa o al Servicio de Inteligencia Nacional, por lo que se aprecia una aplicación definitiva diferente y no temporal.
4. El tipo de malversación se erige como delito de resultado, es necesario afectar el servicio o la función encomendada, lo que en modo alguno equivale a la destrucción o frustración del servicio o función, bastando la simple afectación o alteración del mismo como consecuencia de los menores recursos producto de la desviación ilegal. En esa línea de ideas, la malversación se consagra como delito de peligro porque basta el riesgo creado para el cumplimiento adecuado de la función o servicio. Tal situación de riesgo se aprecia claramente a raíz de los hechos denunciados, en rigor el desvío de fondos al sector Defensa trajo consigo la afectación de las tareas sociales del Estado en orden a la prestación de diversos servicios a favor de los sectores económicamente deprimidos, tarea para la cual se contó con miles de millones de dólares menos, mermándose con ello la función social del Estado en tiempo de especial crisis en Perú y Latinoamérica, es decir en un momento crucial para la colectividad.
5. En el presente caso se configura además la agravante prevista en el pf. 2 del Art. 389, pues como se ha puesto de relieve, el dinero o bienes desviados correspondían por Ley a programas de apoyo social, de desarrollo o asistenciales, observándose por ello un mayor disvalor del resultado delictuoso.

⁶ ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos contra la administración pública. Lima; Grijley 1999, pp. 286-287.

VII.3 DELITO DE COLUSIÓN ILEGAL

1. Según la modificación a través del Art. 2 de la Ley N° 26713 de 27 de diciembre de 1996, el delito de colusión ilegal se encuentra tipificado por el Art. 384 del CP de la manera siguiente:

«Artículo 384.- El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años».

2. El delito en mención protege igualmente la función pública, concretamente en el ámbito de las negociaciones estatales a fin de cautelar su transparencia y, especialmente, los intereses económicos del Estado, se busca por ello que el funcionario que interviene en las negociaciones lo haga desde la perspectiva del interés público. Al igual que el delito de malversación, estamos aquí ante un delito especial propio por la calidad de funcionario o servidor público de los denunciados.
3. Cabe precisar además que el delito de colusión es de resultado lesivo del bien jurídico erario público pues exige precisamente defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, lo que en buena cuenta implicar acreditar a lo largo de la investigación con pruebas técnicas el monto del perjuicio económico sufrido por el Estado peruano como consecuencia de la suscripción y ejecución de estos contratos fraudulentos.
4. Un aspecto central en la realización del comportamiento delictivo radica en la concertación con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros. En ese sentido, el ilícito de colusión se presenta como un delito de encuentro y de participación necesaria, en la perspectiva de que no bastará la intervención del funcionario sino que hace falta, indispensablemente, que lo haga con la participación de particulares, precisamente aquellos que intervienen en la negociación con el Estado. Tales condiciones se aprecian precisamente en la conducta de los denunciados vinculados al sector Defensa, pues como se ha precisado en los apartados II, III, IV y V de la presente, tras la ilegal desviación de los fondos públicos a dicho sector se han producido múltiples negociaciones en las que se observa la connivencia entre los funcionarios públicos peruanos y proveedores de armamentos, bienes y servicios en materia de defensa, seguridad nacional y seguridad interior, siendo representativos en tal dirección los casos de la adquisición de aviones MIG-29 y S-25, entre otros ya descritos y que obran en el abundante material probatorio y que, inclusive, han sido parcialmente objeto de auditorías e investigaciones a cargo del propio Congreso de la República.
5. Conforme a podido determinarse tras el análisis del proceso de adquisición de aviones Mig-29 y SU-25, existe mérito suficiente para acusar al ex Presidente de la República Alberto Fujimori; a los ex Ministros de Defensa Víctor Malca Villanueva y Tomás Castillo Meza; al ex Presidente del Consejo de Ministros Alberto Pandolfi y al entonces Ministro de Economía Jorge Camet Dikman, razón por la cual varios de ellos ya han sido denunciados ante el Congreso de la República.

6. En efecto, los hechos descritos constituyen una abierta defraudación contra el Estado peruano en concertación con una red de proveedores de armas organizados por el asesor presidencial Vladimiro Montesinos alrededor de las empresas W-21 INTERTHECNIQUE, TREVES INTORA, y sus ramificaciones en Panamá, Suiza y las Bahamas. Lo adquirido no correspondía a las necesidades de la defensa del país ni a las propias directivas de la FAP. Está probado que las naves se adquirieron sin los repuestos necesarios, que hubo comisiones ilícitas, ganancias al margen de la ley y que existen indicios de sobrevaluación detectados. La concertación entre los funcionarios que son objeto de la presente acusación constitucional con los proveedores reunidos en W-21 INTERTHECNIQUE, queda manifiestamente demostrada si se observa que la forma cómo se organizó la compra de los aviones tenía como propósito cubrir la distribución de ganancias ilícitas acordadas desde el inicio de la operación. El proveedor de armas Alberto Venero ha señalado a la Comisión que *« por la compra de los aviones MIG 29 y SU25 A Bielorrusia le habría entregado al señor Montesinos en dinero efectivo repatriado de la cuenta de Treves Intora la suma de doce millones de dólares para que los reparta con otras autoridades no identificadas »*.
7. Está probado que a lo largo de las adquisiciones no ha existido una evaluación de precios de mercado, ciñéndose tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como la FAP a los precios de los proveedores asumidos como referenciales y que tuvieron carácter determinante. La negociación de los precios fue realizada por el entonces Ministro de Economía Jorge Camet y por el Ministro de Defensa Tomás Castillo Meza, quienes han sido denunciados ante el Congreso de la República por tales hechos. La FAP asumió las ofertas de los proveedores como precios referenciales. Deliberadamente las comisiones de la FAP no realizaron comparaciones de precios. Como ya se expresó, no existe referencia documentada respecto a la antigüedad de las naves ni evaluaciones precisas de equipamientos adquiridos. Lo que sí hay son informes posteriores que afirman que ha habido sobrevaloración de precios, comisiones ilícitas, enriquecimientos indebidos. Que los aviones y el armamento que son compró no servían para garantizar la defensa de la nación en caso de un conflicto con el Ecuador.
8. La colusión en perjuicio del Estado, no sólo se produjo en la compra de los MIG29 y SU25 a Bielorrusia. También se perpetró con la adquisición de los 3 MIG29 que se compraron en Rusia. Esta adquisición se ejecutó mediante la aprobación del decreto de urgencia secreto 032-98 suscrito por el Presidente de la República Alberto Fujimori; por el ex Ministro de Defensa César Saucedo Sánchez y por el ex Ministro de Economía Jorge Baca Campodónico, también denunciados ante el Congreso de la República. En consecuencia, existe mérito suficiente para abrir proceso penal contra estos ex Ministros de Estado.
9. No puede soslayarse que para la comisión de este delito de colusión también ha sido necesaria la participación de un gran número de personas, muchas de las cuales no gozan de la prerrogativa constitucional del antejuicio. En tal sentido, la Comisión ha llegado a la conclusión que también deben ser juzgados por este delito, los integrantes de las Comisiones que aprobaron y recomendaron la compra de las aeronaves: a) Los integrantes de la Comisión Presidencial: Mayor FAP Rolando Magni, Coronel FAP Rubén Mimbela Velarde, Coronel FAP Felipe Reyes Morales, Coronel FAP Víctor Perea Zegarra, coronel FAP Fernando Velarde Ramírez, y el Coronel FAP Francisco Doberttin Culqui; b) los integrantes de la Comisión Especial Reservada designada por el Comandante General de la FAP Waldo Richter el 14 de febrero de 1996: Mayor General FAP Carlos Modenesi

Cobian, Coronel FAP Carlos Palacios Rossi, Coronel FAP Néstor Rodríguez Vargas, Coronel FAP Carlos de la Rosa Cabrera y el Comandante Ricardo Vilchez Raa; c) Los integrantes de la Comisión Especial nombrada el 27 de febrero de 1996, encargada de evaluar la propuesta técnica económica recibida por la FAP: los coroneles FAP Oscar Zegarra Chavez y Jorge López Ponce, la misma que también estuvo integrada por algunos oficiales de las dos comisiones anteriormente mencionadas.(Magni, Mimbela, Reyes Morales, Perea Zegarra, Rodríguez Vargas, Velarde Ramírez, Doberttini Culqui); d) Los integrantes de la Comisión Especial Reservada que aprobó la compra de 3 aviones MIG 29 adicionales en Rusia: Coronel FAP Ramón Gamarra Trujillo, Comandante FAP René Alfaro Castellanos, Comandante FAP Jorge Custodio León, y el Mayor FAP Jesús Carrasco Becerra, además del Mayor FAP Rubén Mimbela que formó parte de anteriores comisiones.

10. Todos ellos actuaron bajo las órdenes de Vladimiro Montesinos y de Alberto Fujimori quienes personalmente dirigieron y controlaron el proceso de adquisición y compra de las aeronaves, con la complicidad de ex Ministro de Defensa Víctor Malca, quien aprobó y ejecutó la conformación de la Comisión Presidencial al margen de los procedimientos previamente establecidos por ley.
11. Asimismo, la Comisión considera que es necesario que el Poder Judicial lleve adelante una exhaustiva investigación para determinar la responsabilidad penal de los proveedores de armas organizados a través de las empresas W-21 INTERTHECNIQUE y TREVES INTORA. Sin perjuicio de dejar sentado que a la fecha, la Comisión considera que también hay pruebas suficientes para que el Ministerio Público proceda a entablar denuncia penal contra Moshe Rotshild, Alberto Venero y Luis Duthurburu como cómplices de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en la comisión del delito de colusión.

VII.4 DELITO DE PECULADO

1. Este ilícito, según la modificación a través del Art. único de la Ley N° 26198 de 13 de junio de 1993, se halla regulado del modo siguiente en el Art. 387 del CP:

«Artículo 387.- El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años.

Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos, la pena privativa de la libertad será no menor de cuatro ni mayor de diez años.

Si el agente, por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas. Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de cinco años».

2. A juicio de Rojas Vargas en el peculado estamos ante un delito pluriofensivo, el bien jurídico se desdobra en dos objetos específicos merecedores de protección jurídico penal: «por un lado, el garantizar el principio de no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública y, por otro lado, evitar el abuso de poder –del que se halla facultado- el funcionario o servidor público que quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad»⁷.
3. Este delito también es de naturaleza especial propia, puesto que sólo puede cometerlo quien es funcionario o servidor público, calidad presente en los denunciados como se puso de relieve con anterioridad. Ahora bien, en este caso el funcionario o servidor debe encontrarse vinculado al deber especial de administrar o custodiar por razón de su cargo caudales o efectos, lo que también se aprecia en los hechos denunciados tras la desviación o malversación de caudales públicos hacia el sector defensa. Dicho de otro modo, los actos de peculado denunciados, al igual que los delitos de colusión, se han registrado luego de la comisión del delito de malversación de fondos, como parte de un mismo plan encaminado a enriquecer personalmente a diversos funcionarios del gobierno de 1990 al 2000.
4. Efectivamente, conforme a las investigaciones realizadas, el manejo de los fondos del sector defensa principalmente sirvieron como fuente de financiamiento de diversos actividades no estatales vinculadas a aspectos políticos, como la financiación de campañas, de la prensa chicha, de determinados medios de comunicación, o sencillamente como fuente de financiación personal para los diversos funcionarios militares o político-militares, entre los cuales se pueden encontrar desde el ex-asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos hasta Ministros de Estado o inclusive el propio ex-Presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori, aspectos que deberán se exhaustivamente investigados a raíz de esta denuncia y auditados por la Contraloría General de la República. De esta manera es que se alcanzó el resultado exigido por el tipo de peculado, consistente en apropiarse o utilizar los bienes bajo administración del funcionario.
5. En el presente caso se configura además la agravante prevista en el pf. 2 del Art. 387, pues como se ha puesto de relieve, el dinero o bienes desviados correspondían por Ley a programas de apoyo social, de desarrollo o asistenciales, observándose por ello un mayor disvalor del resultado delictuoso.

VII.5 DELITO DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE

1. El delito de negociación incompatible, modificado por el Art. único de la Ley N° 27074 de 26 de marzo de 1999, se encuentra tipificado de la forma siguiente:

«Artículo 397.- El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años».

⁷ Ibid., p. 249.

2. Este ilícito protege la administración pública de la injerencia indebida de intereses particulares o privados del funcionario o servidor, cuando éste interviene en determinados asuntos en defensa, patrocinio o representación del interés público o estatal. El delito en mención no se realiza mediante actos defraudatorios, ni es necesario que el funcionario o servidor reciba un beneficio económico como consecuencia del hecho criminal, bastando únicamente que se interese en un contrato u operación, es decir que patrocine intereses privados, propios o de terceros, en tal contexto.

4. En el caso materia de la presente denuncia constitucional, los funcionarios que intervinieron en las adquisiciones del Avión Presidencial y de los Aviones Mig 29 y S 25 a Rusia y Bielorrusia, así como los servicios de mantenimiento, han expresado un claro interés en tales operaciones al favorecer a determinados proveedores, incluso a través de dispositivos legales, como bien se ha señalado. Dicho favorecimiento o actuación interesada por parte de los funcionarios denunciados, se ha expresado de múltiples formas, desde la expedición de dispositivos secretos para aligerar los mecanismos de selección y contratación pública del sector defensa, hasta el cobro de posibles comisiones ilegales como se denuncia aquí y deberá investigarse.

VII.6 DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS

1. Este ilícito está tipificado por el Art. 427 del CP en los siguiente términos:

«Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se trata de un documento privado. El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas».

2. El delito de falsedad material protege la fe pública, concretamente la veracidad de los documentos públicos y privados dentro del tráfico jurídico, en la medida en que una garantía del Estado de Derecho es la seguridad jurídica, la que se manifiesta en la transparencia y confiabilidad del contenido de los documentos. Así entendida, la relación estrecha entre la fe pública y las bases del sistema jurídico en un Estado de Derecho, determina que el delito de falsificación sea de carácter común, es decir que puede ser realizado por cualquier persona, en el sentido de que todos estamos obligados a velar y garantizar la veracidad documental.

3. En esa línea de pensamiento, los denunciados han violado gravemente, al más alto nivel, la fe pública, concretamente la veracidad del contenido de los diferentes Decretos Leyes secretos, Decretos de Urgencia secretos, Decretos Supremos secretos y Resoluciones Ministeriales secretas. La afectación de estos instrumentos normativos

merece el máximo reproche conforme al texto del Art. 427 del CP por tratarse de documentos públicos elaborados en este caso para regir dentro del sistema jurídico nacional.

4. El tipo penal en referencia exige para su realización que se haga en todo o en parte un documento falso, lo que ha sucedido en los hechos denunciados. Efectivamente, como revela especialmente el informe de la Dra. Mejía sobre las normas secretas en materia castrense durante el periodo 1990-2000, la justificación de muchas de estas normas era absolutamente fraudulenta, en primer término porque para darles el tratamiento de secreto se recurrió al argumento de la seguridad nacional o exterior, pero no siempre para tratar temas de tal naturaleza sino en muchos casos para encubrir o enmascarar típicos actos de malversación de fondos o la preparación de actos posteriores de apropiación de recursos y caudales públicos, así como colusiones ilegales. La falsedad sin embargo era mayor porque en varias ocasiones se establecía en la norma que se contaba con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros cuando en realidad no era así, lo que generaba un mayor estado de indefensión, en tanto para la colectividad la decisión de gasto o traslado de recursos al sector Defensa se había adoptado sometiendo a los controles propios de dicho Consejo de Ministros y no como parte de acuerdos personales al margen de la legalidad, el control y la transparencia.
5. Pues bien, el ilícito en referencia es considerado como un delito de idoneidad, en el sentido de que es necesario apreciar la posibilidad de perjuicio a raíz de su utilización, lo que concuerda con la exigencia del Art. 427 del CP en el sentido de que el documento debe servir para probar un hecho o para ostentar un derecho u obligación. Estos elementos normativos del tipo se encuentran presentes en los hechos denunciados, tanto porque las citadas normas fueron efectivamente utilizadas para la malversación de fondos, como porque de las mismas fluye en apariencia la facultad de realizar tales desviaciones de recursos públicos.

VII.7 DEL DELITO DE SUPRESIÓN, DESTRUCCIÓN U OCULTAMIENTO DE DOCUMENTOS

1. Este delito se halla tipificado por el Art. 430 del CP como se precisa seguidamente:

«Artículo 430.- El que suprime, destruye u oculta un documento, en todo o en parte de modo que pueda resultar perjuicio para otro, será reprimido con la pena señalada en los artículos 427º y 428º, según sea el caso».

2. El ilícito antes descrito protege igualmente la fe pública y su comisión por parte de los denunciados ha operado mediante la desaparición de los diferentes documentos públicos que sustentan la aprobación y ejecución de las disposiciones de diversos Decretos Leyes secretos, Decretos de Urgencia Secretos, Decretos Supremos secretos y Resoluciones Ministeriales secretas. Así lo pone de relieve sobre todo el informe de la Dra. Mejía.

VII.8 DEL DELITO DE OMISIÓN DE DENUNCIA

1. El delito de omisión de denuncia está tipificado por el Art. 407 del CP en los siguientes términos:

«Artículo 407.- El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito, cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. Si el hecho punible no denunciado tiene señalado en la ley pena privativa de libertad superior a cinco años, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años».

2. Como precisa Frisancho Aparicio, el bien jurídico tutelado en estos delitos es el normal y eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, castigándose aquellos actos que lo impiden o retardan, por efecto de la omisión dolosa de quienes tienen la obligación – por su profesión o empleo- de comunicar a la autoridad las noticias que tengan acerca de la comisión de un delito⁸. De esta forma, nos encontramos ante un delito especial propio, en el sentido de que sólo puede ser cometido por quien tiene el deber jurídico de denunciar el hecho delictivo ante la autoridad competente.
3. En los hechos materia de esta denuncia constitucional se aprecian múltiples comportamientos de omisión de denuncia por parte de altas autoridades del Estado, como Ministros Estados de los sectores de Economía y Defensa principalmente, al no haberse ordenado las investigaciones respectivas a fin de desarticular la red de corrupción que operaba a través de la modalidad de normas secretas. La responsabilidad penal se extiende en estos casos a varios de los miembros de los respectivos Consejos de Ministros, quienes con su aquiescencia u omisión permitieron la comisión de estos graves hechos delictivos.

VII.9 DEL DELITO DE TRAICIÓN A LA PATRIA

1. Consideramos que existe mérito suficiente para investigar la posible comisión del delito de traición a la patria, en la modalidad de favorecimiento bélico a Estado extranjero, que tipifica el artículo 332º del Código Penal, en los siguientes términos:

«Artículo 332.- El que entrega a un Estado extranjero bienes destinados a la defensa nacional o le ***favorece mediante servicios o socorros que pueda debilitarla***, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años.

Si el ***agente actúa por lucro*** o por cualquier otro móvil innoble la pena será no menor de veinte años».

2. Este delito habría sido cometido por el ex Asesor del Servicio de Inteligencia Nacional Vladimiro Montesinos Torres, conjuntamente con el ex Presidente de la República Alberto Fujimori y los Ministros de Defensa Víctor Malca Villanueva (no protegido por el privilegio de la acusación constitucional a la fecha), Tomás Castillo Meza, César Saucedo

⁸ FRISANCHO APARICIO, Manuel. Delitos contra la administración de justicia. Lima; Jurista Editores 2000, p. 80.

Sánchez y Julio Salazar Monroe, el ex Presidente del Consejo de Ministros Alberto Pandolfi y los ex Ministros de Economía Jorge Camet Dikman y Jorge Baca Campodónico, contra quienes el pasado 26 de septiembre de 2001 se ha formulado la respectiva denuncia constitucional ante el Congreso de la República.

3. Está probado que el ex Presidente Alberto Fujimori con la participación y/o aquiescencia de los ex ministros de Estado mencionados, y con la directa intervención de Montesinos Torres, organizó y dirigió personalmente el proceso adquisición de las aeronaves a Bielorrusia con violación de los procedimientos legales previamente establecidos. Con intención premeditada y para obtener una ganancia ilícita, en el contrato de compra y en la adquisición específica de los componentes de la adquisición, se contravinieron abiertamente y en perjuicio del país los requerimientos técnicos, operativos y logísticos acordados por la FAP para potenciar la capacidad operativa con un sistema integral de armas. El armamento comprado no se encontraba en condiciones de salvaguardar la soberanía e integridad del territorio nacional.
4. Es trascendental tomar en consideración que según el Art. 111º del Decreto Legislativo Nº 743, Ley del Sistema de Defensa Nacional, de 08 de noviembre de 1991, el Presidente de la República preside el Sistema de Defensa Nacional, y el más alto órgano de decisión de este Sistema es el Consejo de Defensa Nacional, responsable de la conducción de la defensa nacional. Esta responsabilidad fue ratificada por la Constitución Política de 1993, en el Art. 164º. La Carta Magna precisa también el Art. 167º que el Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerza Armadas y de la Policía Nacional.
5. Según el Art. 16 del D. Leg. Nº 743, el Consejo de Defensa Nacional es presidido por el Presidente de la República, e integrado en calidad de miembros natos por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Economía y Finanzas, el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y el Jefe de la Secretaría de Defensa Nacional. Es en este nivel, del que formaban parte todos los denunciados, donde se evaluaron y decidieron los planes para la defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional en el caso del conflicto con el Ecuador.
6. Siendo pues responsables de la conducción de nuestra defensa, los denunciados tenían la imperiosa obligación de aplicar los escasos recursos públicos del sector defensa para elevar la capacidad operativa de las fuerzas armadas a fin de hacer frente a la situación de guerra no declarada con el Ecuador. Al disponer la realización de operaciones dolosas en la adquisición de armamento, de las cuales comprobadamente se han extraído comisiones ilícitas para enriquecerse, los denunciados no sólo estaban usando información privilegiada para concertar con los proveedores, sino, y principalmente estaban derivando hacia su propio provecho personal, recursos destinados a las fuerzas armadas, con lo cual estaban debilitando estratégicamente la capacidad operativa de nuestras defensas, en pleno conflicto fronterizo.
7. De este modo, ***se atentó contra la defensa de la nación en medio de una situación de conflicto armado no declarado***, ilícito penal que se encuentra plenamente tipificado en el artículo 332º del Código Penal. Dicho de otro modo, los denunciados durante el conflicto con el Ecuador, a raíz de la malversación de fondos, colusión ilegal y peculado a través de operaciones de compra de armamento que, en tal coyuntura de conflicto, pusieron a la Fuerzas Armadas nacionales en una situación de

disminución bélica y, por ende, en peligro la seguridad nacional. Es más, en el presente caso Montesinos Torres y los altos funcionarios denunciados ante el Congreso de la República, actuaron con una finalidad lucrativa, la obtención de comisiones ilegales para sí mismos o para terceros, lo que hace aplicable la agravante prevista en el párrafo 2º del Art. 332 del Código Penal.

8. Debe tenerse presente que la responsabilidad penal de quienes al momento de los hechos ostentaban la condición militar, es decir los denunciados Tomás Castillo Meza, César Saucedo Sánchez y Julio Salazar Monroe, tiene asidero a su vez en el Art. 78º núm. 27 del Código de Justicia Militar, Decreto Ley Nº 23214 de 26 de julio de 1980, según el cual, comete delito de traición a la patria quien atenta «deliberadamente, de cualquier manera, contra la integridad de la Nación en tiempo de paz, **o contra su defensa en tiempo de guerra**». Precisamente, la situación de conflicto o guerra no declarada con el Ecuador, se erige como contexto en el cual los citados funcionarios denunciados ante el Congreso, conjuntamente con Montesinos Torres, atentaron contra la defensa nacional mediante la adquisición de armamento inidoneo para enfrentar las necesidades defensivas del Perú.
9. Efectivamente, Informes del Ministro de Defensa y de la propia FAP concluyen que lo adquirido a través de los contratos con Bielorrusia no correspondía a las necesidades de la defensa nacional ni a las propias directivas de la FAP. En efecto, la Junta Especial de Investigación determinó que la Comisión que presidió el Mayor FAP Rolando Magni estableció en forma equivocada que el MIG29 poseía un radio de acción de mil quinientos kilómetros sin tanques externos y dos mil novecientos kilómetros con tanques. Sin embargo, la Junta Especial de Investigación ha determinado que los MIG29 adquiridos por la FAP – en una misión clásica de interceptación, entre cinco mil a siete mil metros de altura y tres minutos de combate – sólo tiene un radio de acción de 340 y 395 kilómetros respectivamente. En caso de que quiera usarse para una misión de ataque aire-tierra, el radio de acción en la mejor de las posibilidades estará limitado a 300 kilómetros de promedio, portando armamento convencional.
10. **Los niveles de operatividad de las aeronaves en pleno conflicto eran insuficientes para las condiciones en la que estaba el país al momento de adquirirlas.** Los MIG 29, en el año 1997, tenían un 66.6% de operatividad y en 1998 un 55.4% de operatividad. Mientras que los Sukhoi 25 tenían, en 1997, un 46.6% de operatividad y en 1998 un 55.4%. Con el Service contratado en 1998, es que recién se adquieren niveles superiores de operatividad a partir de 1999, cuando ya estaba suscrito el Acuerdo de Paz con el Ecuador. Es así que los MIG 29 alcanzaron en 1999, el 94% de operatividad y el año 2000 el 75% de operatividad. Los SU 25, por su parte, alcanzaron en 1999, el 65% de operatividad y en el año 2000, el 69%. Así lo señala el Comandante de Material FAP en el Informe que cursa el 31 de Enero del 2001, al Comandante General de la FAP. Es decir que en pleno conflicto armado la defensa de la nación sufrió un grave atentado, por cuanto el armamento que se compró no cubrió las necesidades del Perú para enfrentar con éxito una guerra generalizada. De haberse producido, el Perú habría ingresado al conflicto sin un sistema integral de defensa aérea adecuado para salvaguardar la integridad de su territorio.
11. Son responsables de este deliberado atentado contra la defensa de la Nación, principalmente el ex Presidente de la República Alberto Fujimori y los Ministros de Estado que, en connivencia con Montesinos Torres, suscribieron los decretos de urgencia 028-96 y 075-96, en virtud de los cuales se aprobaron la compra de los aviones: Jorge

Camet Dickman, Tomás Castillo Meza y Alberto Pandolfi. El artículo 128 de la Constitución Política establece que «*Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente*». Y es al Poder Judicial a quien le corresponde determinar el grado de participación y responsabilidad de cada uno de los ministros implicados en la comisión del hecho delictuoso que es materia de la presente acusación constitucional.

12. Como se trata de un delito en cuya realización ha sido necesaria la participación de un gran número de personas, muchas de las cuales no gozan de la prerrogativa constitucional del antejudio, la Comisión ha llegado a la conclusión que también podrían ser autores del delito de traición a la patria, los integrantes de las Comisiones que aprobaron y recomendaron la compra de estos armamentos: **a)** Los integrantes de la Comisión Presidencial: Mayor FAP **Rolando Magni**, Coronel FAP **Rubén Mimbela Velarde**, Coronel FAP **Felipe Reyes Morales**, Coronel FAP **Víctor Perea Zegarra**, coronel FAP **Fernando Velarde Ramírez**, y el Coronel FAP **Francisco Doberttin Culqui**; **b)** los integrantes de la Comisión Especial Reservada designada por el Comandante General de la FAP Waldo Richter el 14 de febrero de 1996: Mayor General FAP **Carlos Modenesi Cobian**, Coronel FAP **Carlos Palacios Rossi**, Coronel FAP **Néstor Rodríguez Vargas**, Coronel FAP **Carlos de la Rosa Cabrera** y el Comandante **Ricardo Vilchez Raa**; **c)** Los integrantes de la Comisión Especial nombrada el 27 de febrero de 1996, encargada de evaluar la propuesta técnica económica recibida por la FAP: los coroneles FAP **Oscar Zegarra Chavez** y **Jorge López Ponce**, la misma que también estuvo integrada por algunos oficiales de las dos comisiones anteriormente mencionadas. (Magni, Mimbela, Reyes Morales, Perea Zegarra, Rodríguez Vargas, Velarde Ramírez, Doberttin Culqui); **d)** Los integrantes de la Comisión Especial Reservada que aprobó la compra de 3 aviones MIG 29 adicionales en Rusia: Coronel FAP **Ramón Gamarra Trujillo**, Comandante FAP **René Alfaro Castellanos**, Comandante FAP **Jorge Custodio León**, y el Mayor FAP **Jesús Carrasco Becerra**, además del Mayor FAP Rubén Mimbela que formó parte de anteriores comisiones.
13. Todos ellos actuaron bajo las órdenes de Vladimiro Montesinos y de Alberto Fujimori quienes personalmente dirigieron y controlaron el proceso de adquisición y compra de las aeronaves.
14. Asimismo, la Comisión considera que es necesario que el Poder Judicial lleve adelante una exhaustiva investigación para determinar la responsabilidad penal de los proveedores de armas organizados a través de las empresas W-21 INTERTHECNIQUE y TREVES INTORA. Sin perjuicio de dejar sentado que a la fecha, la Comisión considera que hay pruebas suficientes para que el Ministerio Público proceda a entablar denuncia penal contra Moshe Rotshild, Alberto Venero y Luis Duthurburu como cómplices de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en la comisión de los delitos que son materia de la presente acusación.

VII.10 DE LA COMISIÓN DE ESTOS ILÍCITOS COMO DELITOS CONTINUADOS

1. El delito continuado, conforme a la modificación por el Art. único de la Ley Nº 26683 de 11 de noviembre de 1996, se halla regulado con carácter general en el Art. 49 del CP del modo siguiente:

«Artículo 49.- Cuando varias violaciones de la misma ley penal o una de igual o semejante naturaleza hubieran sido cometidas en el momento de la acción o en momentos diversos, con actos ejecutivos de la misma resolución criminal, serán considerados como un sólo delito continuado y se sancionarán con la pena correspondiente al más grave. Si con dichas violaciones, el agente hubiera perjudicado a una pluralidad de personas, la pena será aumentada en un tercio de la máxima prevista para el delito más grave.

La aplicación de las anteriores disposiciones quedará excluida cuando resulten afectados bienes jurídicos de naturaleza eminentemente personal pertenecientes a sujetos distintos».

2. Como puede apreciarse, el delito continuado exige dos condiciones, por un lado el elemento objetivo consistente en la violación múltiple de la misma ley penal o de semejante naturaleza, y el elemento subjetivo que se concreta en la resolución criminal única. De esta manera, conforme a los hechos descritos y a las investigaciones realizadas, la utilización ilegal de normas secretas para desviar recursos a sectores vinculados a la defensa y a partir de ello la apropiación o sustracción ilegal de tales recursos para fines diversos, es una práctica que se registra continuamente durante todo el Gobierno de 1990 al 2000. Asimismo, si se parte del hecho de que los autores de tales delitos conformaron una asociación criminal para delinquir, todos los hechos delictivos forman parte de una misma resolución criminal, aunque en la ejecución hayan participado fungiblemente diversas personas a lo largo de la década pasada.
3. Desde esta perspectiva, es posible sostener que los delitos antes descritos deben ser entendidos como delitos continuados, de allí que el plazo de prescripción debe computarse recién desde el «día en que terminó la actividad delictuosa». Conforme se ha expuesto anteriormente, la utilización de normas secretas para atentar contra el erario público fue una práctica utilizada desde 1990 e, inclusive, hasta el año 2000, por lo que la prescripción de los delitos continuados denunciados debe contarse desde el año 2000.

VII.11 DEL CONCURSO DE DELITOS

1. El Art. 50 del CP regula el concurso real de delitos del modo siguiente:

«Artículo 50.- Cuando concurren varios hechos punibles que deben considerarse como otros tantos delitos independientes, se impondrá la pena del delito más grave, debiendo el Juez tener en cuenta los otros, de conformidad con el artículo 48º».

2. Los delitos denunciados configuran delitos continuados (malversación continuada, peculado continuado, etc.), éstos se han ejecutado en una relación de concurso real, al existir, como exige la doctrina penal, pluralidad de acciones y resultados, así como pluralidad de normas que abarcan independientemente tales ilícitos.

VII.12 DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS PARTICULARES EN LOS DELITOS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DENUNCIADOS

1. La noción de funcionario público adquiere relevancia en los "delitos contra la administración pública" desde que nuestra legislación diferencia entre tipos penales cometidos por "particulares" y delitos cometidos por "funcionarios públicos". En este último caso se trata de delitos especiales, en los que se exige una cualidad en el sujeto activo para que pueda ser considerado como "autor" del delito. De inicio, debe diferenciarse la noción penal de funcionario público del concepto administrativo o laboral. Así, para efectos penales son funcionarios públicos todas las personas incurso en algún supuesto del Art. 425° CP⁹. Al respecto, el inciso 3) de este precepto permite una asimilación extensiva del concepto de funcionario público, así como el numeral 6) permite extender esta noción siempre que se traten casos previstos en normas con rango legal.

Como puede observarse del contenido del pf. 2 del Art. I de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), se asume una concepción material de funcionario o servidor público, en el sentido de ser suficiente la sola selección, designación o elección para desempeñar actividades o funciones a nombre del Estado o al servicio del Estado, a diferencia de una postura formal que exige por ejemplo la juramentación y efectiva posesión del cargo. La CICC adopta pues una noción material del bien jurídico penalmente protegido en los delitos de corrupción, la cual comparte en el Derecho comparado [por ejemplo el Código Penal alemán (§ 11.I.2.c StGB)], sobre la base de entender que el funcionario queda vinculado a un conjunto de deberes especiales de imparcialidad o fidelidad, aún antes de ejercer la función que le corresponde.

En esa perspectiva, es interesante la propuesta del informe titulado «Adecuación de la legislación penal peruana a la convención Interamericana contra la Corrupción» de Villavicencio Terreros, de ampliar el contenido del Art. 425° núm. 1 del CP a fin de expresar esta concepción. No obstante, consideramos que aún es importante evaluar si *de lege lata*, actualmente, es posible adoptar esta concepción material por el sólo imperio de la CICC, sin necesidad de una reforma legislativa. Esta pretensión puede quizás ampararse sobre la base de cuatro argumentos: **i)** El concepto de funcionario o servidor público es un elemento normativo de los tipos de corrupción, de allí que su delimitación deba realizarse conforme a las normas pertinentes del ordenamiento jurídico; **ii)** La CICC, en tanto ha sido ratificada por el Estado peruano, constituye en virtud del Art. 55° de la Constitución una norma de Derecho interno que ostenta, al

⁹ "Art. 425°.- Se consideran funcionarios o servidores públicos: 1. Los que están comprendidos en la carrera administrativa. 2. Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluyendo si emanan de elección popular. 3. Todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos. 4. Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. 5. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 6. Los demás indicados por la Constitución Política y la ley.

menos, rango de ley como se deduce del Art. 200 núm. 4 de la Carta Magna; **iii)** La fuerza normativa de la CICC la constituye en una fuente de obligatoria observancia en la delimitación del concepto de funcionario o servidor público, más aún porque el depósito de la ratificación en la OEA operó el 4 de junio de 1997, es decir con posterioridad a la Ley N° 26713 de 27 de diciembre de 1996 que reformó los alcances del núm. 3 del Art. 425° del CP; **iv)** Cabe expresar en todo caso que esta línea de interpretación es compatible con el principio de reserva absoluta de ley penal, no se trata de la aplicación inmediata de una cláusula incriminadora prevista en el ordenamiento internacional, sino de la concepción de un elemento técnico normativo conforme a las fuentes internacionales de obligatoria observancia en Perú.

2. En el terreno de la participación delictiva en delitos de corrupción de funcionarios, la jurisprudencia nacional se ha planteado dos posiciones importantes respecto a la intervención de sujetos carentes de la cualidad especial exigida para el autor; a saber, **i)** La de derivar la sanción del partícipe al correlativo delito común en caso de delitos especiales impropios (delitos especiales reconducibles a delitos comunes), y aceptar la impunidad en los delitos especiales propios en virtud de la cláusula de incomunicabilidad del Art. 26° del CP; y **ii)** La de admitir la sanción del partícipe incluso en el caso de delitos especiales propios, bajo el entendimiento de que el principio de accesoriedad limitada implica extender a dicho partícipe el injusto del autor, a la par que se reconoce la incomunicabilidad prevista en el art. 26° del CP únicamente frente a las circunstancias modificativas de responsabilidad y no ante las que fundamentan el injusto.

Con ocasión de las investigaciones judiciales instauradas contra la red criminal liderada por Vladimiro Montesinos Torres, la jurisprudencia se ha decantado acertadamente por la segunda posición, entiendo que la calidad de funcionario público es transmisible a particulares en virtud del principio de **accesoriedad limitada**, según el cual las condiciones personales del autor (funcionario público) vinculadas al injusto (hecho típicamente antijurídico), sí se transmiten a los partícipes.

La aplicación del principio de accesoriedad limitada tiene plena vigencia y aplicación en el Código penal nacional, pues la incomunicabilidad de las circunstancias de participación -previstas en el Art. 26° del CP- se circunscribe exclusivamente a aquellas cualidades que afectan la culpabilidad y punibilidad de los intervinientes en el evento delictivo, mas no a aquellas referidas al injusto. Esta posición tiene refrendo en la doctrina nacional. Así, **Hurtado Pozo** al comentar el principio de **incomunicabilidad de las circunstancias**, regulado en el Art. 104° del CP derogado -que tiene las mismas bases jurídicas que el Art. 26° del CP vigente-, afirma que: «En nuestro derecho debemos, como lo hemos dicho anteriormente, admitir la "accesoriedad limitada"», pues la incomunicabilidad de las circunstancias «[...] no comprende aquellas que fundamentan la tipicidad o antijuricidad de la conducta delictuosa. En los delitos especiales propios en que se exige que el autor tenga una calidad personal particular, no significa que el cómplice o instigador no pueda ser reprimido conforme a la disposición que prevé tal infracción»¹⁰.

En el mismo sentido, **Villavicencio Terreros**, al comentar el principio de incomunicabilidad de las circunstancias del Art. 26° del CP vigente, admite la aplicación del principio de accesoriedad limitada, en cuya virtud sólo son incomunicables aquellas cualidades personales referidas a la culpabilidad y a la punibilidad. Así, «En todo caso, la

¹⁰ HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal. Parte General. 2ª ed. Eddili, Lima, 1987, pp. 560-561.

regla del artículo 26° del Código Penal no se refiere a las características personales referidas al hecho o materiales. Dichas características de lo injusto referentes al hecho indican en detalle el contenido material del injusto del hecho»¹¹.

A esta interpretación abunda el principio de unidad del título de la imputación, según el cual todos los participantes del evento delictivo -autores y partícipes- deben ser responsabilizados bajo el mismo *nomen iuris* delictivo, esto es, por la misma infracción.

3. De esta manera, son también penalmente responsables los particulares que hayan tenido intervención a título de cómplices o instigadores de los delitos especiales denunciados, esto es los delitos de malversación de fondos, peculado, omisión de denuncia y colusión ilegal.

POR TANTO:

A Ud. Sra. Fiscal pedimos: Admitir a trámite la presente denuncia, realizar la investigación preliminar que considere necesaria y, en el más breve plazo, formalizar la denuncia respectiva ante el Poder Judicial.

PRIMER OTROSI DIGO: Adjuntamos las siguientes pruebas:

1. Copia de los decretos de urgencia Y supremos secretos expedidos entre el 28 de julio de 1990 y noviembre del 2000. (ANEXO 1 Fs. 97 a 118).
2. Copia de las actas del Consejo de Ministros referidas a las sesiones en las que se aprobaron los DU 09-95, 020-95, 023-95, 046-95, 01-96 y 020-96, únicos casos en los que los que el Consejo se reunió para la expedición de DUs con carácter de secreto. (ANEXO 2 Fs. 119 a 149)
3. Copia de los tres tomos de conclusiones del informe elaborado por Beatriz Mejía por encargo del MEF respecto a los decretos de urgencia y supremos secretos expedidos en la pasada década así como de sus anexos pertinentes. ANEXO 3 Fs. 150-497.
4. Copia de las declaraciones de Beatriz Mejía ante la comisión Investigadora de los Delitos Económicos 1990-2001 referidas a la investigación sobre las normas secretas que le encargara el MEF. ANEXO 4 -Fs. 499-543-
5. Transcripción de la presentación de fecha 15 de marzo del 2001 ante la Comisión presidida por Pedro Morales Mansilla, del Sr. Ministro de Defensa, Gral. (r) Walter Ledesma Rebaza y del Comandante General de la FAP, Gral. del Aire y Pablo Carbone. ANEXO 5 -Fs. 544-651.
6. Transcripciones de las declaraciones de las personas convocadas ante la Comisión presidida por Pedro Morales Mansilla: ANEXO 6 -Fs. 652-1121.
 - Luis Alberto Venero Garrido,
 - Jorge Camet Dickman,
 - Jorge Peschiera Cassinelli,
 - Nicolás de Bari Hermoza Ríos,

¹¹ VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Código Penal. 2ª ed. Grijley, Lima, 1997, pp. 161-162.

- Tomás Castillo Meza,
 - Carlos Bergamino Cruz,
 - César Saucedo Sánchez,
 - Oscar Benavides Morales,
 - Jorge Raggio Guerra,
 - Víctor Caso Lay,
 - Víctor Santander Zavaleta,
 - Jorge Whittembury Rebaza,
 - Alfredo Jalilie Awapara,
 - Elesván Bello Vásquez,
 - Juan Valencia Rosas.
7. Copia del informe del mayor General Cesar Gallo Lale de fecha 3 de enero del 2001 a la Inspectoría General de la FAP. *ANEXO 7 Fs. 1122-1193.*

8. Copia de los Informes N° 01-2001 y 015-2001-CG/B370 expedidos por la Contraloría General de la República referido a las acciones de control previo realizadas en los procesos de adquisición de bienes y servicios clasificados como "secreto militar" *ANEXO 8 Fs. 1194-1339.*

SOBRE LOS MIG-29 Y SU -25 BIELORRUSOS

9. Copia de la ordenanza FAP 70-2 de fecha 07 de junio de 1990. *ANEXO 9 Fs. 1340-1350.*
10. Transcripción de las declaraciones rendidas por el Coronel FAP (retiro) Luis Spicer Whitembury rendidas ante la Comisión Presidida por el Congresista Pedro Morales Mansilla de fecha 7 de marzo del 2001. *ANEXO 10 Fs. 1351-1373*
11. Transcripción de las declaraciones rendidas por el General FAP (retiro) Rolando Magni Flores rendidas ante la Comisión Presidida por el Congresista Pedro Morales Mansilla de fecha 7 de marzo del 2001. *ANEXO 11 Fs. 1374-1427.*
12. Transcripción de las declaraciones rendidas por el Cmdte. EP (r) Jorge Whittembury Rebaza rendidas ante la Comisión Presidida por el Congresista Pedro Morales Mansilla, el 15 de marzo del 2001. *ANEXO 12 Fs. 1428-1445.*
14. Transcripción del General FAP (r) Enrique Astete Baca rendidas ante la Comisión Presidida por el Congresista Pedro Morales Mansilla, el 7 de marzo del 2001. *ANEXO 14 Fs. 1465-1488*
13. Transcripción de las declaraciones rendidas por el Gral. Richter Cruz rendidas ante la Comisión Presidida por el Congresista Pedro Morales Mansilla, el 7 de marzo del 2001. *ANEXO 13 Fs. 1446-1464*
15. Copia de las respuestas dadas por el Mayor General FAP Jorge Kisic Wagner al cuestionario que le hiciera llegar la Comisión Presidida por el Congresista Pedro Morales Mansilla, en relación a las interrogantes no absueltas por los comandos de los grupos aéreos N° 6 y N° 11. *ANEXO 15 Fs. 1489-1492.*
16. Copia de las respuestas dadas por el Coronel FAP Luis Muller Mayer al cuestionario que le hiciera llegar la Comisión Presidida por el Congresista Pedro Morales Mansilla,

- en relación a la visita de inspección de dicha comisión al grupo aéreo N° 6 en Chiclayo. ANEXO 16 F's. 1493 - 1512.
17. Copia de las respuestas dadas por el Coronel FAP Oscar Revilla Almansa al cuestionario dirigido al grupo aéreo N° 11 que le hiciera llegar la Comisión Presidida por el Congresista Pedro Morales Mansilla. ANEXO 17 F's. 1513 - 1521.
 18. Copia de las respuestas dadas por el Comandante de Material Jorge del Carpio Rivera respecto a las preguntas formuladas por la Comisión Presidida por el Congresista Pedro Morales Mansilla que no fueron absueltas por el comandante del grupo aéreo N° 11, relacionadas al avión SU-25. ANEXO 18 F's. 1522 - 1531
 19. Copia de la respuesta al Presidente de "Ukrresources", Anatoly F. Volkovsky, entregada por intermedio de la Compañía LINCA SA el 9 de junio de 1995 al Comandante General FAP Enrique Astete Baca. ANEXO 19 F's. 1532.
 20. Copia de la respuesta a la comunicación N° II-70-DIMA-0222, del 9 de junio, enviada por el Presidente de Ukerresources al Comandante General FAP Enrique Astete Baca, señalando que a sus designados, Coronel FAP Luis Spicer Whittembury y el General FAP Javier Pasco Valladares, se les brindaría todo tipo de facilidades para que puedan observar todo el material que desearan en las bases militares ucranianas. ANEXO 20 F's. 1533 - 1535.
 21. Copia del Protocolo de Intención de fecha 26 de junio de 1995 suscrito en Representación del Perú por el General FAP Pasco Valladares (sin autorización para ello), y por el Presidente de LINCA, Capitán FAP ® Víctor Santander, y en representación de Ucrania por el Vice Ministro de Defensa de Ucrania y el Mayor General de dicho Ministerio. Este Protocolo de Intención no indica precios. ANEXO 21 F's. 1536 - 1543.
 22. Copia del Informe Técnico operativo I-70-SDMA- N 002 elaborado por el Coronel FAP Luis Spicer Whittembury referido a la misión cumplida durante el viaje a Ucrania. Ax. 22 F's. 1544 - 1549.
 23. Copia de la Hoja de Recomendación COFA-0027 de fecha 20 de julio de 1995 elaborada por el Comandante General de la FAP Enrique Astete y dirigida al ex - Presidente Alberto Fujimori, en la que plantea la necesidad de adquirir equipo para la Fuerza Aérea. ANEXO 23 F's. 1551 - 1555.
 24. Copia del Memorándum s/n dirigido al Ministro de Defensa Víctor Malca Villanueva, de fecha 21 de agosto de 1995, dictado por el entonces Presidente Alberto Fujimori, nombrando una Comisión encargada de estudiar los requerimientos referentes al sistema integral de armas para satisfacer las necesidades técnicas y operativas de la Fuerza Aérea. Esta Comisión designada estuvo formada por el Mayor General Rolando Magni Flores, el Sub Director de Inteligencia Coronel FAP Rubén Mimbela y 4 coroneles de la FAP (Felipe Reyes Morales, Víctor Perea Zegarra, Fernando Velarde Ramírez y Francisco Dobertin Culqui). ANEXO 24 F's. 1559.
 25. Copia del memorando N° 025-SGMD-A de fecha 25 de agosto de 1995 mediante el cual el ministro de defensa Víctor Malca Villanueva informa nombramiento de comisión. Además se incluye, copia del memo I-355-COFA-PE-N° 308 por el que el comandante Gral. De la FAP Enrique Astete Baca comunica a los designados por el

Presidente vía memo N° 025 SGMD-A su deber de conformar la Comisión Especial Encargada de estudiar el incremento de la capacidad operativa de la FAP. *ANEXO 25 Fs. 1560-1561.*

26. Copia de la Resolución Suprema N° 460, de fecha 6 de septiembre de 1995 por la cual la Comisión Especial Reservada es autorizada a viajar a Ucrania y a Rusia. *Ax. Fs. 1562-1563.*
27. Copia del oficio I-70-CRETO-PE-N°001, del 02 de octubre de 1995, por el que la Comisión designada por el ex Presidente Alberto Fujimori y ampliada por el Ministro de Defensa Víctor Malca, hace de conocimiento del Comandante General de la FAP, los aspectos de carácter doctrinario, técnicos, operativos y logísticos, informando sobre los requerimientos para un sistema integral de armas en función de las necesidades de la FAP. *ANEXO 27 Fs. 1564-1579.*
28. Copia del memo I-70-COFA-PE N° 381 por el cual el Comandante General de la FAP nombra a una Comisión Técnica Logística para viajar a Bielorrusia con la finalidad de comprobar y evaluar in situ el material aéreo y de Defensa Aérea ofrecido en venta por la Fuerza Aérea de Bielorrusia así como la capacidad de proporcionar soporte logístico y la capacidad de mantenimiento pre y post venta del Centro de Reparación Mayor de Baranovich. Esta Comisión es presidida por el Gral. Rolando Magni, e integrada por los Coroneles Felipe Reyes Morales y Oscar Zegarra Chávez para viajar a Bielorrusia *ANEXO 28 Fs. 1580.*
29. Copia de la oferta enviada por LINCA SA de fecha 29 de diciembre de 1995 y 16 de julio de 1995 al Comandante Gral. de la Fuerza Aérea del Perú, invitando a verificar in situ el estado técnico de 18 aviones MIG-29 serie 9/13. *ANEXO 29 Fs. 1581-1583.*
30. Copia de la carta enviada por LINCA SA al Ex Presidente, Alberto Fujimori, de fecha 8 de enero de 1996 recomendándole la adquisición de un paquete de Mig-29 Serie 9/13 de la República de Moldavia. *ANEXO 30 Fs. 1584-1587.*
31. Copia de la carta enviada por LINCA SA al Comandante Gral. de la Fuerza Aérea del Perú Waldo Richter Cruz adjuntando la oferta de la federación rusa sobre MIG-29 y equipos conexos. *ANEXO 31 Fs. 1588*
32. Copia del Informe I-70-COFA-PE-N° - 036, el mismo que contiene el esquema de fecha 22 de enero de 1996 elaborado por el nuevo CG de la FAP Waldo Richter recomendando dos etapas para la adquisición, considerando una estrategia general defensiva-ofensiva, y por tanto la necesidad de adquirir caza interceptores y equipar el resto de la flota aérea, requiriendo para una etapa de 266 millones y para la otra de 465 millones, con diversas sugerencias y cambios a decisiones en curso y propuestas planteadas. *ANEXO 32 Fs. 1589-1594.*
33. Copia del memo I-35-COFA-PE-N° 056 expedido por la Comandancia General FAP, de fecha 27 de febrero del 96 que nombra la Comisión que debía evaluar las ofertas técnico económicas que dan la base final para la operación. Esta Comisión, dirigida por el Mayor General Magni, es compuesta por los mismos 7 coroneles FAP que fueran designados por el ex Presidente Fujimori y el ex Ministro Malca, incorporándose el Comandante FAP Jorge López Ponce *ANEXO 33. Fs. 1595.*
34. Copia del Acuerdo N° 004-96 del Consejo Superior de la Fuerza Aérea por el que se recomienda la adquisición de los Mig-29 bielorrusos. *ANEXO 34 Fs. 1596.*

35. Resolución Ministerial N° 423 de fecha 9 de mayo de 1996 por la que se Designa al Mayor General Fuerza Aérea del Perú Rolando Magni Flores para que suscriba los contratos de deriven del decreto de urgencia 028 de fecha 6 de mayo de 1996. Ax. 35 Fs. 1577.
36. Copia del memorando I-70-COFA -PE-N° 121 de la Comandancia Gral. FAP al Mayor General FAP Rolando Magni por el que se le comunica que deberá coordinar con el Ministerio de Economía los aspectos económico financieros correspondientes a la suscripción del contrato de los MIG-29. Ax. 36 Fs. 1598-1599.
37. Copia de las facturas referidas a la adquisición de los Mig -29 y SU-25. Ax. 37 Fs. 1600-1654.
38. Copia del Certificate of Transfer of Title to the Goods de fecha 13 de mayo de 1996, por el que la República e Bielorrusia transfiere los títulos de propiedad sobre los Mig-29 serie 9.13 al Ministerio de Defensa de Perú. Ax. 38 Fs. 1655.
39. Documento que acredita la constitución de la Empresa Treves-Intora Association Ltda el 25 de octubre de 1995 en las Bahamas. Ax. 39 Fs. 1656-1675.
40. Copia de la tardía solicitud (27-02-98) de inscripción de Beltechexport, (representados por Treves Inttora) en el registro de proveedores de la FAP para participar como proveedor en los procesos de adquisición. Ax. 40 Fs. 1676-1677.
41. Copia del oficio de fecha 27 de febrero de 1998 por el que Beltechexport, (representados por Treves Inttora) autoriza a destruir documentación presentada si es que no recoge credencial en 90 días. Ax. 41 Fs. 1678.
42. Copia de la licencia de proveedora de armas de Beltechexport (original y traducción literal) de la que se desprende que dicha empresa tenía permiso para operar hasta el 31 de diciembre de 1999. Ax. 42 Fs. 1679.
43. Copia del compromiso de suministrar MIG-29 y Su-25 al Gobierno Peruano por parte de la proveedora de armas de Beltechexport (original y traducción literal), compromiso de fecha 11 de noviembre de 1997. Ax. 43 Fs. 1680-1681.
44. Copia de la ficha estatal de registro en la República Bielorrusa de Beltechexport (original y traducción literal), registro de fecha 26 de enero de 1993. Ax. 44 Fs. 1683-1684.
45. Copia del Memorándum de asociación de Treves Intora. Ax. 45 Fs. 1685-1689.
46. Certificado de incorporación en las Bahamas de Treves Intora como compañía de negocios internacionales. Ax. 46 Fs. 1690.
47. Copia de la carta de la federación rusa de fecha 17 de abril de 1996 por la que sostiene que las firmas SMM Intora & W-21 Intertecchnique y Beltech Export no son proveedores de armamento autorizados Ax. 47 Fs. 1691

RESPECTO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AVIONES EI SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AVIONES

48. Copia del Oficio N° 7192 MD-H de 14 de octubre de 1997, a través del cual el General EP Cesar Saucedo Sánchez, Ministro de Defensa, solicitó al ingeniero Jorge Carnet Dickman, Ministro de Economía y Finanzas, disponer que los US \$ 23 000

- 000,00 asignados mediante el Decreto de Urgencia secreto N° 060-97 de 25 de junio de 1997 a la Unidad Ejecutora 003 – Defensa Terrestre, se depositen como fondos colaterales en el Banco de la Nación. Ax. 48 Fs. 1692.
49. Copia del Oficio N° 7208 MD-H de 30 de octubre de 1997, a través del cual el General EP Cesar Saucedo Sánchez, Ministro de Defensa, solicitó al ingeniero Jorge Camet Dickman, Ministro de Economía y Finanzas, disponer que los US \$ 45 000 000,00 asignados mediante el Decreto de Urgencia secreto N° 060-97 de 25 de junio de 1997 a la Unidad Ejecutora 003 – Defensa Terrestre, se depositen como fondos colaterales en el Banco de la Nación. Ax. 49 Fs. 1693 - 1694.
50. Copia del Oficio N° 7266 MD – H de 05 de diciembre de 1997, a través del cual el General EP Cesar Saucedo Sánchez, Ministro de Defensa, solicitó al ingeniero Jorge Camet Dickman, Ministro de Economía y Finanzas, disponer que los US \$ 23 000 000,00 asignados mediante el Decreto de Urgencia secreto N° 060-97 de 25 de junio de 1997 a la Unidad Ejecutora 003 – Defensa Terrestre, se depositen como fondos colaterales en el Banco de la Nación. Ax. 50 Fs. 1695.
51. Copia del Oficio N° I-55-COOP Nro. 1744 de 26 de diciembre de 1997, a través del cual el Mayor General FAP Carlos Modenesi Cobian, Comandante de Operaciones de la Fuerza Aérea, remitió al General del Aire Elesván Bello Vásquez, Comandante General de la Fuerza Aérea, el Acta de Coordinación COMOP-COMAT-Nro. 007-97 de fecha 26 de diciembre de 1997. Ax. 51 Fs. 1696.
52. Copia del Acta de Coordinación COMOP-COMAT-Nro. 007-97 de fecha 26 de diciembre de 1997, suscrita por el Mayor General FAP Rolando Magni Flores, Comandante de Material, y el Mayor General FAP Carlos Modenesi Cobian, Comandante de Operaciones, en la que informan al Comandante General de la Fuerza Aérea la situación operativa – logística de los aviones adquiridos, con la finalidad de alertarlo sobre las serias consecuencias que acarrearía el hecho de no solucionarse a la brevedad la problemática planteada. Ax. 52 Fs. 1697 - 1700.
53. Copia del Oficio N° I-67-COFA Nro. 053 de 26 de diciembre de 1997 suscrito por el General del Aire Elesván Bello Vásquez, Comandante General de la Fuerza Aérea, a través del cual informó al General EP César Saucedo Sánchez, Ministro de Defensa, de los requerimientos logísticos para los sistemas de armas "A" y "B". Ax. 53 Fs. 1701 - 1703.
54. Copia del Oficio Nro. 10760-97DE/DM de 29 de diciembre de 1997, suscrito por el General EP César Saucedo Sánchez, Ministro de Defensa, con el que hizo de conocimiento del ingeniero Jorge Camet Dickmann, Ministro de Economía y Finanzas, los requerimientos logísticos para los sistemas de armas "A" y "B" mediante. Ax. 54 Fs. 1704 - 1705.
55. Copia del Oficio N° 003-98.EF/10 de 06 de enero de 1998 que contiene la respuesta del ingeniero Jorge Camet Dickmann, Ministro de Economía y Finanzas, al General EP César Saucedo Sánchez, Ministro de Defensa. Ax. 55 Fs. 1706 - 1709.
56. Copia del Carta de 29 de mayo de 1998 cursada por la empresa Treves Intora Association Ltd al ingeniero Jorge Camet Dickman. Ax. 56 Fs. 1710 - 1714.
57. Copia del Oficio N° 0051 y 0053-98-DE de 31 de julio y 3 de agosto de 1998 respectivamente, a través del cual el General EP Cesar Saucedo Sánchez, Ministro de

Defensa, solicitó al señor Jorge Baca Campodónico; Ministro de Economía y Finanzas, la transferencia inmediata de US \$ 30 000 000,00 (Treinta millones de Dólares de Estados Unidos de América) que fueron aprobados mediante Decreto de Urgencia 038-98. Ax. 57 Fs. 1715-1717.

58. Copia de los Documentos que sustentan el abono de US \$ 30 000 000,00 en la cuenta corriente N° 62-000-003129 de la Fuerza Aérea del Perú. Ax. 58 Fs. 1718-1723.
59. Copia de los Documentos que sustentan el pago adelantado de US \$20 000 000,00 a la empresa Treves Intora Association Ltd., de acuerdo con lo establecido en el Contrato N° I-FA-003-98 por servicios de mantenimiento de aeronaves. Ax. 59 Fs. 1724-1732.
60. Copia de los Documentos que sustentan el pago adelantado de US \$10 000 000,00 a la empresa Treves Intora Association Ltd., de acuerdo con lo establecido en el Contrato N° I-FA-004-98 por la adquisición de repuestos, material misceláneo y una volante de accesorios. Ax. 60 Fs. 1733-1744.

3 MIG 29 NUEVOS

61. Copia del Decreto Supremo Urgencia 032-98 (suscrito por Fujimori, Saucedo, Baca Campodónico) para comprar a Rusia 03 MIG-29SE por \$ 126 millones de dólares. Ax. 61 Fs. 1745-1763.
62. Copia del contrato de compra venta RV/ 860411131003 por el conjunto de tres (3) Aviones MIG 29 y equipo diverso, contrato suscrito con la Empresa Federal Unitaria "COMPAÑÍA ESTATAL ROSVOORUZHENIE" de Rusia por un monto de US \$126'292,029.78 dólares. Ax. 62 Fs. 1769-2009.
63. Copia de los acuerdos suplementarios del contrato aludido en el numeral precedente. Ax. 63 Fs. 2010-2

AVION PRESIDENCIAL

64. Copia del Informe II-55-OPDP-N° 0359 de fecha cuatro de mayo de 1995, emitido por el Director de Operaciones de la Fuerza Aérea del Perú, Waldo Richter Cruz, sosteniendo la necesidad de adquirir un nuevo avión presidencial. Ax. 64 Fs. 2018-2021.
65. Decreto de Urgencia secreto N° 28-95 de 9 de mayo de 1995, que autorizó a los Programas 04 Ejército, 05 Marina de Guerra y 06 Fuerza Aérea, del Pliego 26 Ministerio de Defensa, a adquirir mediante adjudicación directa, exonerada de licitación, concurso de méritos y de concurso de precios públicos o privados, los bienes y servicios, contratación de obras efectuadas y por efectuar durante el ejercicio 1995, que sean necesarias para apoyar el Sistema Logístico de las Fuerzas Armadas. Ax. 65 Fs. 2022.
66. Copia del Acta N° 06-CSFA-95 y del Acuerdo N° 06-CSFA-95, ambos de fecha veintiuno de junio de 1995, documentos mediante los cuales el Consejo Superior de la Fuerza Aérea del Perú, recomendó la adquisición de un avión Boeing 737-528 (avión básico) y un paquete de repuestos para 1,000 horas de operación, ofertado por la empresa The Boeing Company. Ax. 66 Fs. 2023-2027.
67. Copia del Oficio IV-170-DEDT N° 1174 de fecha cuatro de julio de 1995, ordenando un giro cablegráfico a favor de The Boeing Company por la suma de US\$ 271 200,00 (doscientos setenta y un mil doscientos dólares de los Estados Unidos de

Norteamérica), sin que mediara ningún contrato, ni acuerdo, respecto a la adquisición del avión presidencial. Ax. 67 Fs. 2028 - 2031.

68. Resolución Suprema Nº 0323-DE/FAP de diez de julio de 1995, suscrita por el ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, Presidente de la República, y el General Víctor Malca Villanueva, Ministro de Defensa, nombrando al Mayor General FAP Enrique González Vásquez, Comandante General del Ala Aérea Nº 2, como representante del Gobierno del Perú para que intervenga en la suscripción del contrato de adquisición, recepción y traslado del avión Boeing 737-500. Ax. 68 - Fs. 2032 - 2034.
69. Copia del contrato de compra Nº 1883 con The Boeing Company para la adquisición de una aeronave Boeing, Modelo 737-528. Ax. 69 Fs. 2035 - 2060.
70. Copia de la factura Nº 38506 emitida por The Boeing Sales Corporation. Ax. 70 Fs. 2061 - 2063.
71. Copia del Decreto de Urgencia Secreto Nº 046-95 de ocho de agosto de 1995, suscrito por Alberto Fujimori Fujimori, Presidente de la República, Dante Córdova Blanco, Presidente del Consejo de Ministros, Jorge Camet Dickman, Ministro de Economía y Finanzas y Víctor Malca Villanueva, Ministro de Defensa, autorizando a la Dirección General de Presupuesto Público y a la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas a calendarizar y girar, respectivamente, al Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea del Perú, la suma de S/.67 000 000 (sesenta y siete millones de nuevos soles), con cargo a la fuente de financiamiento del Tesoro Público. Ax. 71 Fs. 2064 - 2065.
72. Copia del Oficio IV-170-DEDT Nº 1499, redactado el mismo día que se emitió el decreto ordenando la emisión de un giro cablegráfico a favor de The Boeing Company, ésta vez por una suma ascendente a US\$ 2 500 000 (dos millones y medio de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). Ax. 72 Fs. 2066 - 2069.
73. Copia del Oficio IV-170-DEDT Nº 1633⁽¹²⁾ de fecha veinticinco de agosto de 1995, suscrito por el Mayor General FAP Javier Pasco Valladares, el Comandante FAP Alfredo Landeo Lema y el señor Atilio Valencia Bendezú ordenando la emisión de un giro cablegráfico a favor de The Boeing Company, ésta vez por un importe ascendente a US\$ 22 228 800,00 (veintidós millones doscientos veintiocho mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). Ax. 73 Fs. 2070 - 2071.
74. Copia del Facsímil Nº 1294 de fecha 27 de octubre de 1995, suscrito por el Mayor General FAP Javier Pasco Valladares, ordenando la emisión de un giro cablegráfico a favor de The Boeing Company, ésta vez por un importe ascendente a US\$ 2 108 216,63 (dos millones ciento ocho mil doscientos dieciséis y 63/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). Ax. 74 Fs. 2072.
75. Copia del pedido de fecha trece de agosto de 1995, Pedido Nº 3225-EP-SAT-95, solicitando la adquisición de un Boeing modelo 737-528 (básico), configuración ejecutivo presidencial, sistema auxiliar de combustible con capacidad para 6700 libras y paquete de repuestos para 1000 horas de operación valorizado en US\$ 29 394 796, 91 (veintinueve millones trescientos noventa y cuatro setecientos noventa y seis y 91/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), monto que coincide con el monto consignado en el Contrato de Compra Nº 1883. Ax. 75 Fs. 2073 - 2073.
76. Copia del Acta JURA Nº 337 de fecha catorce de agosto, suscrita por los integrantes de la Junta de Régimen Administrativo de Unidad (JURA) del Servicio de Abastecimiento de la FAP, en la que recomendaron adquirir el avión Boeing 737-528 (básico) y paquete de repuestos para 1000 horas de operación ofertado por The Boeing Company, por que según su opinión cumplía con los criterios establecidos en

FMA
Copia Original

- el Anexo IV del Estudio de la Comisión Evaluadora; así como también recomendaron adquirir el interior de la aeronave. Ax 76 Fs 2079 - 2081.
77. Copia de la Resolución Ministerial N° 1574-DE/FAP-CE, por la que se aprueba en vía de regularización, la adjudicación directa que efectuó el Programa N° 06 Fuerza Aérea en la modalidad de compra privada, conforme al Pedido N° 32225-EP-SAT-95. Ax 77 Fs. 2072 - 2073
78. Copia de las ordenes de compra – guías de internamiento de fecha 30 de diciembre de 1995, para "adquirir" el avión presidencial. Ax 78 Fs. 2086 - 2090.
79. Copia del Oficio N° II-67-SADT-N° 0018 de 13 de enero 1997, solicitándose el alta de inventarios de una aeronave Boeing, Modelo 737- 528, asignada al Grupo Aéreo N° 8. Ax. 79 Fs 2091
80. Copia del Decreto Supremo Secreto N° 021-DE/FAP de fecha 25 de abril de 1997 firmado por el Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, Presidente de la República, el General Tomás Castillo Meza, Ministro de Defensa, el Coronel Luis Vera Betancourt, Secretario de Coordinación y Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa y el Mayor General FAP Carlos Portillo Vásquez, Secretario General de la FAP, aprobando el alta de los inventarios de la aeronave Boeing, Modelo 737-528 y asignándola al Grupo Aéreo N° 8." Ax. 80 . Fs. 2092 - 2093 .

SEGUNDO OTROSI DIGO: A fin de contarse con medios probatorios de carácter técnico, solicitamos se requiera al Ministerio de Defensa y a la Contraloría General de la República, copia de los informes o auditorías realizadas en relación a los hechos materia de esta denuncia constitucional. Asimismo, solicitamos que se solicite que la Contraloría General de la República realice una auditoria respecto a los dispositivos secretos aún no auditados expedidos entre julio de 1990 y julio del año 2000, a fin de determinar con precisión el destino de dichos caudales públicos en el sector Defensa, tanto en el Ejército Peruano, como en la Marina de Guerra de Perú y en la Fuerza Aérea del Perú, denunciándose, de ser el caso, las irregularidades detectadas.

TERCER OTROSI DIGO: Solicitamos se realicen las investigaciones correspondientes a fin de determinar la posible comisión del **delito de enriquecimiento ilícito (art. 401 del CP)** por parte de los denunciados a raíz de los hechos materia de la presente denuncia. Para tal fin, por la vía más expedita de las señaladas en el Art. 2 núm. 5 de la Constitución y en el Art. 2 núm. 5 de la Ley N° 27379 de 21 de diciembre de 2000, pedimos se **solicite el levantamiento del secreto bancario y tributario de los denunciados.**

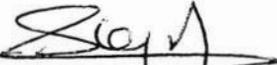
CUARTO OTROSI DIGO: Al amparo del Art. 2, núms. 1, 2 y 3 de la Ley N° 27379 de 21 de diciembre de 2000 y atendiendo a la suficiencia de las pruebas que se adjuntas, como a la gravedad de los delitos imputados que expresan un indudable peligro procesal (riesgo de fuga y desaparecimiento de pruebas), solicitamos que en el término de la distancia se solicite al Poder Judicial la adopción de medidas limitativas de derechos contra los denunciados, durante la investigación preliminar que pueda llevar adelante su Despacho, concretamente las de detención preliminar, impedimento de salida del país y embargos.

QUINTO OTROSI DIGO: En orden a mantener el pleno respeto del principio de *ne bis in idem*, en virtud del cual no cabe la persecución penal múltiple por el mismo delito (*ne bis in idem* procesal), solicitamos que durante la investigación preliminar que pueda desplegar su Despacho a raíz de esta denuncia, se determine si uno más de los denunciados ya están sujetos a investigación ante el Poder Judicial a raíz de los hechos que motivan la presente imputación. De ser así, pedimos que esta denuncia y cualquier otra, incluyendo los procesos judiciales en curso vinculados o conexos, se acumulen en una sola investigación a fin de garantizar un único y coherente juzgamiento de los imputados.

Lima, 28 de Setiembre del 2001



JAVIER DIEZ CANSECO CISNEROS
Congresista de la República



WALTER ALEJOS CALDERÓN
Congresista de la República



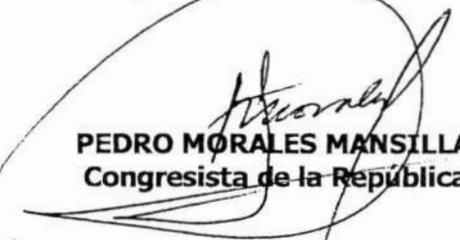
MÁXIMO MENA MELGAREJO
Congresista de la República



KUENNEN FRANCESA MARABOTTO
Congresista de la República



JUAN VALDIVIA ROMERO
Congresista de la República



PEDRO MORALES MANSILLA
Congresista de la República



MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Congresista de la República